



**AMPARO EN REVISION 2639/90.
FERNANDO ARREOLA VEGA.**

**MINISTRO PONENTE: MARIANO AZUELA GÜITRÓN.
SECRETARIO: ARIEL ALBERTO ROJAS CABALLERO.**

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintisiete
de enero de mil novecientos noventa y ocho.

VISTO BUENO

MINISTRO

VISTOS; y

RESULTANDO:

Primero. Por escrito presentado el quince de marzo de mil
novecientos noventa y seis, en la Oficialía de Partes Común a los
Juzgados de Distrito en Morelia, Michoacán, turnado al Juez Tercero
en dicha jurisdicción, Fernando Arreola Vega, por su propio derecho,
solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las
autoridades y por los actos que a continuación se indican:

AUTORIDADES RESPONSABLES.

- "a). Gobernador Constitucional del Estado de
"Michoacán;
- "b). H. Congreso del propio Estado;
- "c). H. Pleno del Supremo Tribunal de Justicia de la
"Entidad. Los domicilios de tales autoridades
"responsables se encuentran bien conocidos en los

COTEJADO

AMPRO EN REVISION 2024

"Palacios de Gobierno, Legislativo y de Justicia,
"respectivamente, de esta ciudad capital.

"ACTOS RECLAMADOS:

"a). Del ciudadano Gobernador Constitucional del
"Estado de Michoacán, reclamo la propuesta que
"formuló al H. Congreso de la Entidad para que se
"designaran por éste a diez nuevos magistrados del
"Supremo Tribunal de Justicia, que sustituyeran a igual
"número de magistrados que hasta el veintidós de
"febrero del presente año venían desempeñando tan
"elevado cargo, entre los que se hallaba el suscrito
"quejoso, pese a su calidad de Magistrado inamovible,
"según lo demostraré:

"b). Del H. Congreso del Estado, reclamo la aprobación
"que llevó a cabo de la referida propuesta el titular del
"Poder Ejecutivo, en sesión efectuada por la LXVII
"Sexagésima Séptima Legislatura, el precitado 22
"veintidós de febrero retropróximo, sin que jamás me
"hubiere notificado siquiera su determinación a través
"de mandamiento escrito, que fundara y motivara la
"causa legal del procedimiento, así como sin que
"tampoco hubiera mediado en mi contra juicio de
"responsabilidad, juicio político, ni procedimiento cuar



AMPARO EN REVISIÓN 2639/90

"ninguno, en los términos del artículo 116, fracción II,
"penúltimo párrafo de la Constitución General de la
"República, en relación con el precepto 72, primer
"párrafo, de la Constitución Particular del Estado, donde
"se me hubiese oído, dado que por mi calidad de
"Magistrado inamovible tengo pleno derecho a ello, ni
"menos aún, en donde se me haya vencido;
"reclamando, igualmente, todas las consecuencias
"jurídicas de dicha determinación, en especial, la
"sustitución del cargo de Magistrado que hasta
"entonces todavía yo desempeñaba, adscrito a la
"Quinta Sala Civil del multicitado Supremo Tribunal;
"c). Por último, reclamo del H. Pleno del Supremo
"Tribunal de Justicia de esta Entidad Federativa, el
"acuerdo tomado en la sesión de la misma fecha a que
"me he venido refiriendo, para adscribir en sustitución
"mía, como nuevo Magistrado de la Quinta Sala Civil de
"ese Cuerpo Colegiado, al Licenciado Felipe Rojas
"López; reclamando además todas las consecuencias
"jurídicas que de ello se hubieren derivado."

Segundo. El quejoso señaló como tercero perjudicado al
Licenciado Felipe Rojas López, carácter que le fue reconocido en el
juicio, quedando debidamente emplazado a éste.

AMPARO EN REVISION 2639

Tercero. El promovente del juicio de garantías narró como antecedentes del caso los siguientes:

"1. A propuesta del entonces titular del Ejecutivo del
"Estado, la Sexagésima Tercera Legislatura al H.
"Congreso de la Entidad, en sesión celebrada el dos de
"enero de mil novecientos ochenta y seis, tuvo a bien
"designarme Magistrado del Supremo Tribunal de
"Justicia del mismo Estado, luego de que hasta
"entonces y desde el veinticuatro de septiembre de mil
"novecientos setenta y nueve, me vine desempeñando
"como Juez de Primera Instancia en diversos Distritos
"Judiciales de la geografía michoacana.

"2. El Pleno de aquel Máximo Tribunal de la Entidad me
"adscribió como Magistrado de la Primera Sala
"Colegiada en Materia Civil, adscripción que tuve hasta
"que, por desaparición de las Salas Colegiadas,
"también el H. Pleno me adscribió como Magistrado de
"la Quinta Sala Civil Unitaria, donde ejercí
"ininterrumpidamente mi función hasta el 22 veintidós
"de febrero del corriente año de 1996 mil novecientos
"noventa y seis, cuando fui sustituido por el Licenciado
"Felipe Rojas López, según adscripción que le dio a éste
"el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia en sesión de



AMPARO EN REVISION 2639/96

"la misma fecha.

"3. La sustitución de que se trata tuvo su causa eficiente,
"primero en la propuesta que el Gobernador
"Constitucional del Estado hizo a la Sexagésima Séptima
"Legislatura al Congreso de Michoacán, para que esta
"última designara a 10 diez nuevos magistrados de
"dicho Supremo Tribunal, que sustituyeran a otros tantos
"que hasta el pluraludido veintidós de febrero del
"presente año se desempeñaban con esa calidad,
"entre los cuales me incluí yo; y en segundo lugar, en
"la aprobación favorable de tal propuesta hecha por
"aquella Legislatura, en sesión de la propia fecha
"mencionada, no obstante que el suscrito quejoso,
"como lo habré de demostrar al producir mis conceptos
"de violación, era Magistrado inamovible por imperio
"constitucional".

Cuarto. La parte quejosa señaló como garantías violadas las consagradas en los artículos 14, 16 y 116, fracción III, de la Carta Magna, y precisó como conceptos de violación los siguientes:

"Primero. El párrafo segundo del artículo 14 de la
"Constitución General de la República, estatuye que:
"Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de
"sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante

AMPARO EN REVISION 2639

"juicio seguido ante los tribunales previamente
"establecidos, en el que se cumplan las formalidades
"esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes
"expedidas con anterioridad al hecho."

"Mientras que el primer párrafo del artículo 16 de la
"propia Ley Fundamental, dispone:

"Nadie puede ser molestado en su persona, familia
"domicilio, papeles o posesiones sino en virtud de
"mandamiento escrito de la autoridad competente,
"que funde y motive la causa legal del procedimiento."

"En el caso concreto, sostengo que los actos que
"reclamo de las diversas autoridades responsables en el
"presente juicio de amparo son violatorios de las
"garantías de audiencia, legalidad y seguridad jurídica

"consagradas por los transcritos preceptos
"constitucionales, y por el numeral 116, fracción III, de la
"misma Carta Magna, que en su penúltimo párrafo
"establece que los magistrados de los Poderes
"Judiciales de los estados", durarán en el ejercicio de su
"encargo el tiempo que señalen las Constituciones
"Locales, podrán ser reelectos, y si lo fueren, sólo podrán
"ser privados de sus puestos en los términos que
"determinen las Constituciones y las Leyes de



AMPARO EN REVISION 2639/96

"Responsabilidades de los Servidores Públicos de los
"estados."

"Ello es así, porque a su vez el artículo 72, párrafo
"primero, de la Constitución Particular del Estado de
"Michoacán en vigor, luego de su reforma por
"adecuación a la Constitución Federal ordenada por el
"H. Congreso de la Entidad, mediante Decreto número
"ciento treinta y dos que se publicó en el Periódico
"Oficial número 77 setenta y siete, Tomo CXI, Segunda
"Sección, del once de abril de mil novecientos ochenta
"y ocho, prescribe: "Los magistrados durarán tres años
"en el ejercicio de su encargo, podrán ser reelectos, y si
"lo fuesen, sólo podrán ser privados de sus puestos en los
"términos del Título Cuarto de esta Constitución y la Ley
"de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
"Estado".

En ahora bien, como ya lo manifesté en el capítulo de
"antecedentes de esta demanda de garantías"
"suscrito quejoso fui designado Magistrado del Supremo
"Tribunal de Justicia del Estado por la Sexagésima
"Tercera Legislatura al H. Congreso de la Entidad, en
"sesión de fecha dos de enero de mil novecientos
"ochenta y seis, a propuesta que en mi favor hizo el

AMPARO EN REVISION 2639.

"entonces titular del Poder Ejecutivo del mismo Estado,
"según lo demuestro por ahora con fotocopia
"certificada de mi nombramiento respectivo, a reserva
"de abundar en tal prueba durante la substanciación
"del presente juicio; cargo que desempeñé desde ese
"día y hasta el veintidós de febrero del corriente año de
"mil novecientos noventa y seis, de manera
"ininterrumpida, primero adscrito a la Primera Sala
"Colegiada en Materia Civil y luego a la Quinta Sala
"Civil Unitaria, cuando se presentó a sustituirme con ese
"carácter el Licenciado Felipe Rojas López, hoy tercero
"perjudicado, por así haberlo adscrito, en sesión de la
"misma fecha, el Pleno del referido alto Tribunal de la
"Entidad, lo que también justificaré en debida forma
"oportunamente.

"Como puede verse, fungí como Magistrado Propietario
"durante un lapso de diez años, un mes y veinte días
"que rebasan con exceso, a todas luces, los tres años
"que el invocado párrafo primero del artículo 72 de la
"Constitución vigente para el Estado de Michoacán
"exige debe durar el período constitucional de todo
"Magistrado.

"En otras palabras, a partir de la fecha de mi



AMPARO EN REVISION 2639/96

"designación por el Congreso Local, ejercí mi encargo
"hasta la fecha en que culminó sus funciones (quince
"de septiembre de mil novecientos ochenta y seis) la
"Sexagésima Tercera Legislatura por la que fui
"designado; para después seguirlo ejerciendo durante
"los tres períodos constitucionales completos inmediatos
"subsecuentes, de tres años cada uno, que
"correspondieron a las funciones de la Sexagésima
"Cuarta, de la Sexagésima Quinta y de la Sexagésima
"Sexta Legislaturas del Congreso de la Entidad;
"habiéndome incluso desempeñado todavía como
"Magistrado desde que inició funciones la actual
"Sexagésima Séptima Legislatura, que aquí resulta
"autoridad responsable (quince de diciembre de 1995
"mil novecientos noventa y cinco), hasta el
"multimencionado veintidós de febrero de la anualidad
"que cursa; circunstancias todas las anteriores que
"conducen a inferir que fui reelecto o ratificado, de
"manera tácita, cuando menos por las tres Legislaturas
"al Congreso del Estado inmediatas posteriores a la que
"me designó como Magistrado, habiendo completado
"insisto tres períodos constitucionales de tres años cada
"uno, y aún más, en forma ininterrumpida, según lo

AMPARO EN REVISION 2639/

"acredito de momento con fotocopias certificada de
"las diferentes credenciales oficiales que
"oportunamente me fueron expedidas por los
"respectivos Presidentes de la Gran Comisión del
"Congreso Local, la primera, con validez para el año de
"mil novecientos ochenta y seis; la segunda, para el
"trienio de mil novecientos ochenta y seis a mil
"novecientos ochenta y nueve; la tercera, para el
"trienio de mil novecientos ochenta y nueve a mil
"novecientos noventa y dos; y la última, para el trienio
"de mil novecientos noventa y dos a mil novecientos
"noventa y cinco; credenciales que, incluso, permiten
"demostrar que mis reelecciones o ratificaciones en el
"cargo fueron expresas, debido a que en tales
"documentos se especificaron los plazos por los cuales
"se me estaba acreditando en la función de la
"Magistratura.
"No obsta para arribar a la precedente conclusión, el
"hecho de que el artículo 80 de la Constitución
"Particular de nuestra Entidad Federativa, disponga:
"Los magistrados continuarán en sus funciones aunque
"haya fenecido su período constitucional o el plazo
"para el que fueron nombrados, mientras no se



AMPARO EN REVISION 2639/96

"presenten los nuevamente designados".

"Y es que tal norma debe interpretarse
"sistemáticamente y no tan solo en forma gramatical o
"literal, en estrecha vinculación con el artículo 72,
"primer párrafo, de dicha Carta constitucional, en el
"sentido de que sólo podrá nombrarse a un Magistrado
"que sustituya al que ya hubiere concluido su encargo o
"el plazo para el que se le nombra y continuare -pese a
"ello- desempeñándolo, mientras que semejante
"situación no se prolongue, cuando menos, por el
"tiempo equivalente a otro período constitucional de
"tres años, por lo que, entonces, el no haberse designado
"Magistrado sustituto por el congreso, procede
"entenderlo -acordes con una lógica y sana crítica-
"como una reelección tácita del Magistrado que
"continuó en funciones por ese mismo período; al ser de
"entenderse también que si no fue sustituido, esto
"obedeció a que tanto el Ejecutivo (que propone)
"como el Congreso (que designa), le ratificaron de
"manera implícita su confianza para que continuara
"ejerciendo la magistratura; máxime si en el ínterin hubo
"como en el caso, según es un hecho notorio que
"desde ahora invoco, cambios diversos del Titular del

AMPARO EN REVISION 2639/

"Poder Ejecutivo del Estado, cambiando también las
"Legislaturas correspondientes y habiéndose producido,
"a la vez, diferentes cambios de magistrados,
"propuestos por cada uno de tales gobernadores y
"designados por las diversas Legislaturas (Sexagésima
"Cuarta, Sexagésima Quinta y Sexagésima Sexta), sin
"que en ningún momento el suscrito quejoso haya sido
"sustituido; lo cual significa igualmente que, por ende,
"de manera automática pasé a adquirir el derecho a la
"inamovilidad en mi cargo de Magistrado, tutelado por
"el artículo 72, párrafo primero, de la Constitución
"vigente en la Entidad, concordante del 116, fracción III,
"de la Constitución General de la República, al que le
"está subordinado atento el principio de supremacía
"constitucional que consagra el precepto 133 de
"misma Carta Magna, pues dicho artículo 116, fracción
"III, en su penúltimo párrafo, estatuye que los
"magistrados durarán en el ejercicio de su encargo el
"tiempo que señalen las Constituciones Locales,
"pudiendo ser reelectos, en cuyo caso sólo podrán ser
"privados de sus puestos en los términos que determinen
"las Constituciones y Leyes de Responsabilidades de los
"Servidores Públicos de los estados, imperativo jurídico



AMPARO EN REVISION 2639/96

"que ninguna de las autoridades que en esta demanda
 "señalo como responsables observó: el Gobernador
 "Constitucional del Estado, por haber propuesto mi
 "remoción o sustitución y el nombramiento de un
 "Magistrado sustituto; la Sexagésima Séptima Legislatura
 "al Congreso Local, por haber aprobado tales
 "propuestas, sin que jamás me hubiere notificado
 "siquiera su determinación a través de mandamiento
 "escrito, que fundara y motivara la causa legal del
 "procedimiento, y sin que tampoco hubiere mediado
 "en mi contra juicio de responsabilidad, juicio político, ni
 "procedimiento cual ninguno, donde se me hubiere
 "oído, dado que por mi calidad de Magistrado
 "inamovible tengo pleno derecho a ello; mientras que
 "el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia de la Entidad,
 "por haber adscrito en mi lugar al actual Magistrado de
 "la Quinta Sala Civil, Licenciado Felipe Rojas López.
 "Reafirmamos nuestro discernimiento, si tomamos en
 "cuenta que aun cuando el primer párrafo del
 "pluricitado artículo 72 alude de manera fría y lacónica
 "al acto de la reelección, a fin de obtener la
 "inamovilidad, lo cierto es que la omisión voluntaria o
 "involuntaria por parte de aquel a quien atañe la

AMPARO EN REVISION 2639/90

"propuesta para reelegir a un Magistrado (o sea el
"titular del Poder Ejecutivo), no puede constituir un
"obstáculo para que esa auténtica garantía
"constitucional consagrada por el Pacto Federal opere
"también, tácita o implícitamente, en favor del
"Magistrado de que se trate, puesto que lo
"trascendental es que éste reúna los requisitos
"substanciales para hacerse acreedor a esa garantía,
"como lo son carrera judicial, antigüedad en el cargo,
"vocación, experiencia, probidad, capacidad para
"juzgar, honorabilidad, etcétera, mismos que el que
"suscribe estima haber satisfecho durante más de 6
"años de desempeño ininterrumpido como Juez Mixto
"de Primera Instancia en el Distrito Judicial de Zacapu,
"Juez Tercero Mixto de Primera Instancia en el Distrito
"Judicial de Uruapan, Juez Segundo de Primera
"Instancia en Materia Civil en el Distrito Judicial de
"Morelia, Michoacán; aparte de los más de 10 diez años
"de desempeño, también continuo, como Magistrado
"del Supremo Tribunal de Justicia de la Entidad, lo que
"se probará adecuadamente durante el trámite de este
"juicio de amparo, limitándome por el momento a
"exhibir copia simple de mi hoja de servicios dentro del



AMPARO EN REVISION 263.

"Poder Judicial Michoacano.

"No aceptarlo así, sería empañar el espíritu que animó
"al legislador a la creación de la inamovilidad judicial y
"desestimar sus bondades, fomentando en cambio la
"inseguridad e incertidumbre en aquellos magistrados
"que, como el suscrito, cumplieron con demasía las
"puntualizadas exigencias constitucionales y se
"enfrentan al hecho no imputable a ellos de que en su
"caso particular no medió una segunda propuesta para
"aspirar a su anhelada reelección, que de ninguna
"manera puede estar supeditada a la eventual
"contingencia de que esa propuesta la realice o no,
"aquel a quien corresponde.
"A mayor abundamiento, bajo el inadmitido supuesto
"de que la cuestionada propuesta de reelección de un
"Magistrado sí se tradujese en una condición sine qua
"non para poder obtener su inamovilidad, no obstante
"el haber reunido los requisitos substanciales ya
"mencionados, ello atentaría contra la persona y los
"derechos del Magistrado no reelecto expresamente,
"pero tampoco sustituido -cuando menos- durante un
"período constitucional de 3 tres años inmediato
"posterior al primero que hubiere cumplido en su cargo,

AMPARO EN REVISION 2639/70

"porque infringiría su derecho a la estabilidad en el
"trabajo y las garantías de audiencia, legalidad y
"seguridad jurídica previstas por los artículos 14 y 16
"constitucionales -como aquí acontece-, pues aun
"cuando permaneciera ejerciendo como Magistrado
"diez, quince, veinte años o más, siempre estaría
"expuesto a la eventualidad de que, el día menos
"pensado, se presente un Magistrado sustituto que lo
"desplazara, extremo por completo absurdo, no
"solamente por contrario a la interpretación sistemática
"de los preceptos constitucionales inherentes ya
"analizados, sino por inicuo, antihumano, irracional y
"opuesto al más elemental respeto a la consideración y
"al decoro que merecen la dignidad y la investidura
"judiciales. O expuesto de otra forma: porque en
"semejante hipótesis, se transgredirían flagrantemente
"los principios de independencia, autonomía y equilibrio
"que necesariamente deben regir entre los diversos
"Poderes en que se divide para su ejercicio el Poder
"Público, habida cuenta, asimismo, que la multirreferida
"inamovilidad judicial dependería caprichosamente del
"querer subjetivo del gobernante en turno, no de la Ley,
"que es la que debe estimarse como su fuente



AMPARO EN REVISION 2637/93

"primigenia, cuando que además el fin constitucional
"de la inamovilidad del Magistrado es garantizar a éste
"su estabilidad emocional e independencia tanto
"económica como política del que lo propone y del
"que lo designa, sin estar expuesto a la zozobra o
"incertidumbre de si continúa o no en ~~el~~ cargo, de ahí
"que la inamovilidad opera por ~~el~~ simple transcurso del
"tiempo en el desempeño de la función durante, por lo
"menos, dos períodos constitucionales consecutivos de
"tres años cada uno: artículo 116, fracción III, penúltimo
"párrafo, de la Constitución Federal, y 72, primer
"párrafo, de la Local del Estado de Michoacán.
"Un gobierno que reconoce, respeta y asegura a
"inamovilidad de jueces y magistrados, es un gobierno
"que fortalece la independencia del Poder Judicial
"dignificándolo ante los ojos de sus gobernados, ya que
"los buenos juzgadores no se improvisan, sino que
"requieren del transcurso de años de estudio y práctica
"en los tribunales para adquirir la aptitud que les permita
"una justa aplicación de la Ley. Por lo demás, no debe
"perderse de vista que la inamovilidad en el cargo fue
"creada para proporcionar a los servidores de la
"administración de justicia la seguridad de que,

AMPAHO EN REVISION 2639/90

"mientras su conducta sea apegada al derecho y a la
"justicia, gozarán de la permanencia en su puesto, ya
"que sin estabilidad en el ejercicio de su cargo, la
"independencia de criterio que precisan se ve
"considerablemente disminuida.

"En apoyo de nuestro aserto en el sentido de que la Ley
"no descarta la forma tácita de reelección o
"ratificación para el cargo de Magistrado, obra
"igualmente el artículo 1661 del Código Civil de la
"Entidad (idéntico al 1803 del Código Civil vigente para
"el Distrito Federal en materia del fuero común y para
"toda la República en materia del fuero federal), que
"establece que el consentimiento tácito resulta de
"hechos o de actos que lo presupongan o que
"autoricen a presumirlo, "excepto en los casos en que
"por Ley o por convenio la voluntad deba manifestarse
"expresamente", supuesto este último que no se da en la
"especie, pues el artículo 72, primer párrafo, de la
"Constitución Particular en vigor para esta Entidad
"Federativa no exige que la reelección de un
"Magistrado tenga que ser expresa y sí, en cambio, la
"falta de remoción o sustitución del suscrito quejoso en
"su calidad de Magistrado del Supremo Tribunal de



AMPARO EN REVISION 2639/96

"Justicia de la Entidad durante más de 10 diez años
 "ininterrumpidos como tal, pese a reiterados cambios
 "de titulares del Poder Ejecutivo y de las Legislaturas
 "Locales correspondientes durante ese lapso, así como
 "pese a diferentes sustituciones o remociones que
 "durante el mismo sí se hicieron de otros magistrados
 "que concluyeron un primer período constitucional de
 "tres años, sin duda cabe entenderla como un acto o
 "un hecho evidente que presuponen o que autorizan a
 "presumir que, fue voluntad de esos gobernadores y
 "congresos, reelegirme fácilmente para los períodos
 "constitucionales respectivos, generando mi
 "inamovilidad.
 "Pero incluso si el presitado primer párrafo del artículo
 "72 de la Carta Constitucional Michoacana exigiese -no
 "lo hace, insistimos- que la reelección de un Magistrado
 "fuera que ser expresa, ello resultaría inatendible, por
 "el contrario al principio de supremacía constitucional
 "imbitito en el artículo 133 del Pacto Federal, ya que
 "éste, en su artículo 116, fracción III, no condiciona la
 "inamovilidad de los magistrados de las entidades
 "federativas a que sean reelectos de manera expresa,
 "lo cual se traduce en un nuevo motivo de

AMPARO EN REVISION 2639/96

"Inconstitucionalidad de los actos de autoridad
"reclamados, contra los que pido concederme el
"amparo y protección de la Justicia Federal, a fin de
"que se me restituya en el goce de las garantías
"individuales que fueron violadas en mi perjuicio, pues
"donde hay la misma razón, debe aplicarse la misma
"disposición, cuyo principio general de derecho dejaron
"de observar las responsables con motivo de los actos
"reclamados, violentando lo dispuesto por el último
"párrafo, infine, del artículo 14 constitucional.

"Segundo. Bajo otro orden de ideas, quizás pudiera
"pensarse que el problema de la inamovilidad que nos
"ocupa deba abordarse a la luz del texto que tenía el
"primer párrafo del artículo 72 de la Constitución

"Particular del Estado, antes de su reforma por
"adecuación al penúltimo párrafo de la fracción III del
"artículo 116 de la Carta Magna de todos los
"mexicanos, del once de abril de mil novecientos
"ochenta y ocho, por ser el que estaba vigente cuando
"fui nombrado Magistrado el dos de enero de mil
"novecientos ochenta y seis, que a la sazón prevenía:

"Los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia
"durarán en sus cargos tres años, pudiendo ser



AMPARO EN REVISION 2639/96

"reelectos; los designados para tres períodos

"consecutivos, serán inamovibles...".

"Sin embargo, aun en tal inaceptada hipótesis, pues la

"reforma de que se trata sí me resulta aplicable

"retroactivamente conforme al párrafo primero del

"artículo 14 constitucional, ya que ~~me~~ favorece, al

"haber suprimido la exigencia de designación para tres

"períodos consecutivos a fin de poder aspirar a la

"inamovilidad en el cargo de Magistrado del Supremo

"Tribunal de Justicia del Estado, por la de una sola

"reelección (retroactividad acerca de la que también

"es aplicable la jurisprudencia número 464 sustentada

"por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que

"puede consultarse en la página 309 del Tomo VI,

"Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de

"la Federación de 1917 a 1995, y que a la letra reza:

§ "RETROACTIVIDAD DE LA LEY. SE PROTEGE CONTRA LA.

"SI CAUSA PERJUICIO. La Constitución General de la

"República consagra el principio de la irretroactividad

"cuando la aplicación de la Ley causa perjuicio a

"alguna persona, de donde es deducible la afirmación

"contraria, de que pueden darse efectos retroactivos a

"la Ley, si ésta no causa perjuicio"); lo cierto es que,

AMPARO EN REVISION 2639/56

"congruentes con aquel texto reformado del numeral
"72, primer párrafo de la Constitución Local, asimismo
"tendría el suscrito quejoso derecho a considerar que,
"antes de que fuera sustituido inicuaamente en mi puesto
"de Magistrado de la Quinta Sala Civil del Supremo
"Tribunal de Justicia de la Entidad, ya tenía el carácter
"de Magistrado inamovible, simple y sencillamente
"porque, como lo dejé expuesto de manera amplia en
"el concepto de violación inmediato anterior, a cuyo
"contenido me remito para no caer en ociosas
"repeticiones, fui ratificado, nombrado, reelecto o
"designado (como quiera llamársele) en forma tal que
"para más de 3 tres períodos constitucionales de tres
"años cada uno, durante cuyo lapso jamás se me
"sustituyó o removi6 en el cargo, pese a que según
"un hecho notorio sí se dieron diversos cambios del
"Titular del Poder Ejecutivo del Estado, cambiando
"también varias Legislaturas Locales (de la Sexagésima
"Tercera a la Sexagésima Sexta, inclusive) y habiendo
"sido -ellos sí- sustituidos durante el mismo plazo.
"diferentes magistrados por los que propusieron los
"sucesivos gobernadores correspondientes, nombrados
"a su vez por cada una de las Legislaturas al Congreso



AMPARO EN REVISION 2639/96

"en la Entidad que entonces estuvieron en funciones,
"todo lo cual deriva en actos o hechos que presuponen
"o que autorizan a presumir mi reelección tácita en el
"multicitado cargo que ostentaba, por deducirse que si
"en todo ese largo tiempo que permanecí ejerciendo
"nunca me fue designado un sustituto, sin duda
"obedeció a que aquellos gobernadores y congresos
"me ratificaron implícitamente su confianza en mi
"idoneidad para desempeñar la honrosa, delicada y
"elevada función de Magistrado; pudiendo agregarse
"que esa ratificación fue incluso hasta expresa, al
"habérseme expedido por las legislaturas
"correspondientes mis identificaciones como
"Magistrado para cada período constitucional.
"Luego no habiéndolo determinado así tampoco las
"autoridades que en esta demanda señalo como
"responsables, su proceder vuélvese infractor también
"de las distintas garantías individuales, normas
"constitucionales locales y normas legales secundarias
"con todo detalle examinadas en el punto inmediato
"precedente, por las razones y fundamentos que allí
"mismo se indican, de modo que para reparar las
"consiguientes violaciones, suplico se me conceda la

AMPARO EN REVISION 2639/96

"protección constitucional que proceda".

Quinto. La Secretaria del Juzgado, encargada del despacho por ministerio de ley por acuerdo de dieciocho de marzo de mil novecientos noventa y seis, admitió la demanda, que fue registrada con el número 204/96, tuvo como tercero perjudicado al Licenciado Felipe Rojas López, el cual fue debidamente emplazado al juicio y, seguido éste, se pronunció sentencia el treinta de agosto de mil novecientos noventa y seis, concluyendo con los siguientes puntos resolutivos:

"Primero. Se sobresee en el juicio de amparo,
"promovido por FERNANDO ARREOLA VEGA, en contra
"del acto que reclama al Gobernador del Estado de
"Michoacán, consistente en la propuesta de
"designación de magistrados, precisada en el
"resultando primero de este fallo, por las razones
"expuestas en el considerando cuarto del mismo.

"Segundo. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI
"PROTEGE al quejoso FERNANDO ARREOLA VEGA, de los
"actos que reclama de las autoridades precisadas en el
"resultando primero de este fallo, con la salvedad
"mencionada en el resolutivo anterior."

Las consideraciones en que se apoyó el juzgador para fallar en el sentido en que lo hizo, son:



AMPARO EN REVISION 2639/96

"Primero. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado,
"es competente para conocer y resolver esta
"controversia constitucional, de conformidad con los
"artículos 36, primer párrafo de la Ley de Amparo, 48 y
"52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial
"de la Federación.

"Segundo. Son ciertos los actos reclamados al
"Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán,
"y Congreso de la propia Entidad, así lo manifiestan
"estas autoridades al rendir su respectivo informe
"justificado. De igual manera es cierto el acto
"reclamado al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia
"del Estado, no obstante que al rendir su informe
"justificado el citado cuerpo colegiado, niega la
"existencia del acto reclamado, dicha negativa se ve
"desvirtuada, pues si bien es cierto que el quejoso le
"reclama el acuerdo tomado en la sesión del veintidós
"de febrero de mil novecientos ochenta y seis, para
"adscribir, en sustitución del quejoso, como nuevo
"Magistrado de la Quinta Sala Civil de ese Cuerpo
"Colegiado, al licenciado Felipe Rojas López, así como
"todas las consecuencias jurídicas que de ello se
"hubieren derivado; y, que en el acta número diez del

AMPARO EN REVISION 2639/

"veintidós de febrero de mil novecientos noventa y seis,
"que el Cuerpo Colegiado señalado como responsable,
"acompañó a su informe justificado, se asiente que a las
"trece horas de ese día se reunieron en el salón de
"sesiones del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, los
"señores magistrados Isidro Romero Silva, Ricardo Color
"Romero, María Cristina Torres Pacheco, Plácido Torres
"Pineda, Juvencio Camacho Acevedo, Marco Antonio
"Aguilar Cortés, Luis Alonso Rodríguez Nieto, José
"Rigoberto Díaz Zavala, Rita Armida Reyes Herrera,
"Ramón Núñez Álvarez, Ma. del Carmen González Velez
"Aldana, Rubén Puebla Calderón, Héctor Octavio
"Morales Juárez, Elva Gamiño Bedolla y Felipe Rojas
"López, bajo la presidencia del señor Magistrado Hugo
"Guillermo Lara Hernandez, en su calidad de Decano
"para celebrar Pleno Ordinario conforme al siguiente
"orden del día:
"I. Elección de Presidente del Supremo Tribunal de
"Justicia del Estado;
"II. Elección de Presidente sustituto;
"III. Adscripción a Sala de los señores magistrados;
"IV. Integración de Comisiones Permanentes; y,
"V. Asuntos Generales; que en relación al tercero de los



AMPARO EN REVISION 2639/90

"puntos de la orden del día, se asienta:

"El Presidente manifiesta que toca ahora de acuerdo al
 "orden del día, la adscripción a Salas de los señores
 "magistrados, pregunta si existen alguna propuesta, y
 "que si no existe ninguna otra propuesta, que le hicieron
 "pasar una, que es de la siguiente manera: Primera Sala
 "Civil, Magistrado Isidro Romero Silva; Segunda Sala
 "Civil, Magistrada Rita Armida Reyes Herrera; Tercera
 "Sala Civil, Magistrado Héctor Octavio Morales Juárez;
 "Cuarta Sala Civil, Magistrado Ricardo Color Romero
 "Quinta Sala Civil, Magistrado Felipe Rojas López; Sexta
 "Sala Civil, Magistrada María Cristina Torres Pacheco
 "Séptima Sala Civil, Magistrada Elva Gamiño Becerra
 "Octava Sala Civil, Magistrada Ma. del Carmen
 "González Vélez Aldana; Primera Sala Penal; Magistrado
 "Rubén Puebla Calderón; Segunda Sala Penal;
 "Magistrado Plácido Torres Pineda; Tercera Sala Penal;
 "Magistrado Hugo Guillermo Lara Hernández; Cuarta
 "Sala Penal, Magistrado José Rigoberto Díaz Zavala
 "Quinta Sala Penal, Magistrado Luis Alonso Rodríguez
 "Nieto; Sexta Sala Penal, Magistrado Juvencio
 "Camacho Acevedo y Séptima Sala Penal, Magistrado
 "Ramón Núñez Alvarez; al no existir ninguna otra

AMPARO EN REVISION 2639/93

"propuesta, se aprueba por unanimidad la hecha por el
"Magistrado Presidente, haciéndose la declaración
"legal correspondiente de que son magistrados
"adscritos a la Sala, conforme lo asentado en líneas
"anteriores, por lo que al término de la sesión se dará
"posesión a cada Magistrado de la Sala de
"adscripción"; también lo es que, del acta de la
"Sexagésima Séptima Legislatura Constitucional, relativa
"a la aprobación de la propuesta del titular del Poder
"Ejecutivo, tampoco se advierte que ésta fue aprobada
"en el sentido de que el abogado Felipe Rojas López,
"sustituyera al licenciado Fernando Arregui Vega, de
"manera que, si en el acuerdo de veintidos de febrero
"del año en curso, el Pleno de ese tribunal determinó
"adscribir como Magistrado de la Quinta Sala Civil, a
"Felipe Rojas López, es incuestionable que,
"materialmente se determinó que éste sustituiría en sus
"funciones al ahora quejoso.
"Tercero. El Secretario de Gobierno, en el informe
"justificado que emitió, en cuanto encargado del
"Despacho del Poder Ejecutivo del Estado, invoca
"como causales de improcedencia las que prevé el
"artículo 73, fracciones V, VIII y XVIII, este último en



AMPARO EN REVISION 2639/96

"relación con el numeral 116, fracción V, todos de la Ley
"de Amparo, que indebidamente señala la responsable
"que es en relación con el artículo 166, fracción VII de la
"Ley de Amparo, pero que de ambos preceptos y de los
"argumentos que cita en su informe se desprende que
"se refieren a aquel numeral, sin que esta precisión
"constituya suplencia alguna, sino sólo corrección de un
"error en la cita de un numeral, con apoyo en el artículo
"79 de la Ley de la Materia; por su parte el Congreso de
"la Entidad aduce como causa de improcedencia las
"dos primeras de las mencionadas, en tanto que el
"Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, al
"emitir su informe aduce en términos similares las tres
"causales de improcedencia invocadas. En
"consecuencia, al ser la procedencia del juicio una
"cuestión de orden público, debe examinarse
"preferentemente, conforme a lo dispuesto por el último
"párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, y en
"atención además a la jurisprudencia número 814,
"consultable en la página 553, Octava Época, Tomo VI,
"Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial
"de la Federación de los años de 1917/1995, que dice:
"IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE

AMPARO EN REVISION 2639/76

"AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de
"amparo, por ser de orden público deben estudiarse
"previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera
"que sea la instancia".

"El artículo 73 de la Ley de Amparo, dispone que el
"juicio de garantías es improcedente:

"Fracción V. Contra actos que no afecten los intereses
"jurídicos del quejoso;

"Fracción VIII. Contra las resoluciones o declaraciones
"del Congreso Federal o de las Cámaras que lo
"constituyen, de las Legislaturas de los estados o de sus
"respectivas Comisiones o Diputaciones Permanentes,
"en elección, suspensión o remoción de funcionarios, en
"los casos en que las constituciones correspondientes les
"confieren la facultad de resolver soberana
"discrecionalmente.

"Fracción XVIII. en los demás casos en que la
"improcedencia resulta de alguna disposición de la Ley.

"En tanto que, el artículo 116, fracción V de la Ley
"invocada, determina que la demanda de amparo
"deberá formularse por escrito, en la que se expresarán;

"los preceptos constitucionales que contengan las
"garantías individuales que el quejoso estime violadas,

**AMPARO EN REVISION 2639/96**

"así como el concepto o conceptos de las violaciones,
"si el amparo se pide con fundamento en la fracción I
"del artículo 1º de esa Ley.

"Se analizarán las causales de improcedencia en la
"forma en que han sido transcritas las fracciones del
"numeral que las contempla.

"El interés jurídico, reputado como un derecho
"reconocido por la Ley, no es sino lo que la doctrina
"jurídica conoce con el nombre de derecho subjetivo,
"es decir, como facultad o potestad de exigencia, cuya
"institución consigna la norma objetiva de derecho.
"Cabe hacer la aclaración de que en el análisis de esta
"causal de improcedencia, debe quedar excluido el
"acto reclamado al Gobernador de la Entidad, pues la
"procedencia del amparo respecto este acto, se
"analizará en el considerando siguiente.

§ Las autoridades responsables señalan que el juicio de
"amparo es improcedente porque como el propio
"quejoso lo reconoce, sólo fue designado por la LXIII
"Legislatura al Congreso de la Entidad, en sesión
"celebrada el dos de enero de mil novecientos ochenta
"y seis, como Magistrado del Supremo Tribunal de
"Justicia del mismo Estado, para un solo período que se

AMPARO EN REVISION 2639/73

"inició en esa fecha, por lo que no se afecta el interés
"jurídico del quejoso.

"No asiste razón a las autoridades responsables que
"invocan la causal de improcedencia anotada, en
"virtud de que la facultad de exigencia que tiene el
"quejoso, deriva precisamente de su calidad de
"Magistrado que ostentaba al emitirse los actos de
"molestia, pues de la propuesta que reclama al
"Gobernador del Estado, (sin que esta mención
"implique que se está analizando la procedencia del
"juicio constitucional, respecto de éste, sino únicamente
"a manera de antecedente para una mayor claridad
"del asunto), se desprende que ésta (propuesta) es
"para el efecto de que se designen a diez nuevos
"magistrados del Supremo Tribunal de Justicia
"Estado, que en el punto tres, dice: "Mi propuesta a
"favor del abogado Felipe Rojas López, a efecto de
"sustituir al abogado Fernando Arreola Vega como
"Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del
"Estado", propuesta que fue aprobada por la
"Sexagésima Legislatura Constitucional del Estado, en
"sesión del día veintidós de febrero de mil novecientos
"noventa y seis, con base en dichos actos, el mismo día

**AMPARO EN REVISION 2639/96**

"se reunieron en el salón de sesiones del Supremo
"Tribunal de Justicia del Estado, los señores magistrados
"nombrados en la que, entre otros puntos, se adscribió a
"las Salas a los señores magistrados; lo anterior se infiere
"de las documentales públicas que corren agregadas
"en el expediente de amparo en ~~copias~~ fotostática
"certificada a fojas ciento noventa y ocho a doscientos,
"doscientos cuatro a doscientos ocho, y doscientos
"ochenta y nueve a doscientos noventa y dos,
"documentales a las que se les otorga pleno valor
"probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los
"artículos 129 y 202 del Código Federal de
"Procedimientos Civiles, ya que constituyen
"documentales públicas, dado que su formación está
"encomendada por la Ley a un funcionario público, y se
"encuentran certificadas por funcionario público en
"ejercicio de sus funciones.

"De lo anterior, se desprende que los actos reclamados
"en este juicio sí afectan el interés jurídico del quejoso,
"dado que demostró que los mismos lo afectaron en su
"calidad de Magistrado; lo anterior, con excepción del
"acto reclamado al Gobernador de la entidad, como
"se analizará en el considerando siguiente.

AMPARO EN REVISION 2639/9

"Lo anterior, independientemente de lo alegado por las
"responsables, en el sentido de que sólo hubiere sido
"designado una vez y que no tenga el carácter de
"inamovible, pues independientemente de que tengan
"o no razón en sus afirmaciones, ello constituye una
"cuestión que se analizará al estudiar el fondo del
"asunto, pero que en el caso no son determinantes para
"estimar que no se afecta el interés jurídico del quejoso,
"por las razones anotadas con anterioridad.

"Por otra parte, las autoridades, invocan como causal
"de improcedencia, la prevista en el artículo 73,
"fracción VIII de la Ley de Amparo, ya que se está frente
"a una resolución de la Legislatura del Estado de
"Michoacán, (en la situación planteada de remoción
"de funcionarios), en un caso en que la Constitución,
"Local correspondiente le confiere a la legislatura la
"facultad de resolver soberanamente.

"En el caso, no se actualiza la causal de improcedencia
"por las siguientes razones.

"La Ley de Amparo, en la fracción y precepto materia
"de análisis, señala que es improcedente el juicio
"constitucional de garantías individuales, contra las
"resoluciones de las legislaturas de los estados, entre



AMPARO EN REVISION 2639/96

"otras, en elección, suspensión o remoción de
"funcionarios, en los casos en que las constituciones
"correspondientes les confieren la facultad de resolver
"soberana y discrecionalmente. La causal de
"improcedencia a estudio ha sido motivo de diversos
"análisis tanto por el Más Alto tribunal del País, que ha
"originado diversos criterios jurisprudenciales, como por
"la doctrina jurídica mexicana, en los que se parte de la
"base que el juicio de amparo se ha instituido para
"proteger a los gobernados de nuestro País frente a los
"actos arbitrarios de las autoridades que violentan sus
"derechos públicos subjetivos, es decir, que el juicio
"como el que nos ocupa, se ha instituido como medio
"de control de la constitucionalidad de los actos de
"autoridad y esencialmente como sistema protector de
"los derechos del hombre, por consiguiente, las
"violaciones de derechos que no sean inherentes al
"hombre, no pueden reclamarse por medio del
"amparo. Para determinar la procedencia del juicio en
"el caso que nos ocupa, en relación con la causal
"materia de análisis, debemos atender a si la elección
"(dígase aprobación de propuesta) o remoción de un
"funcionario, como lo es un Magistrado del Supremo

AMPARO EN REVISION 2639/90

"Tribunal de Justicia del Estado, de Michoacán, es o no
"una facultad discrecional y soberana de la Legislatura
"de la entidad de acuerdo con la Constitución Local; es
"decir, si de conformidad con la Constitución Política
"del Estado libre y soberano de Michoacán de
"Ocampo, la Legislatura Local cuenta con un poder de
"determinación y autolimitación manifestado en el
"propio texto constitucional, para elegir, suspender o
"remover a un funcionario. Para una mayor claridad del
"asunto, es conveniente transcribir los artículos siguientes
"de la Constitución Política del Estado:
"Artículo 44. Son facultades del Congreso:
"Fracción XXI. Aprobar o desaprobar las propuestas,
"solicitudes de licencia y renunciaciones de los magistrados
"del Supremo Tribunal de Justicia.
"Artículo 72. (primer párrafo) Los magistrados durarán
"tres años en el ejercicio de su encargo, podrán ser
"reelectos, y si lo fueren, sólo podrán ser privados de sus
"puestos en los términos del título cuarto de esta
"Constitución y la Ley de Responsabilidades de los
"Servidores Públicos del Estado.
"De lo anterior se desprende en un primer término que el
"Congreso del Estado, tiene la facultad discrecional y



AMPARO EN REVISION 2639/96

"soberana para aprobar o desaprobar las propuestas,
"solicitudes de licencia y renuncia de los magistrados
"del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, sin
"embargo ese poder de determinación y autolimitación
"contemplado en el texto constitucional primeramente
"citado, encuentra una variante contenida en la propia
"Carta Suprema de la entidad, y es el caso en que los
"magistrados reelectos sólo podrán ser privados de sus
"puestos en los términos del Título Cuarto de la propia
"Constitución y de la Ley de Responsabilidades de los
"Servidores Públicos del Estado, a través de un juicio de
"responsabilidad, por tanto, para determinar si el
"quejoso se encontraba en esta última hipótesis, debe
"analizarse si reunió las condiciones creadas por el
"Congreso Local, para considerarlo como tal
" (Magistrado reelecto), y esa cuestión constituye el
"problema de fondo del amparo, por lo que no es
"lógico ni jurídico sobreseer en el juicio constitucional de
"garantías individuales, por las mismas razones que
"habría para negar la protección constitucional en ese
"aspecto; en tal virtud procede declarar infundada la
"causal de improcedencia a estudio.
"No pasa desapercibido para este juzgador, que en la

AMPARO EN REVISION 2639/79

"sesión de la Sexagésima Legislatura Constitucional, se
"aprobó la propuesta formulada por el Gobernador del
"Estado, esta última que contiene una propuesta para
"designar un Magistrado, por sí sola acarrearía la
"improcedencia del juicio de amparo; sin embargo, no
"debemos perder de vista que dicha aprobación (de la
"propuesta, trae implícita la substitución del ahora
"quejoso, al no poderse dividir ese acto, resulta
"cuestionable en su totalidad vía juicio constitucional.
"Por último, en relación con la causal de
"improcedencia contenida en el artículo 73, fracción
"XVIII, en relación con el numeral 116, fracción V, ambos
"de la Ley de Amparo, se aduce que el quejoso no
"formula conceptos de violación en contra del acuerdo
"tomado en sesión plenaria del más Alto Tribunal
"Jurisdiccional del Estado.
"Es infundada dicha causa de improcedencia pues no
"obstante que asista razón a las responsables, en el
"sentido de que el quejoso no expresa ningún concepto
"de violación en contra del acto reclamado al Pleno
"del Cuerpo Colegiado aludido, lo cierto es que el
"impetrante impugna éste, como una consecuencia
"jurídica y necesaria de los actos reclamados a las



AMPARO EN REVISION 2639/96

"restantes autoridades, por lo que de declararse
"inconstitucionales éstos, acarrearía la de aquél.

"Al no actualizarse las causales de improcedencia

"Invocadas, y toda vez que este juzgado no advierte

"alguna de oficio, procede al análisis de los conceptos

"de violación expuestos por el quejoso (327)

"Cuarto. Este juzgado, de oficio, advierte la causal de

"improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII,

"de la Ley de Amparo, en relación con los numerales

"107, fracción I, de la Carta Magna y 4º de la Ley citada

"en primer término únicamente respecto con el acto

"reclamado al Gobernador Constitucional del Estado

"de Michoacán, consistente en la propuesta que

"formuló el Congreso de la Entidad para que se

"designara diez nuevos magistrados del Supremo

"Tribunal de Justicia, que sustituyeran a igual número de

"magistrados, entre los cuales se encontraba el quejoso;

"en atención a que dicho acto reclamado no causa un

"agravio personal y directo al ahora impetrante.

"En efecto, por agravio debe entenderse todo

"menoscabo u ofensa al gobernado, menoscabo que

"puede o no ser patrimonial, siempre que sea material y

"susceptible de apreciarse objetivamente, es decir que

AMPARO EN REVISION 2639/

"la afectación de la que se duela el quejoso deba ser
"real y no de carácter simplemente subjetivo, además
"dicho agravio debe recaer en una persona
"determinada, y ser de realización pasada, presente o
"inminente, esto es, haberse producido o estarse
"efectuando en el momento de la promoción del juicio
"o ser inminente, no simplemente eventual, aleatoria o
"hipotético (en esto estriba lo directo del agravio).

"En el caso a estudio, el acto reclamado a que se ha
"hecho mención en este considerando, si bien es cierto
"que, en un aspecto, va dirigido, entre otros, al ahora
"quejoso, que es de relación pasada, ello no quiere
"decir que sea directo, y que por consiguiente le cause
"perjuicio, ya que dicha propuesta sólo trae la
"posibilidad incierta de que llegue a aprobarse por
"parte de otro ente administrativo, y esa aprobación
"(como ya se analizó), es la que, en todo caso, le
"puede causar un agravio personal y directo al
"quejoso, pues mientras no se verifique esa aprobación,
"la sola propuesta del titular del Ejecutivo del Estado,
"sólo tiene el carácter de eventual, hipotético o
"aleatorio.

"En consecuencia, y con fundamento en los artículos



AMPARO EN REVISIÓN 2639/96

"citados al inicio de este considerando, resulta
"improcedente el juicio de amparo, por lo que toca al
"acto reclamado al Gobernador del Estado, y por ende,
"debe sobreseerse en el mismo, con fundamento en el
"artículo 74, fracción III, de la Ley Reglamentaria de los
"numerales 103 y 107 constitucionales. A

"Quinto. En el primer concepto de violación el quejoso
"aduce que los actos reclamados resultan violatorios de
"los artículos 14, 16 y 116, fracción III, constitucionales,
"por las siguientes razones: C

"a). Porque el artículo 72, párrafo primero de la
"Constitución Política del Estado de Michoacán en
"vigor, señala que los magistrados durarán tres años en
"su encargo, podrán ser reelectos, y si lo fueren, no
"podrán ser privados de sus puestos sino por juicio
"político; que fue designado Magistrado del Supremo
"Tribunal de Justicia del Estado, en sesión de la
"Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso de la
"Entidad, del dos de enero de mil novecientos ochenta
"y seis, cargo que desempeñó desde ese día hasta el
"veintidós de febrero de mil novecientos noventa y seis,
"de manera ininterrumpida, es decir que fungió como
"Magistrado durante un lapso de diez años, un mes y

AMPARO EN REVISION 263910

"veinte días, que rebasan con exceso los tres años que
"exige el artículo 72 de la Constitución Local vigente, y
"ejerció tres períodos por tres años cada uno,
"circunstancias que conducen a concluir que fue
"reelecto o ratificado de manera tácita cuando menos
"por tres legislaturas. b). Que sus reelecciones o
"ratificaciones en su cargo fueron expresas, como se
"acredita con las diferentes credenciales expedidas por
"los respectivos presidentes de la Gran Comisión del
"Congreso Local;
"c). Que lo dispuesto por el artículo 80 de la
"Constitución Local, no es obstáculo para lo anterior, ya
"que ambas normas (artículos 72 y 80 de la norma
"fundamental del Estado), deben interpretarse
"sistemáticamente, en el sentido de que los magistrados
"continuarán en sus funciones aunque haya fenecido el
"período constitucional o el plazo para el que fueron
"nombrados, mientras no se presenten los nuevamente
"designados, lo que debe entenderse una reelección
"tácita cuando esa situación no se prolongue cuando
"menos, por el tiempo equivalente a otro período de
"tres años, y como consecuencia la inamovilidad,
"calidad que no debe afectarse por una omisión.



AMPARO EN REVISION 2639/96

"voluntaria o involuntaria;

"d). Que la inamovilidad opera por el simple transcurso
"del tiempo en el desempeño de la función durante,
"por lo menos dos períodos constitucionales
"consecutivos de tres años.

"e). Que la Ley no descarta la ~~forma~~ ^{forma} tácita de
"reelección o ratificación para el ~~cargo~~ ^{cargo} de Magistrado,
"y que al efecto es aplicable el artículo 1661 del Código
"Civil de la entidad;

"f). Que la Constitución Local no exige que la
"reelección de un Magistrado tenga que ser expresa,
"de lo contrario, resultaría inatendible el principio de
"Supremacía constitucional, imbuído en el artículo 133
"del ~~Pacto~~ ^{Pacto} Federal, ya que éste en su artículo 116,
"fracción III, no condiciona la inamovilidad de los
"magistrados de las entidades federativas a que sean
"deelectos de manera expresa.

"g). Que la Legislatura aprobó las propuestas de
"Magistrado sin que jamás le hubieran notificado, a
"través de mandamiento escrito que fundara y motivara
"la causal legal del procedimiento, y sin que tampoco
"hubiere mediado en su contra juicio de
"responsabilidad.

AMPARO EN REVISION 2639

"Son infundados los anteriores argumentos.

"Por una parte este órgano jurisdiccional comparte el
"criterio del quejoso, en el sentido de que la
"inamovilidad constituye una garantía establecida en
"pro del justiciable, no para favorecer la dignidad del
"Juez, ni su tranquilidad que lo coloque en una situación
"envidiable, sino para asegurar su independencia
"respecto de los otros poderes, (independencia que
"debe salvaguardarse aun cuando el Juez no tenga esa
"calidad), sin embargo, estrictamente hablando, el
"quejoso al momento de haber sido separado de su
"cargo no tenía la calidad de Magistrado inamovible.

"El artículo 116, fracción III, párrafo quinto de la
"Constitución Política del País, señala que los
"magistrados durarán en el ejercicio de su encargo
"tiempo que señalen las constitucionales locales,
"podrán ser reelectos, y si lo fueren, sólo podrán ser
"privados de sus puestos en los términos que determinen
"las constituciones y las Leyes de responsabilidades de
"los servidores públicos de los estados.

"Redactado en términos similares, el artículo 72 de la
"Constitución Local vigente, en su primer párrafo,
"contempla la misma situación legal de la duración en



955

AMPARO EN REVISION 2639/96

"el encargo por parte de los magistrados, la posibilidad
"de ser reelecto, y la seguridad que tiene consigo esta
"reelección.

"En el caso se encuentra debidamente acreditado en
"autos que el quejoso fue designado Magistrado del
"Supremo Tribunal de Justicia del Estado, que de
"conformidad con el artículo 72 de la Constitución
"Local, fue por el período de tres años, en sesión de la
"Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del
"Estado, del dos de enero de mil novecientos ochenta y
"seis, lo anterior se demuestra con el acta respectiva
"que corre agregada a fojas de la ciento diecisiete a la
"ciento veintitrés del cuaderno de amparo en copia
"fotostática certificada, que tiene pleno valor
"probatorio al tenor de lo dispuesto por el artículo 202
"del Código Federal de Procedimientos Civiles, de
"aplicación supletoria a la Ley de Amparo, como lo
"dispone su artículo 2º; también se encuentra probado
"que fungió como Magistrado durante un lapso de diez
"años, un mes y veinte días, básicamente con las copias
"fotostáticas certificadas de sus diversas credenciales;
"del acta de sesión del Supremo Tribunal de Justicia del
"Estado, del seis de enero de mil novecientos ochenta y

AMPARO EN REVISION 2639

"seis; del acta de sesión del mismo órgano de seis de
"enero de mil novecientos ochenta y siete; y con la hoja
"de servicios que ha prestado al Poder Judicial del
"Estado el Licenciado Fernando Arreola Vega, que
"constituyen documentos públicos; todos con el valor
"legal antes mencionado.

"Sin embargo, con ellas sólo demuestra que fue
"designado el dos de enero de mil novecientos ochenta
"y seis, a virtud de la aprobación hecha por el Congreso

"de la Entidad, de la propuesta del Ejecutivo Local, que
"de conformidad con lo dispuesto por las normas
"constitucionales aludidas, sólo duraría en el cargo tres
"años. También demuestra que le fueron expedidas

"diversas credenciales, que conformó el Tribunal de Justicia del Estado, en diversos años, y

"diversos nombramientos como funcionario del Poder
"Judicial del Estado, pero con ninguna de tales
"probanzas demuestra que haya sido reelecto, y como
"consecuencia no demuestra que sea inamovible.

"Es conveniente destacar que el artículo 60, fracción IV
"de la Constitución Local, dispone que es facultad del
"Gobernador, someter al Congreso del Estado, las
"propuestas para la designación de magistrados de



AMPARO EN REVISION 2639/96

"Supremo Tribunal de Justicia o a la Diputación

"Permanente, según el caso.

"Por su parte, el numeral 44, fracción XXI, del propio

"ordenamiento, contempla que es facultad del

"Congreso del Estado, aprobar o desaprobar las

"propuestas, solicitudes de licencia y renuncias de los

"magistrados del Supremo Tribunal de Justicia.

"Por último, el artículo 80 de la propia Constitución del

"Estado, señala que los magistrados continuarán en sus

"funciones aunque haya fenecido su periodo

"constitucional o el plazo para el que fueron

"nombrados, mientras no se presenten los nuevamente

"designados. La interpretación legal de los anteriores

"preceptos, como bien lo dice el quejoso, debe

"hacerse de manera integral, que permita llegar a una

"conclusión acorde con el sistema legal que contempla

"la Constitución, tanto federal como local, en el caso

"concreto.

"En un primer aspecto, tenemos que los magistrados

"durarán tres años en el ejercicio de su encargo; ello

"quiere decir que el Magistrado designado tiene como

"límite máximo para ejercer su encargo tres años, pero

"la propia norma contempla una excepción, y en el

AMPARO EN REVISION 2639/70

"caso en que el Magistrado sea reelecto, y el
"Magistrado inamovible (que es una consecuencia de
"la reelección, sólo dejará de ejercer su encargo en los
"términos del título cuarto de la Constitución Local, y la
"Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del
"Estado; o bien, por retiro forzoso. Pero además, el
"artículo 80 de la propia Constitución Política de la
"Entidad contempla una segunda excepción, y es que
"una vez fenecido el período de tres años para el que
"fue designado Magistrado, éste podrá continuar en sus
"funciones, mientras no se presente el nueyamente
"designado. Ahora bien, para ser reelecto, se requiere
"del proceso formal contemplado en sus formas
"citadas, ya que la reelección no puede operar de una
"manera tácita, pues como ya se analizó, el proceso de
"designación de un Magistrado del Supremo Tribunal de
"Justicia del Estado, inicia con la propuesta hecha por
"el Gobernador y culmina con la aprobación de la
"propuesta hecha por el Congreso del Estado, que si
"recae en un Magistrado que haya sido designado en
"un período constitucional anterior, debe entenderse
"que éste ha sido reelecto, y como consecuencia,
"inamovible, esta interpretación atendiendo



AMPARO EN REVISION 2639/96

"obviamente al artículo 72 de la Constitución Local
 "vigente; por tanto, si un profesionista es designado
 "Magistrado para un período de tres años, y al terminar
 "de su encargo no obtiene una nueva designación,
 "pero continúa en sus funciones por mandato del
 "numeral últimamente citado, de ~~ninguna~~ ^{ninguna} manera
 "debe entenderse esta prolongación como una nueva
 "designación, pues se repiten esas circunstancias se
 "encuentran previstas en la Constitución Local; sin que
 "sea óbice que a la luz de dicha disposición, el quejoso
 "haya durado dos períodos más, pues el referido
 "artículo 80 constitucional, señala que los magistrados
 "continuarán en sus funciones, aunque haya fenecido
 "su período constitucional, mientras no se presente el
 "nuevamente designado, y dicho precepto no realiza
 "ninguna distinción ni límite en cuanto al tiempo en que
 "continuará en sus funciones.

"La anterior interpretación se corrobora con la lectura
 "del artículo 72, primer párrafo de la Constitución
 "Política del Estado, vigente en la época en que el
 "quejoso fue designado Magistrado, que a la letra dice:
 "'Los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia
 "durarán en sus cargos tres años, pudiendo ser



AMPARO EN REVISION 2639

"reelectos; los designados para tres períodos
"consecutivos, serán inamovibles"; de la lectura de
"dicha transcripción, se desprende que para tener el
"carácter de inamovibles los magistrados del Supremo
"Tribunal de Justicia, deberían ser designados para tres
"períodos consecutivos; lo que nos lleva a la conclusión
"que necesariamente se requiere de ese proceso formal
"del que se ha hablado, para considerar que se está en
"presencia de la inamovilidad, tres designaciones para
"igual número de períodos consecutivos a la luz del
"artículo mencionado vigente en el año en que el
"quejoso fue designado Magistrado; dos
"designaciones para igual número de períodos a la luz
"del artículo 72 de la Constitución Política del Estado
"vigente; sin que esas designaciones puedan sustituirse
"por el transcurso del tiempo.

"Por otra parte, de ninguna manera puede aceptarse
"que las credenciales expedidas al Magistrado
"constituya su reelección o ratificación, pues una vez
"analizado el mecanismo legal de designación de
"magistrados, se desprende que constituye un proceso
"formal que inicia con la propuesta hecha por el
"Gobernador de la entidad, y la aprobación por parte

9581



AMPARO EN REVISION 2639/96

"del Congreso del Estado, y la expedición de las
"credenciales no puede sustituir ese procedimiento
"formal, ni la intervención de los órganos que
"intervienen para su designación.

"Tampoco puede aceptarse que la inamovilidad opera
"por el simple transcurso del tiempo en el desempeño
"de la función durante por lo menos dos períodos
"constitucionales, pues se repite, para ello se requiere
"un acto formal y expreso, en el que si bien es cierto que
"no se exige la fórmula sacramental de "reelección", si
"se requiere, de conformidad con la Constitución legal
"vigente, una segunda designación para el período
"inmediato posterior para el que fue designado por tres
"años; y de conformidad con lo dispuesto por el artículo
"72 de dicha Constitución vigente en la fecha en que el
"queroso fue designado Magistrado, se requería de tres

§ "designaciones para tres períodos consecutivos.

"No es aplicable al caso a estudio lo dispuesto por el
"Código Civil del Estado, acerca de la aceptación
"tácita, pues como ya se dijo, la propia Constitución
"contempla la hipótesis en el caso de que el Magistrado
"concluya su encargo y, no se presente el nuevo
"designado.

AMPARO EN REVISION 2639/96

"De ninguna manera la Constitución Local violenta el
"principio de supremacía constitucional contemplado
"en el artículo 133 de la Constitución Magna, pues
"como ya se analizó, el artículo 72 de la Constitución
"Local, y el 116, fracción III, párrafo quinto, de la
"Constitución Federal no se contraponen, sino que
"contemplan disposiciones similares, con redacción casi
"idéntica, máxime porque el artículo 116 del Pacto
"Federal, no dispone la forma que debe seguirse para
"designar a un Magistrado, sino que esa cuestión se
"encuentra reservada y prevista en la Constitución
"Local.

"Por último, en relación con el argumento mencionado
"con el inciso g) del resumen hecho al inicio de este
"considerando, cabe señalar, que además de que tal
"aprobación sí se encuentra fundada y motivada, ya
"que en dicha sesión se mencionó que para dar
"cumplimiento a lo establecido por el artículo 73 de la
"Constitución Política del Estado, la presidencia sometió
"a la consideración del Pleno la propuesta formulada
"por el Gobernador del Estado, resultando aprobada
"por la mayoría, y que independientemente de que el
"Congreso estuviere o no obligado a notificarle al

ESTADO DE CHIHUAHUA
SUPREMA CORTE
JEFATURA DE LA
SECRETARIA GENERAL DE AC



AMPARO EN REVISION 2639/96

"quejoso, lo cierto es que, si tuvo conocimiento de tal
"acto, tan es así que es materia de análisis en este juicio
"de amparo; máxime porque, como ya se dijo, el
"artículo 80 del ordenamiento legal citado, contempla
"la posibilidad de que los magistrados continúen en sus
"funciones aunque haya fenecido su período
"constitucional, para el que fueron nombrados, mientras
"no se presenten los nuevamente designados.

"Y por último, en el caso no tenía porqué haberse
"seguido en su contra juicio de responsabilidad, en
"atención a que este sólo procede contra magistrados
"reelectos, y el quejoso, como ya se analizó no tenía ese
"carácter.

"Por las razones anotadas con anterioridad, también
"resulta infundado el segundo concepto de violación
"pues lo apoya en el argumento de que él tenía el

"carácter de inamovible, y que debe aplicarse
"retroactivamente la Ley, ya que independientemente
"de que procediera o no esa aplicación retroactiva

"como ya se dijo, el quejoso al momento de la
"aprobación reclamada sólo había sido designado una
"vez como Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia
"del Estado, y no tenía el carácter de inamovible.

AMPARO EN REVISION 263

"En este orden de ideas, al no resultar violentadas en
"perjuicio del quejoso, las garantías individuales
"contenidas en los artículos 14 y 16, éste último en
"relación con el artículos 116, fracción III, todos de la
"Carta Magna, con la aprobación reclamada al
"Congreso del Estado, y como consecuencia, con el
"acuerdo tomado en la sesión del Pleno del Supremo
"Tribunal de Justicia del Estado, lo que se impone es
"negar la Protección Federal solicitada."

Sexto. Inconforme con la sentencia precitada, la parte
quejosa, el Congreso y el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del
Estado de Michoacán, interpusieron respectivamente en su contra,
recurso de revisión y revisiones adhesivas, que admitió el Presidente
de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante proveído de
cinco de noviembre de mil novecientos noventa y seis.

El Agente del Ministerio Público Federal designado formuló
pendiente en el sentido de que esta Suprema Corte de Justicia de la
Nación se declare incompetente y se remitan los autos al Tribunal
Colegiado del Décimo Primer Circuito en turno.

Mediante acuerdo del dos de enero de mil novecientos
noventa y siete, se ordenó turnar los autos al Ministro Guillermo Ortiz
Mayagoitia y se notificó el día tres siguiente.

Por escrito de veinte de enero y trece de agosto de mil



AMPARO EN REVISION 2639/96

novecientos noventa y siete, recibido en esa fecha en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, el quejoso solicitó se dicte la sentencia correspondiente.

El presente asunto se vio en la sesión correspondiente al veinticinco de noviembre de mil novecientos noventa y siete y en ella se acordó desechar el proyecto presentado, por mayoría de ocho votos y turnar los autos al Ministro Mariano Azuela Güitrón.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Por ser una cuestión de análisis previo, procede analizar el pedimento del Agente del Ministerio Público designado el cual, en la parte que interesa, sostiene:

"Esta Representación Social Federal, estima que es
"innecesario entrar al estudio del escrito de agravios
"antes mencionados y hechos valer por la parte
"recurrente, toda vez que el suscrito, considera que no
"son motivo de análisis, ya que se advierte que esa
"Suprema Corte de Justicia de la Nación, es legalmente
"incompetente para conocer del recurso de revisión
"que nos ocupa, debiéndose de remitir el mismo al
"Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente para
"conocer del mismos.

"Lo anterior en consideración a que el artículo 107,
"fracción VIII de la Constitución Política de los Estados

AMPARO EN REVISION 263

"Unidos Mexicanos establece: (Lo transcribe).

"Por su parte el artículo 84, fracción I, de la Ley de

"Amparo, establece lo siguiente: (Lo transcribe).

"Así mismo también establece, los artículos 10, fracción

"II, inciso a) y 21, fracción II, inciso a) de la Ley Orgánica

"del Poder Judicial de la Federación establecen: (Los

"transcribe).

"De la lectura de los preceptos constitucionales y

"legales antes transcritos, se deriva que la regla general

"en tratándose de la competencia para conocer del

"recurso de revisión en amparo indirecto por la Suprema

"Corte, se restringe a que se cuestione la

"constitucionalidad de una ley federal o local, un

"tratado internacional o un reglamento expedido por el

"Presidente de la República, el Gobernador de

"Estado.

"Asimismo como lo señala la Ley Orgánica de

"referencia, se trata de que en el medio de

"impugnación subsista el problema de

"constitucionalidad de una norma general. La

"Constitución de la República y sus leyes reglamentarias

"han encomendado al Máximo Tribunal del País el

"examen constitucional de normas jurídicas que poseen



AMPARO EN REVISION 2639/96

"los atributos de generalidad, abstracción e
"impersonalizada.

"De todo lo anterior, se puede afirmar, que en el
"presente asunto a estudio, no se satisfacen los
"lineamientos para establecer legalmente la
"competencia de la Suprema Corte de Justicia de la
"Nación, en consideración que el acto reclamado se
"hizo consistir en lo siguiente:

"Propuesta que formuló el Congreso de la entidad
"para que se designara diez nuevos magistrados del
"Supremo Tribunal de Justicia, que sustituyeran a igual
"número de magistrados, entre los cuales se encontraba
"el quejoso, la aprobación de la propuesta del
"Gobernador Constitucional, para que se designara
"diez nuevos magistrados del supremo Tribunal de
"Justicia, que sustituyeran a igual número de
"magistrados, en sesión efectuada el veintidós de
"febrero del año en curso, y del Pleno, el acuerdo para
"adscribir en su substitución suya a nuevos magistrados
"de la Quinta Sala Civil de ese cuerpo Colegiado."

"De la lectura de dicho acto trae como conclusión
"necesaria, que no se está en presencia de cada uno
"de los supuestos jurídicos que prevén los artículos

AMPARO EN REVISION 2639

"transcritos en el cuerpo del presente asunto, por
"consecuencia, no estamos en presencia de una norma
"de carácter general, abstracto y personal, sino de una
"propuesta de nombramiento de magistrados del
"Tribunal Superior de Justicia del Estado de Michoacán,
"por parte del Gobernador de dicha entidad.

"De lo anterior, podemos establecer que el acto
"reclamado, viene a constituir una propuesta del
"Gobernador y su aprobación por parte de los
"legisladores locales, tiene un carácter individual, ya
"que va dirigido a unas personas y por una situación
"determinada.

"Por lo tanto, al ser competente la Suprema Corte de
"Justicia de la Nación, es legalmente competente para
"conocer de los recursos de revisión, cuando se trate
"la inconstitucionalidad de:

"a) Leyes Federales o Locales;

"b) Tratados Internacionales;

"c) Reglamentos expedidos por el Presidente de la
"República;

"d) Reglamentos de leyes locales expedidos por los
"gobernadores de los Estados;

"e) Cuando de la sentencia se establezca la



AMPARO EN REVISION 2639/95

"interpretación directa de un precepto de la
"Constitución, subsistiendo el problema de
"constitucionalidad.

"Por lo que en el caso a estudio nos encontramos en
"presencia de una propuesta del Gobernador de
"referencia, se desprende claramente ~~que~~ la Suprema
"Corte de Justicia de la Nación es legalmente
"incompetente para conocer del presente recurso de
"revisión, debiéndose de remitir los presente autos al
"Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito en turno.

"Es aplicable al caso a estudio la tesis siguiente:

"INSTANCIA: Semanario Judicial de la Federación y su
"Gaceta, Novena Época, Tomo II, agosto de 1995,

"Segunda Sala, tesis número 2ª. LXVI/95, página 280.

"Rubro: COMPETENCIA DE LA SUPREMA CORTE O DE LOS
"TRIBUNALES COLEGIADOS, PARA CONOCER DE LA

"REVISIÓN DE AMPAROS, EN CONTRA DE DECRETOS

"EXPEDIDOS POR PARTE DEL EJECUTIVO FEDERAL O

"LOCAL. (La transcribe).

Se advierte que en el pedimento de la Representación Social
Federal se solicita que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación se
declare legalmente incompetente para conocer de la presente revisión
y remita los autos a un Tribunal Colegiado de Circuito para su

AMPARO EN REVISION 263

resolución.

Las fracciones VIII y IX del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; las fracciones I y II del artículo 84 de la Ley de Amparo y las fracciones II, inciso a) y III del artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establecen:

Constitución Política.

"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: ...

"VIII. Contra las sentencias que pronuncien en amparo los jueces de Distrito o los Tribunales Unitarios de Circuito procede revisión. De ella conocerá la Suprema Corte de Justicia.

"a) Cuando habiéndose impugnado en la demanda de amparo, por estimarlos directamente violatorios de esta Constitución, leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el Presidente de la República de acuerdo con la fracción I del artículo 89 de esta Constitución y reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los Estados, o por el Jefe del Distrito Federal, subsista en el



AMPARO EN REVISION 2639/36

"recurso el problema de constitucionalidad.

"b) Cuando se trate de los casos comprendidos en las
"fracciones II y III del artículo 103 de esta Constitución.

"La Suprema Corte de Justicia, de oficio o a petición
"fundada del correspondiente Tribunal Colegiado de
"Circuito, o del Procurador General de la República,
"podrá conocer de los amparos en revisión, que por su
"interés y trascendencia así lo ameriten.

"En los casos no previstos en los párrafos anteriores,
"conocerán de la revisión los Tribunales Colegiados de
"Circuito y sus sentencias no admitirán recurso alguno;

"IX. Las resoluciones que en materia de amparo directo
"pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito no
"admiten recurso alguno, a menos de que decidan
"sobre la inconstitucionalidad de una ley o establezcan
"la interpretación directa de un precepto de la
"Constitución, caso en que serán recurribles ante la
"Suprema Corte de Justicia, limitándose la materia del
"recurso exclusivamente a la decisión de las cuestiones
"propiamente constitucionales; ..."

"Ley de Amparo.

"Artículo 84. Es competente la Suprema Corte de
"Justicia para conocer del recurso de revisión, en los

AMPARO EN REVISION 2639

"casos siguientes:

"I. Contra las sentencias pronunciadas en la audiencia

"constitucional por los jueces de Distrito, cuando:

"a) Habiéndose impugnado en la demanda de

"amparo, por estimarlos inconstitucionales, leyes

"federales o locales, tratados internacionales,

"reglamentos expedidos por el Presidente de la

"República de acuerdo con la fracción I del artículo 89

"constitucional y reglamentos de leyes locales

"expedidos por los gobernadores de los Estados, o

"cuando en la sentencia se establezca la

"interpretación, directa de un precepto de la

"Constitución, subsista en el recurso el problema de

"constitucionalidad;

"b) Se trate de los casos comprendidos en las fracciones

"II y III del artículo 103 constitucional;

"II. Contra las resoluciones que en materia de amparo

"directo pronuncien los Tribunales Colegiados de

"Circuito, siempre que se esté en el caso de la fracción

"V del artículo 83."

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

"Artículo 10. La Suprema Corte de Justicia conocerá

"funcionando en Pleno: ...



964

AMPARO EN REVISION 2639/96

"Fracción II. Del recurso de revisión contra sentencias
"pronunciadas en la audiencia constitucional por los
"jueces de Distrito o los tribunales unitarios de circuito,
"en los siguientes casos:

"a) Cuando subsista en el recurso el problema de
"constitucionalidad de normas generales, si en la
"demanda de amparo se hubiese impugnado una ley
"federal, local, del Distrito Federal, o un tratado
"internacional, por estimarlos directamente violatorios
"de un precepto de la Constitución Política de los
"Estados Unidos Mexicanos; ...

"Fracción III. Del recurso de revisión contra sentencias
"que en amparo directo pronuncien los tribunales
"colegiados de circuito, cuando habiéndose
"impugnado la inconstitucionalidad de una ley federal.
"local, del Distrito Federal o de un tratado internacional

"Solo cuando en los conceptos de violación se haya
"planteado la interpretación directa de un precepto de
"la Constitución Política de los Estados Unidos
"Mexicanos, dichas sentencias decidan u omitan
"decidir sobre tales materias, debiendo limitarse en estos
"casos la materia del recurso a la decisión de las
"cuestiones propiamente constitucionales; ..."

AMPARO EN REVISION 2639

De los preceptos constitucionales y legales antes reproducidos se advierte que se ha encomendado a este Tribunal el conocer de los recursos de revisión en los que subsista el problema de constitucionalidad, ya sea por que se impugnen leyes federales o locales o tratados internacionales por ser contrarios a la Ley Fundamental o porque se trate de una cuestión de interpretación de algún precepto del Código Supremo.

De la lectura de la sentencia que se revisa, la cual en su parte considerativa quedó reproducida en el resultando quinto de este fallo, se desprende que el Juez de Distrito realizó la interpretación directa del artículo 116, fracción III, de la Constitución Federal, en relación con los artículos 72 y 80 de la Constitución Política del Estado de Michoacán, subsistiendo en el recurso dicha cuestión y aunque los dispositivos antes reproducidos no se refieren expresamente a la competencia de este Tribunal Pleno para conocer del recurso de revisión en materia de amparo indirecto, en el que subsista el problema de interpretación directa de un precepto de la Ley Suprema, como sí lo hacen en tratándose de amparo directo, debe estimarse que se surte la competencia de éste órgano para resolver el medio de impugnación interpuesto, toda vez que de los propios preceptos antes reproducidos se desprende que el Constituyente y el Legislador Federal han encomendado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno, el ser el intérprete máximo de la Constitución, siendo aplicable, por analogía, las disposiciones



965

AMPARO EN REVISION 2639/96

referentes al amparo directo.

Respalda el sentido de lo anteriormente considerado el argumento negativo consistente en que de modo específico a los Tribunales Colegiados de Circuito no se les ha encomendado resolver los recursos de revisión en materia de amparo indirecto en los que subsista el problema de la interpretación directa de un precepto constitucional, como se desprende de la lectura del artículo 37, fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el 85 de la Ley de Amparo que establecen:

"Artículo 37. Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta ley, son competentes los tribunales colegiados de circuito para conocer; ...

"Fracción IV. Del recurso de revisión contra las sentencias pronunciadas en la audiencia constitucional por los jueces de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito o por el superior del Tribunal

responsable en los casos a que se refiere el artículo 85 de la Ley de Amparo, y cuando se reclame un acuerdo de extradición dictado por el Poder Ejecutivo a petición de un gobierno extranjero, o cuando se trate de los casos en que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia haya ejercitado la facultad prevista en el sexto párrafo del artículo 94 de la Constitución Política

AMPARO EN REVISION 2639

"de los Estados Unidos Mexicanos;"

Ley de Amparo.

"Artículo 85. Son competentes los Tribunales
"Colegiados de Circuito para conocer del recurso de
"revisión, en los casos siguientes:

"I. Contra los autos y resoluciones que pronuncien los
"jueces de Distrito o el superior del tribunal responsable,
"en los casos de las fracciones I, II y III del artículo 83;

"II. Contra las sentencias pronunciadas en la audiencia
"constitucional por los jueces de Distrito o por el superior
"del tribunal responsable, siempre que no se trate de los
"casos previsto en la fracción I del artículo 84;

"III. (Derogada).

"Las sentencias que pronuncien los Tribunales
"Colegiados de Circuito al conocer de la revisión, no
"admitirán recurso alguno."

Lo anteriormente sostenido encuentra también respaldo en la
tesis CLXI/97 de este Tribunal Pleno, pendiente de publicarse y que
es del tenor literal siguiente:

"INTERPRETACIÓN DIRECTA DE UN PRECEPTO
"CONSTITUCIONAL. PARA CONOCER DEL RECURSO DE
"REVISIÓN EN CONTRA DE LA SENTENCIA DICTADA POR
"UN JUEZ DE DISTRITO EN LA QUE HAGA DICHA



AMPARO EN REVISION 2639/96

"INTERPRETACIÓN, SON COMPETENTES TANTO EL PLENO
"COMO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA.
"Los artículos 107, fracciones VIII y IX, de la Constitución
"Política de los Estados Unidos Mexicanos y 84, fracción
"I, inciso a), de la Ley de Amparo, establecen la
"competencia de la Suprema Corte de Justicia para
"conocer de los recursos de revisión en contra de
"sentencias en las que se haya efectuado la
"interpretación directa de un precepto constitucional. A
"su vez, los artículos 10, fracciones II y III, y 21, fracciones
"II y III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la
"Federación, indican que esa competencia
"corresponde a las Salas, tanto en amparo directo,
"como en amparo indirecto, pero tratándose del
"Tribunal Pleno se observa una disparidad porque,
"aparentemente, sólo es competente para
"pronunciarse sobre dicha materia en la resolución de
"revisiones en amparo directo, como señala la fracción
"III, del citado artículo 10, pero no en la revisión de
"amparos indirectos, toda vez que ni la fracción II del
"mismo precepto, ni ninguna otra disposición, le otorgan
"competencia expresa. Esta interpretación letrista, que
"cercenaría al Pleno una de las atribuciones exegéticas

AMPARO EN REVISION 2639

"más importante, de las que le son propias, no es
"admisible, en virtud de que rompería el sistema de
"control de la constitucionalidad que, en la vía judicial,
"se encomienda a la Suprema Corte y, por
"autonomasia, al Pleno, a quien se le reserva, de
"acuerdo con las disposiciones constitucionales y
"legales invocadas, la decisión de las cuestiones más
"trascendentes que pueden plantearse en amparo,
"tocándole conocer, así, del recurso de revisión en el
"juicio de amparo indirecto cuando se reclaman leyes
"federales estatales o del Distrito Federal o cuando se
"reclaman tratados internacionales por estimarlos
"directamente violatorios de algún precepto
"constitucional o cuando se alegan violaciones por las
"entidades federativas a la esfera de competencia con
"la Constitución reserva a la Federación, o viceversa.
"encomiendas mediante las cuales se reconoce al
"Pleno de este Alto Tribunal al carácter de máximo
"interprete de la Constitución Política, que es acorde
"con la intención perseguida con el actual texto del
"comentado artículo 107 constitucional, de que a este
"órgano corresponda, principalmente, el control de la
"constitucionalidad y la tarea de fijar en definitiva el



AMPARO EN REVISION 2639/96

"alcance de los textos constitucionales, intención que
"aparece revelada en la exposición de motivos de la
"iniciativa presidencial que dio lugar a la reforma de
"ese artículo 107, que entró en vigor el quince de enero
de "mil novecientos ochenta y ocho. Las precisiones
"realizadas ponen de relieve que el Tribunal Pleno de la
"Suprema Corte de Justicia también tiene competencia
"para conocer, en definitiva, de amparos indirectos en
"los que tenga que determinarse la interpretación
"directa de un precepto constitucional, resultando así
"que en esta materia, pueden válidamente conocer de
"las revisiones de amparos directos e indirectos, tanto el
"Pleno, como las Salas, conclusión que amplía la
"interpretación gramatical de los artículos 10, fracciones
"II y III, y 21, fracciones II y III, de la Ley Orgánica del
"Poder Judicial de la Federación."

Por lo expuesto precedentemente debe resolverse que la
solicitud del Agente del Ministerio Público designado se estima
improcedente. Así este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, es competente para conocer del presente
recurso en revisión, de conformidad con lo dispuesto por los artículos
107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Federal, 84, fracción I,
inciso a), de la Ley de Amparo y 10, fracción II, inciso a) de la Ley

AMPARO EN REVISION 2635

Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se hace valer en contra de una sentencia dictada por un Juez de Distrito en la audiencia constitucional de un juicio de garantías, en la que se realizó la interpretación directa del artículo 116, fracción III, de la Constitución Federal.

SEGUNDO. La parte quejosa hizo valer como agravios, los siguientes:

"Primero. El considerando quinto del fallo impugnado es
"violatorio en mi perjuicio, por inobservancia de los
"artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, 349, 351 y 352
"del Código Federal de Procedimientos Civiles,
"supletorio de aquélla por disposición expresa del último
"párrafo del artículo 2º de la misma Ley.
"Sostengo lo anterior, porque en dicho apartado de la
"sentencia el Juez Tercero de Distrito en el Estado
"comenzó haciendo lo que, en su criterio, era una
"síntesis fiel de las diversas razones o argumentos
"jurídicos en los que hice descansar el primero de los
"conceptos de violación de mi demanda de amparo,
"donde esgrimí que los actos de autoridad reclamados
"habían transgredido en contra mía las garantías de
"audiencia, legalidad y seguridad jurídica tuteladas por
"los artículos 14, 16 y 116, fracción III, del Pacto Federal.



AMPARO EN REVISIÓN 2639/96

"señalando el mencionado juzgador que esa
"transgresión derivaba de lo siguiente:

"a). Porque el artículo 72, párrafo primero, de la
"Constitución Política del Estado de Michoacán en
"vigor, señala que los magistrados durarán tres años en
"su encargo,

"g). Que la legislatura... responsabilidad... (Se
"transcribe).

"Sin embargo, lo cierto es que en la pretendida síntesis
"que intentó hacer esta que jamás se incluyeron los
"siguientes argumentos medulares que invoqué con
"toda claridad en mi demanda de amparo, para
"respaldar aún más el derecho a la inamovilidad
"constitucional que me corresponde como Magistrado
"del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de
"Michoacán, particularmente de la página diez a la

"dieciséis de esa demanda, argumentos que en lo
"conducente son como sigue:

"...el no haberse designado Magistrado sustituto por el
"Congreso, procede entenderlo..." (Se transcribe).

"Como puede apreciarse, las argumentaciones jurídicas
"que acabo de transcribir literalmente en los cinco
"puntos inmediatos precedentes, fueron absolutamente

AMPARO EN REVISION 2639

"soslayadas por el resolutor primario, quien en modo
"alguna las analizó ni las decidió al ocuparse de mi
"citado primer concepto de violación; así como
"tampoco estudió ni valoró ninguna de las diversas
"pruebas documentales, tanto públicas como privadas,
"descritas en los puntos números del dos al cuatro y del
"siete al diez del escrito de ofrecimiento de pruebas que
"oportunamente presenté durante la primera instancia y
"corre agregado al juicio, encaminadas a acreditar
"aquellas propias circunstancias, lo cual evidencia que
"el fallo recurrido vulnera en mi perjuicio, por falta de
"aplicación, los numerales 77 y 78 de la Ley de Amparo,
"que en su conjunto disponen que las sentencias que se
"dicten en los juicios de garantías deben fijar clara y
"precisamente el acto o actos reclamados y
"apreciación de todas y cada una de las probanzas
"que se hubieren rendido por el quejoso para justificar
"su inconstitucionalidad, cosa que en la especie no hizo
"el Juez de Distrito, quien por el contrario, mediante un
"análisis parcial y mutilado de mis conceptos de queja,
"infringió además, también por inobservancia, los
"numerales 349, 351 y 352 del Código Federal de
"Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la



AMPARO EN REVISION 2639/96

"Legislación de Amparo, al haber dejado de fijar
"integralmente la litis constitucional, omitiendo el
"examen y decisión de cuestiones medulares esgrimidas
"por el suscrito quejoso en la demanda de garantías,
"como son a las que me referí en el párrafo que
"antecede, lo que de paso resulta ~~violatorio~~ de los
"principios de exhaustividad y congruencia rectores de
"toda resolución jurisdiccional, por lo que pido que el
"consiguiente agravio me sea reparado en esta
"segunda instancia y, por ende, este órgano de alzada
"emprenda el estudio de las cuestiones omitidas, a la luz
"de todas las pruebas que se ofrecieron con el fin de
"demostrar la inconstitucionalidad de los actos
"reclamados.

"Segundo. También el considerando quinto de la
"sentencia combatida me causa agravio, ya que
"vulnera en mi perjuicio el artículo 116, fracción II,
"quinto párrafo, de la Constitución General de la
"República, al haberse hecho del mismo una incorrecta
"interpretación por el Juez Tercero de Distrito en el
"Estado de Michoacán, en relación con el artículo 133
"de la propia Carta Magna y con los preceptos 44,
"fracción XXI, 60, fracción IV, 72, primer párrafo, y 80 de

AMPARO EN REVISION 2639

"la Constitución particular de la misma entidad
"federativa; lo cual precisamente da competencia a la
"Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la luz del
"artículo 84, fracción I, inciso a) in fine, de la Ley de
"Amparo, para conocer y resolver el presente recurso
"de revisión, es decir, por haberse establecido en dicha
"sentencia la interpretación directa de un precepto del
"Pacto Federal.

"En efecto, según se aprecia de dicho considerando
"quinto, la autoridad de amparo, luego de hacer el
"resumen mutilado de los argumentos jurídicos en los
"que, según ella, sustenté el primero de mis conceptos
"de violación, pues la verdad como ya lo expuse en el
"anterior agravio es que hizo caso omiso de varias otras
"alegaciones medulares que al respecto igualmente
"aduje, sostuvo que si bien el mencionado numeral 116,
"fracción III, párrafo quinto, de la Constitución Política
"del País en vigor, a la letra dispone que los magistrados
"de los estados "...durarán en el ejercicio de su encargo
"el tiempo que señalen las constituciones locales,
"podrán ser reelectos, y si lo fueren, sólo podrán ser
"privados de sus puestos en los términos que determinen
"las constituciones y las leyes de responsabilidades de



AMPARO EN REVISION 2639/96

"los servidores públicos de los estados.."; y que en
"similares condiciones se encuentra redactado el
"artículo 72, primer párrafo, de la Constitución vigente
"para el Estado de Michoacán, que prescribe: "Los
"magistrados durarán tres años en el ejercicio de su
"encargo, podrán ser reelectos, y ~~si~~ fueren, sólo
"podrán ser privados de sus puestos en los términos del
"Título Cuarto de esta Constitución y la Ley de
"Responsabilidades de los Servidores Públicos del
"Estado..."; sin embargo, no podía considerarse que yo
"tuviera derecho a la inamovilidad reclamada en mi
"demanda de garantías como Magistrado del Supremo
"Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, según
"eso, ~~porque~~ aun cuando demostré con pruebas
"documentales públicas no desvirtuadas por las
"autoridades responsables, que a partir del dos de
"enero de mil novecientos ochenta y seis (cuando la
"Sexagésima Tercera Legislatura al Congreso de la
"entidad, a propuesta del entonces Gobernador de la
"misma, me confirió dicho cargo de magistrado), y
"hasta el veintidós de febrero de mil novecientos
"noventa y seis (cuando fui sustituido por el hoy tercero
"perjudicado), me desempeñé ininterrumpidamente

AMPARO EN REVISION 2639

"con aquella calidad (diez años, 1 mes y veinte días), lo
"cierto era que ello no bastaba para adquirir el carácter
"de Magistrado inamovible. Como razonamientos
"esenciales para arribar a tal determinación, el a quo
"esgrimió, desde el último párrafo de la página 11 once
"vuelta hasta el primero de la página catorce frente, los
"que acto seguido transcribiré, para mayor claridad y
"no incurrir en omisiones: '...Es conveniente destacar
"que el artículo 60... sino que esa cuestión se encuentra
"reservada y prevista en la Constitución local...' (Se
"transcribe). Estimo, con todo respeto, que los
"transcritos razonamientos judiciales hacen una errónea
"e inicua interpretación del numeral 116, fracción III,
"quinto párrafo, de la Constitución Política de los
"estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo
"133 del mismo Código Supremo y con los preceptos 44,
"fracción XXI, 60, fracción IV, 72, primer párrafo, y 80 de
"la Carta Constitucional vigente para el Estado de
"Michoacán, por los siguientes motivos:
"1º. Es cierto que el precitado artículo 116, fracción III,
"quinto párrafo de nuestra Carta Magna, contempla
"que la duración en el cargo de magistrado de los
"poderes judiciales de las entidades federativas estará



AMPARO EN REVISION 2639/96

"determinado por las constituciones locales; así como
"que si tales magistrados fueren reelectos (que más que
"eso, debe entenderse como que si fueren ratificados
"en el cargo o nombramiento del que ya venían
"disfrutando, porque aquéllos no son designados por
"elección popular y tampoco, lógicamente y técnicamente,
"pueden ser reelectos), ya no podrá privárseles de sus
"puestos, salvo por las causas previstas en esas propias
"constituciones particulares y en las Leyes de
"responsabilidades de los servidores públicos de cada
"Estado.

"También es verdad que, por su parte, el artículo 72,
"primer párrafo de la Constitución vigente en el Estado
"de Michoacán, especifica que los magistrados durarán
"tres años en el ejercicio de su encargo; guardando
"congruencia con la Constitución Federal en el sentido

"de que, si dichos funcionarios fueron reelectos, ya sólo
"podrán ser privados de su función en los términos de
"que habla el Título Cuarto de ese mismo Código
"Fundamental michoacano y la Ley de
"Responsabilidades de los Servidores Públicos de la
"entidad, consagrando así el conocido derecho o
"garantía a la inamovilidad judicial.

AMPARO EN REVISION 2639

"Por otra parte, igualmente cierto resulta, como lo adujo
"el juzgador primario en su sentencia impugnada, que
"conforme al precepto 80 de aquella Constitución
"local, 'Los magistrados continuarán en sus funciones
"aunque haya fenecido su período constitucional o el
"plazo para el que fueron nombrados, mientras no se
"presenten los nuevamente designados.'

"Pese a todo lo antes expuesto, nótese que ni la Ley
"Suprema de la Unión ni la particular de Michoacán
"determina qué debe entenderse por reelección para
"los efectos de la inamovilidad; tampoco, cómo se
"configura; ni que deba serlo única y exclusivamente a
"través del "proceso formal y expreso" sugerido por el
"Juez de Distrito en el segundo párrafo de la página 13
"vuelta del fallo revisado (una segunda designación del
"Magistrado de que se trate, '...para el período
"inmediato posterior para el que fue designado por tres
"años...', hecha por el Congreso local, a propuesta del
"Gobernador).

"Consecuentemente, la interpretación efectuada por el
"mencionado Juez sin duda rebasa los alcances del
"multirreferido artículo 116, fracción III, quinto párrafo,
"del Pacto Federal; pues tampoco los numerales 44,



AMPARO EN REVISION 2639/96

"fracción XXI, y 60, fracción IV de la Constitución
 "particular del estado en que además aquél se fundó
 "para hacer esa interpretación, aluden a ningún
 "proceso de reelección de magistrados del Poder
 "Judicial, sino tan solo, en su orden, a las facultades que
 "tienen la Legislatura y el Gobernador de la entidad
 "para aprobar o desaprobare y para proponer "...las
 "propuestas, solicitudes de licencia y renunciaciones de los
 "magistrados del Supremo Tribunal de Justicia...". Por
 "ende, deriva equivocada la susodicha interpretación, al
 "tiempo que violatoria de las normas jurídicas
 "puntualizadas.
 "2°. Volviendo a la ya comentada conclusión a que
 "llegó el sentenciador de primera instancia, acerca de
 "que un Magistrado nada más puede ser reelecto si
 "obtiene "...una segunda designación para el período
 "inmediato posterior para el que fue designado por tres
 "años...", cabe agregar que resulta a todas luces
 "desafortunada, porque con semejante criterio ningún
 "Magistrado que hubiere concluido un período
 "constitucional completo de tres años y continuado
 "ejerciendo el encargo, sin perderlo, para luego ser
 "nuevamente designado para otro trienio, pero no

REVISADO
 DE
 JON
 JUEVES

AMPARO EN REVISION 2633

"inmediato posterior al primero, jamás podría estimarse
"reelecto, al margen de la antigüedad que tuviere en el
"puesto, sino que para ello sería menester siguiendo la
"opinión del a quo que se le volviera a designar para
"dos trienios constitucionales consecutivos, lo cual
"verdaderamente se antoja no sólo antijurídico sino
"contrario al más elemental sentido común.

"3º. En cuanto al artículo 80 de la Constitución
"Michoacana, cuyo texto ya transcribí en párrafos
"precedentes, sostengo que el Juez de amparo también
"lo está interpretando en forma errónea. Cuando
"asevera que, con base en él, si un Magistrado
"concluye su período constitucional de tres años
"contemplado por el numeral 72, párrafo primero, de la
"misma Carta Constitucional, y no es reelecto
"ratificado expresa y formalmente para el trienio
"inmediato siguiente por el Congreso de la entidad, a
"propuesta del titular del Poder Ejecutivo, nunca podrá
"alcanzar la inamovilidad en el cargo, pese a que
"continúe desempeñándolo sin ser sustituido y transcurra
"el tiempo equivalente a uno o más períodos
"constitucionales; a pretexto añade de que tal
"precepto 80 (página trece frente, primer párrafo, de la



AMPARO EN REVISION 2639/96

"sentencia combatida) "...no realiza ninguna distinción
"ni límite en cuanto al tiempo en que continuará en sus
"funciones...", es decir, termina diciendo, porque el
"Magistrado correspondiente deberá continuar en sus
"funciones hasta que se presente quien lo sustituya; en
"otras palabras, porque en casos como ~~el~~ anterior por
"ningún motivo podría operar una reelección o
"ratificación tácita o implícita en el cargo.

"Discrepo de tal consideración, en primer lugar, ya que
"como lo vengo exponiendo desde que formulé mi
"demanda de garantías (páginas de la diez a la
"diecisiete), el artículo 116, fracción III, quinto párrafo,
"de la Constitución General de la República, no prohíbe
"la forma ~~tácita~~ o implícita de reelección o ratificación
"de magistrados de los poderes judiciales de los
"estados, ni tampoco ordena que tenga que ser

S "expresa y formal; de suerte que donde la Constitución
"no distingue, el Juez de amparo tampoco debe
"hacerlo, principio general de derecho que el fallo a
"revisión quebranta en mi perjuicio, por falta de
"aplicación al caso, pues aun cuando el analizado
"precepto 80 del Código Supremo de Michoacán sí
"dispusiera (que no lo hace) la ratificación formal y

AMPARO EN REVISION 2639

"expresa, entonces su texto excedería los alcances de
"aquella norma constitucional federal, de mayor
"jerarquía, a la que le debe subordinación,
"transgrediendo lo dije asimismo en mi demanda. el
"principio de supremacía constitucional inmerso en el
"artículo 133 del Pacto de la Unión. Luego como es
"principio general de derecho que todo lo que no está
"legalmente prohibido, está permitido, debe concluirse
"que sí es válida la reelección o ratificación tácita de un
"Magistrado; máxime que si bien el numeral 116 de la
"Constitución Federal no contempla la forma como
"deben ser designados los magistrados locales, cuestión
"que les está reservada a las constituciones de los
"estados, ya vimos que la actualmente en vigor para
"Michoacán tampoco determina cómo de
"verificarse la reelección de un Magistrado, pues ni
"siquiera define el concepto reelección para los efectos
"de la inamovilidad.
"Pero en segundo término, habida cuenta que entender
"el artículo 80 de la Constitución particular vigente para
"esta entidad federativa, como lo hace en su sentencia
"que recurro el Juez de origen, es por completo injusto e
"irracional. Veamos:




AMPARO EN REVISION 2639/96

"Ya se estableció que la norma que nos ocupa,
"previene: "Los magistrados continuarán en sus
"funciones aunque haya fenecido su período
"constitucional o el plazo para el que fueron
"nombrados, mientras no se presenten los nuevamente
"designados."

"Sin embargo, como efectivamente no se fija un
"término específico para que pueda presentarse el
"sustituto del Magistrado que se halle en la anterior
"hipótesis, lo que corresponde es hacer una
"interpretación sistemática, lógica, congruente,
"racional, equitativa y humana del precepto, a fin de
"desentrañar su verdadero espíritu. Entonces, dicha
"interpretación tiene que ser en el sentido de que a la
"luz del numeral indicado, la sustitución de que ahí se
"habla debe producirse en breve término, o sea en un
"lapso prudente o razonablemente suficiente para que
"el Gobernador proponga al Congreso Estatal a un
"nuevo Magistrado que reemplace al que ya hubiere
"concluido su primer período constitucional de tres años
"y para que dicho Congreso apruebe la propuesta;
"lapso que como también lo esgrimí en mi reclamo de
"protección constitucional no deberá exceder de un

AMPARO EN REVISION 2639

"nuevo trienio, que se juzga por demás prudente o
"amplio para que pudiera efectuarse la sustitución,
"puesto que de lo contrario se crearía para el
"Magistrado no reelecto expresamente, pero tampoco
"sustituido, un estado permanente de incertidumbre o
"zozobra jurídica, en detrimento de su estabilidad en el
"trabajo, al poder pasar que aun cuando permaneciera
"desempeñando su encargo diez, quince, veinte años o
"más, sin objeciones, siempre estaría expuesto a la
"eventualidad de que, el día menos pensado, se
"presentase un Magistrado sustituto que lo desplazara. Y
"es que precisamente para evitar esa incertidumbre o
"zozobra constantes hacia el Magistrado que reúne los
"requisitos para serlo, pero que no hubiere sido
"propuesto para una reelección formal y expresa
"le es por completo imputable, porque de él no
"depende lo contrario, dicha facultad de sustitución
"concedida por el analizado artículo 80 al Gobernador
"del Estado, por fuerza debe tener el límite temporal al
"que ya me referí; de otra manera, se quebrantaría a
"todas luces en perjuicio del Magistrado
"correspondiente, la garantía de seguridad jurídica
"emanada de los preceptos 14 y 16 constitucionales,


SUPREMA CORTE
JUSTICIA DE LA NAC.
SECRETARIA GENERAL DE ACUER.



AMPARO EN REVISION 2639/96

"incidiendo además, indirectamente, en manifiesto
"menoscabo de los justiciables, quienes tienen derecho
"por imperio constitucional al servicio público de
"impartición de justicia (que es de interés social), pero
"proporcionado por juzgadores profesionales,
"honorables e independientes de la voluntad subjetiva
"de los gobernantes en turno. Con diferentes palabras,
"podemos decir que el necesario acotamiento a la
"multirreferida facultad o derecho de sustitución,
"guarda similitud analógica con el que la Ley impone a
"otros derechos, tanto de orden público como privado
"(por ejemplo, el que tiene la sociedad para que se
"sancione al que cometa un delito o para que la misma
"persona ~~compurgue~~ la pena que ya se le hubiere
"impuesto; el que tienen las partes para realizar los
"actos jurídicos procesales; el que asiste a cualquiera de
"los cónyuges en el matrimonio para ejercitar una
"causal de divorcio; el que se concede al acreedor
"para reclamar su crédito; etcétera), en cuyos casos ha
"creado instituciones bien arraigadas en nuestro
"derecho positivo como la prescripción, la caducidad,
"la preclusión, la cosa juzgada y otras más. En el mismo
"sentido, juzgo pertinente invocar, también por

AMPARO EN REVISION 2639

"analogía e identidad jurídica sustancial, la tesis emitida
"por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
"Nación, aprobada por unanimidad de votos con el
"número VIII/95 (9a.), al resolver el amparo directo en
"revisión número 670/93 (Reynaldo Alvaro Pérez Tijerina.
"16 de marzo de 1995. Ponente: Juan Díaz Romero.
"Secretario: Jorge Carenzo Rivas), bajo el rubro:


"LESIONES, LA OMISION EN EL CODIGO PENAL DEL
"ESTADO DE NUEVO LEON DE PREVER UN PLAZO DENTRO
"DEL CUAL SE DEBEN TENER COMO MORTALES, VIOLA
"LAS GARANTIAS DE EXACTA APLICACION DE LA LEY Y
"DE OBSERVANCIA DE LAS FORMALIDADES ESENCIALES
"DEL PROCEDIMIENTO', donde básicamente se sostiene
"que para que el autor del delito de lesiones no caiga
"en un estado de incertidumbre indefensión
"permanentes, sino para que goce de seguridad
"jurídica, la Ley penal (en el caso, la antes
"mencionadas) debe fijar el límite temporal que
"determine hasta cuando la muerte de la víctima
"puede considerarse consecuencia inmediata y directa
"de las lesiones que le ocasionó el activo, pues de lo
"contrario, en lo relativo, esa Ley resulta inconstitucional.
"No aceptarlo así, además de inicuo, antihumano e



AMPARO EN REVISION 2639/96

"irracional, tornándose contrario al más elemental
"respeto a la consideración y al decoro que merecen la
"dignidad y la investidura judiciales; aparte de someter
"al Poder Judicial a la más completa dependencia
"respecto de los Poderes Ejecutivo y Legislativo,
"privándolo de la autonomía que le ~~corresponde~~ en
"nuestro sistema republicano de división de poderes, al
"hacerse prácticamente nugatorio el derecho a la
"inamovilidad judicial, que no puede depender de que
"el Gobernador del estado realice un ejercicio abusivo
"y caprichoso del texto del mencionado artículo 80 de
"la Constitución local, esto es, de que decida a su
"estricto arbitrio y en cualquier momento, para evitarla
"proponer a la Legislatura respectiva la sustitución de un
"Magistrado que ya hubiere completado, cuando
"menos, dos trienios constitucionales sin ser reelecto o
"ratificado formal y expresamente, pero tampoco sin ser
"removido; porque lo verdaderamente trascendental
"resulta que para poder iniciar su encargo el Magistrado
"sea propuesto por dicho Ejecutivo y aprobada su
"propuesta por el Congreso, protestándose a aquél
"conforme a la Ley, pues luego, como antes se razonó,
"el sólo transcurso de cuando menos dos períodos

AMPARO EN REVISION 2639

"constitucionales completos e ininterrumpidos de tres
"años cada uno y la satisfacción de las demás
"exigencias para aspirar al cargo de la magistratura,
"previstas por el cuarto párrafo de la fracción III del
"artículo 116 de nuestra Carta Magna (a saber, entre
"otras: carrera judicial, antigüedad en el cargo,
"vocación, experiencia, probidad, capacidad para
"juzgar, honorabilidad, etcétera), deben bastar para
"adquirir la ansiada inamovilidad, por virtud de una
"reelección o ratificación tácita o implícita, aunque no
"medien una nueva aprobación de ella, formales y
"expresas, que para los efectos de dicha reelección o
"ratificación ya no pueden ser consideradas como
"requisitos ad solemnitatem (o de existencia del acto
"jurídico correspondiente), sino  **REQUISITOS GENERAL DE**
"probationem (o comprobatorios), demostrables por
"cualquier medio convictivo que no deje lugar a duda
"de que se surtieron.

"A mayor abundamiento, no debe perderse de vista
"-reitero- que la propuesta de reelección formal no
"depende del Magistrado de que se trate, pues la Ley
"no contempla procedimiento alguno que le permita
"compeler al titular del Poder Ejecutivo a hacerla, sino



AMPARO EN REVISION 2639/96

"sólo del arbitrio de éste, arbitrio también insisto que
"puede llegar a ser manifiestamente injusto y
"caprichoso cuando aquél jamás proponga la
"reelección expresa de un Magistrado, por más que el
"mismo reúna todas las condiciones legales y
"constitucionales para serlo, a las que ya me referí
"anteriormente. En consecuencia, el derecho a la
"ingmovilidad nada más debe tener su fuente
"primigenia en la Ley, de ahí que la facultad de
"sustitución que el mencionado artículo 80 de la Carta
"Constitucional Michoacana le concede al Gobernador
"del Estado no puede ser irrestricta, sino limitada a las
"circunstancias tanto de hecho como de derecho que
"he dejado ampliamente vertidas, lo cual se traduce en
"la auténtica interpretación sistemática de la
"examinada norma, no tan sólo gramatical y letrista
"como la que efectuó el a quo, en demérito a la vez de
"mi garantía a la seguridad jurídica tutelada por los
"artículos 14 y 16 constitucionales.

"Corroboran todo lo anterior, algunos pasajes
"substanciales de la exposición de motivos del proyecto
"de reformas constitucionales que culminó con el texto
"en vigor del tantas veces señalado artículo 116,

AMPARO EN REVISION 2639

"fracción III, de la Ley Suprema del país, entre los que
"figuran los referentes a que los Tribunales de Justicia
"deben ser independientes, pues sólo así se fortalece
"..."en la realidad social el principio de la división de
"poderes y porque la independencia judicial constituye
"la primera garantía de la jurisdicción... pues sólo cabe
"esperar justicia completa y estricta del Juez
"jerárquicamente libre, dependiente sólo de la Ley..."; a
"que la independencia judicial "...requiere que los
* "jueces al actuar no han de tener otra norma rectora
"que la Ley. La sumisión del Juez a la Ley, le hace
"independiente de la voluntad subjetiva de los nombres
"que gobiernan, e incluso de su propia voluntad,
"cuando ésta propende a la arbitrariedad. El Juez es
"símbolo de la justicia y guardián del derecho. Por ello
"los órganos judiciales deben integrarse con
"procedimientos de selección que permitan unir al
"conocimiento del derecho, la vocación, la experiencia
"y la honorabilidad de quienes los integran. Un buen
"Juez no se improvisa, requiere del transcurso de años
"de estudio y práctica en los tribunales para lograr las
"aptitudes que permitan la justa aplicación de la Ley.
"En cuanto a la estabilidad en el cargo, ésta



278

AMPARO EN REVISION 2639/96

"proporciona a los servidores de la administración de
"justicia la seguridad de que, mientras su conducta sea
"apegada a derecho y obre con justicia, gozará de
"permanencia en su puesto. Sin jueces estables en el
"desempeño de su cargo, la independencia en el
"ejercicio de la función, se ve considerablemente
"disminuida..."; consideraciones ~~toda~~ éstas que son el
"verdadero espíritu de la reforma constitucional aludida
"y que, aun cuando nutren los razonamientos jurídicos
"que hice en las páginas diez a la dieciséis de mi
"demanda de amparo, lamentablemente el Juez
"Tercero del Distrito en el Estado de Michoacán las
"ignoró, ocupándose si acaso de exponer con
"desacuerdo, en la página diez vuelta del fallo
"impugnado, que la inamovilidad constituye una
"garantía pero en favor del justiciable, con lo que por
"supuesto no es posible convenir, pues a la luz de todo
"lo que dejamos dicho, tal garantía se dirige a privilegiar
"inmediata y directamente al juzgador que es quien en
"su caso gozará de la permanencia o estabilidad en el
"cargo, no a los justiciables, quienes sólo de manera
"mediata e indirecta resultarán favorecidos con esa
"garantía constitucional, que les asegura una mejor

AMPARO EN REVISION 2639

"prestación del servicio público de impartición de
"justicia.

"En suma, sí existe en la especie contravención (sic) del
"artículo 80 de la Constitución local al 14 y al 116,
"fracción III, quinto párrafo, de la Federal; en el primer
"caso, por lo que atañe a la garantía de seguridad
"jurídica, según ya lo expliqué; y en el segundo,
"reafirmo, porque si dicho precepto 116, fracción III,
"párrafo quinto, no contempla ningún procedimiento
"formal para adquirir la inamovilidad en el cargo de
"Magistrado, y la local, ni en el artículo 72 ni en el 80 ni
"en otro alguno, prohíben la reelección o ratificación
"tácita, es de concluirse que ésta se encuentra
"permitida; por consiguiente, al estar en pugna una
"norma constitucional local con una norma
"constitucional federal, debe prevalecer esta última,
"sobre todo porque con ello se preserva la garantía de
"seguridad jurídica.

"4º. Ahora bien, en el último párrafo de la página once
"frente de su resolución de primera instancia, el a quo,
"con las diversas pruebas documentales públicas ahí
"mismo descritas (acta de sesión de la Sexagésima
"Tercera Legislatura del Estado, fechada el dos de



AMPARO EN REVISION 2639/96

"enero de mil novecientos ochenta y seis; actas de
"sesión del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia de la
"propia entidad, una de aquella fecha y la otra del seis
"de enero de mil novecientos ochenta y siete;
"fotocopias certificadas de mis diversas credenciales
"respectivas; y copia certificada de mi ~~traza~~ ^{traza} de servicios
"correspondiente), a las que concedió fe plena con
"apoyo en el artículo 222 del Código Federal de
"Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo.
"por así disponerlo el numeral 2º de esta última, dijo que
"estaba acreditado que me desempeñé
"ininterrumpidamente como Magistrado de ese
"Supremo Tribunal de Justicia, durante diez años, un mes
"y veinte días, es decir, durante más de tres periodos
"constitucionales consecutivos de tres años cada uno
"([1986]1989, 1989]1992, 1992]1995).

S Por otra parte, con la última de las probanzas aludidas
"y con los diversos documentos, públicos y privados, no
"objutados por las autoridades responsables, que
"detalle en los puntos números del siete al diez de mi
"escrito de ofrecimiento de pruebas relativo, agregado
"al juicio de garantías, merecedores de absoluto valor
"demostrativo atentos los numerales 202, 203 y 205 del

AMPARO EN REVISION 2639

"Invocado Código Federal de Procedimientos Civiles
"(que por inobservancia vulneró el mencionado
"juzgador, al no haber analizado y valorado las
"documentales de que se trata, en relación con los
"hechos que en seguida indicaré), puse de manifiesto
"que aparte de mi antigüedad como Magistrado,
"previamente ejercí durante más de seis años -también
"ininterrumpidos- como Juez de Primera Instancia en
"diferentes Distritos Judiciales del Estado de Michoacán
"(Juez Mixto de Primera Instancia en el Distrito Judicial
"de Zacapu; Juez Tercero Mixto de Primera Instancia en
"el Distrito Judicial de Uruapan; Juez Segundo de lo Civil
"en este último Distrito Judicial; y Juez Segundo de lo
"Civil en el Distrito Judicial de Morelia); acreditando
"además el resto de mis antecedentes académicos, con
"los que estimo haber justificado modestamente las
"exigencias que, para ejercer la magistratura,
"contempla el cuarto párrafo del artículo 116, fracción
"III, de la Constitución Política de nuestro país, a los
"cuales ya me referí en párrafos precedentes.
"Congruentes con estas premisas, es claro que si al
"concluir mi primer período constitucional de tres años
"como Magistrado (comprendido del mes de

**AMPARO EN REVISION 2639/96**

"septiembre del año de mil novecientos ochenta y seis
"al mes de septiembre del año de mil novecientos
"ochenta y nueve), no fui sustituido en el cargo por otra
"persona, pues por el contrario, continué ejerciendo mis
"funciones libre de objeción alguna, no solamente por
"otro período constitucional de igual duración (1982-
"1992), sino por un trienio más (1992-1995), amen de los
"aproximadamente nueve meses que antecedieron a la
"iniciación del primero de esos períodos, así como de
"los también aproximadamente cinco meses
"subsecuentes a la conclusión del tercero de ellos,
"inconcuso deriva que en términos de la interpretación
"sistemática y racional que debe hacerse del artículos
"80 de la Constitución particular de Michoacán, en
"armonía con el precepto 116, fracción III, quinto
"párrafo, del Pacto Federal, según las argumentaciones
"correspondientes que he dejado hechas en el cuerpo
"de estos agravios, operó en mi favor una reelección o
"ratificación tácita y, por consiguiente, la inamovilidad
"constitucional en la función de Magistrado que tenía
"encomendada, a diferencia de lo que sostuvo en
"contrario el resolutor primario, transgrediendo esa recta
"interpretación; o sea porque la inamovilidad, más que

AMPARO EN REVISION 2639

"por sus implicaciones formales, hay que entenderla en
"función de sus efectos materiales, es decir, atento el
"dato objetivo e irrefutable de haber continuado el
"Magistrado desempeñando su cargo por uno o más
"períodos constitucionales subsecuentes al primero, ya
"que no puede desconocerse la labor desarrollada, en
"mi caso, durante más de tres períodos consecutivos, so
"pena de cuestionar la validez de todas mis
"resoluciones dictadas en esos más de diez años y la de
"todos los actos que desempeñé con la investidura
"judicial de Magistrado, lo que sería absurdo e
"inadmisible, como lo expuesto por el Congreso del
"Estado y por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia
"de la propia entidad en sus informes justificados, donde
"arguyeron que tan pronto como concluí mi primer
"trienio constitucional, quedé en status quo,
"continuando desempeñándome nada más de facto!,
"en términos del numeral 80 a estudio; luego es evidente
"que, en justicia, la antigüedad conquistada por el
"suscrito como Magistrado, amerita ser apta para
"adquirir la inamovilidad, ya que de hacer distinciones
"entre la condición de los magistrados reelectos o
"ratificados expresamente y los no reelectos o no



AMPARO EN REVISION 2639/96

"ratificados de ese modo, pero que hayan seguido
 "desempeñándose sin ser sustituidos, por un segundo o
 "más trienios constitucionales, sería tanto como aceptar
 "la existencia de magistrados "de primera" y de
 "'segunda", lo cual deviene manifiestamente
 "discriminatorio e inícuo.

"Tan es cierto lo acabado de razonar, que con las
 "documentales públicas a que se contraen los puntos
 "números dos, tres y cuatro de mi ya citado escrito de
 "ofrecimiento de pruebas consultable en los autos de
 "primera instancia, participantes de idéntico valor
 "convictivo al que asigné al resto de las probanzas de la
 "misma índole invocadas en anteriores párrafos, quedó
 "plenamente patentizado que los Poderes Ejecutivo y
 "Legislativo Locales, tan consideraron al recurrente
 "implícita o tácitamente reelecto o ratificado, y por
 "ende inamovible, que los gobernadores subsecuentes
 "al que propuso mi nombramiento original (Luis Martínez
 "Villicaña, Jaime Genoveva Figueroa Zamudio, Eduardo
 "Villaseñor Peña y Ausencio Chávez Hernández),
 "estimaron innecesario repetir el acto de la reelección
 "formal, pues jamás propusieron a las Legislaturas
 "Estatales Sexagésima Cuarta, Sexagésima Quinta y

AMPARO EN REVISION 26

"Sexagésima Sexta mi sustitución, y en cambio sí lo
"hicieron respecto de otros muchos magistrados;
"circunstancia esgrimida categóricamente por el
"suscrito quejoso, y ahora inconforme, en el primero de
"los conceptos de violación de mi demanda de
"amparo, pese a lo cual el Juez de Distrito en modo
"alguno se pronunció al efecto, conculcando por
"inobservancia los artículos 77 y 78 de la Ley de
"Amparo, 349, 351 y 352 del supletorio Código Federal
"de Procedimientos Civiles. Pero incluso yendo más allá,
"en el mismo primer concepto de violación de mi
"demanda de garantías le hice notar destacadamente
"al juzgador que debe estimárseme reelecto o
"ratificado hasta de manera expresa, habida cuenta
"que los respectivos Presidentes de la Gran Comisión
"Congreso Local siempre me expedieron las
"correspondientes credenciales oficiales que me
"acreditaron como Magistrado del Suprema Tribunal de
"Justicia del Estado y que se traducen en signos
"inequívocos de mi reelección o ratificación, lo mismo
"que de mi derecho a la inamovilidad, la primera de las
"cuales tuvo validez para el año de mil novecientos
"ochenta y seis, mientras que las tres siguientes la

**AMPARO EN REVISION 2639/96**

"tuvieron para los períodos constitucionales
"consecutivos 19861989, 19891992 y 19921995, según se
"hace constar en ellas explícitamente. Y aún cuando el
"propio Juez concedió a tales credenciales fe plena,
"dada su calidad de documentos públicos no
"objetados por las responsables, en las páginas once
"vuelta y trece también vuelta de su fallo acaba por
"establecer que no pueden ser aptas para demostrar la
"reelección o ratificación en la magistratura ni tampoco
"la inamovilidad, según el, porque no pueden sustituir al
"proceso formal y expreso" de que hablan los artículos
"44, fracción XXI, y 60, fracción IV, de la Constitución
"Michoacana, para reelegir a los magistrados; criterio
"que por supuesto me agravia, al interpretar
"equivocamente las normas en cita, en relación con el
"texto del artículo 116, fracción III, quinto párrafo, de la
"Carta Magna de la República, pues como ya lo expuse
"en los puntos inmediatos anteriores de este segundo
"motivo de inconformidad, el Código Supremo del
"Estado ni siquiera define el concepto de reelección
"para los efectos de la inamovilidad, mucho menos
"estatuye que aquélla tenga que ser expresa y formal
"para poder surtir efectos jurídicos, a cuyos

AMPARO EN REVISION 263

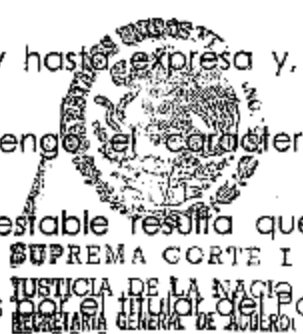
"razonamientos inherentes me remito en obsequio al
"principio de economía procesal; agraviándome
"igualmente el referido criterio del a quo, ya que
"tampoco hizo una correcta apreciación de las
"credenciales mencionadas, al no haber siquiera
"particularizado su contenido ni haberlas relacionado,
"como era menester, con las documentales a que hice
"mérito en el párrafo anterior a éste, donde constan las
"diversas propuestas de sustitución de magistrados
"efectuadas, con exclusión mía, por los gobernadores
"de Michoacán que también ya señalé, lo que era
"imperativo para concluir de la justipreciación conjunta
"y no aislada de tales medios convictivos, que sí hubo
"reconocimiento implícito y hasta explícito o expreso de
"reelección e inamovilidad en el cargo que con
"Magistrado yo venía desempeñando, por parte del
"Ejecutivo, que propone, y del Legislativo, que designa,
"a los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia de la
"Entidad, nueva violación que pido me sea reparada
"en esta segunda instancia. Por último, debo decir que
"el referido Juez Tercero de Distrito, en el párrafo final de
"la página trece vuelta de la sentencia combatida,
"examinó equivocadamente el artículo 1661 del Código



AMPARO EN REVISION 2639/96

"Civil del Estado, porque mi reelección e inamovilidad
"nunca se hizo depender de su aplicación al caso, sino
"más bien se sugirió que de esa norma ordinaria se
"desprendía un principio general de derecho que podía
"reforzar la posibilidad de una reelección tácita en el
"cargo de Magistrado y, por consecuencia lógica, de la
"inamovilidad en el mismo; sobre todo, tomando en
"cuenta, como ya lo vimos ampliamente, que ante lo
"genérico e impreciso del numeral 80 de la Constitución
"Local, resulta indispensable interpretarlo
"sistemáticamente a la luz de todo aquello que permita
"desentrañar su verdadero espíritu, en congruencia.
"desde luego, con lo previsto por el artículo 116.
"fracción III, de la Constitución Política de los estados
"Unidos Mexicanos.
"Tercero. El segundo párrafo de la página 14 catorce
"enfrente y los tres primeros visibles al reverso de la misma.
"correspondientes todos al considerando quinto del
"fallo recurrido, a cuya literalidad hago reenvío en
"obvio de ociosas reiteraciones, igualmente tórnanse
"infractores en mi contra, por interpretación incorrecta,
"del artículo 116, fracción III, párrafo quinto, de la
"Constitución Federal, en relación con el precepto 133

AMPARO EN REVISION 2639

"del propio ordenamiento jurídico y con los numerales
"44, fracción XXI, 60, fracción IV, 72, primer párrafo y 80
"de la Constitución vigente para el Estado de
"Michoacán. Ello es así, por la sencilla razón de que si en
"el agravio que se acaba de expresar (cuyas
"argumentaciones relativas doy por reproducidas, a fin
"de no incurrir en inútiles repeticiones) quedó
"pormenorizadamente demostrado que al momento en
"que fui sustituido en mi puesto de Magistrado de la
"Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia de la
"Entidad, ya había operado a mi favor la reelección o
"ratificación tácita o implícita y hasta expresa y, por
"ende, también ya tenía y tengo el carácter de
"Magistrado inamovible, incontestable resulta que la
"propuesta de sustitución hecha  por el titular del Poder
"Ejecutivo del Estado y su aprobación respectiva
"efectuada por el Congreso Local (Sexagésima Séptima
"Legislatura), a la vez que la adscripción que realizó a
"mi Sala el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, por lo
"que ve al hoy tercero perjudicado, son actos de
"autoridad infractores de los dispositivos en cuestión, a
"la vez que de las garantías de audiencia y legalidad
"consagradas por los artículos 14 y 16 de la



de

AMPARO EN REVISION 2629/96

"mencionada Carta Magna, habida cuenta que
"ninguno de tales actos reclamados debieron haberse
"llevado a cabo sin darme la oportunidad de ser oído y
"vencido en juicio, antes de que ocurrieran, no después
"de que se ejecutaron sin mi conocimiento, contra lo
"que equivocadamente determinó el Juez de amparo,
"por ser de explorado derecho que la garantía de
"audiencia y defensa, así como la de legalidad, deben
"ser previas y no posteriores a los actos de molestia o de
"privación; tanto más cuanto que el artículo 116,
"fracción III, quinto párrafo, del Pacto Federal y su
"concordante 72, párrafo primero, del Código Supremo
"de Michoacán, son perfectamente claros acerca de
"que los magistrados reelectos (y, en consecuencia,
"inamovibles) sólo podrán ser privados de sus puestos en
"los términos previstos por el título cuarto del segundo
"de esos cuerpos normativos y por la Ley de
"Responsabilidades de los Servidores Públicos de la
"Entidad.

"Cuarto. Finalmente, el considerando cuarto de la
"sentencia que combato vulnera, por indebida
"aplicación, los artículos 107, fracción I, de la
"Constitución General de la República, 40. y 73,

AMPARO EN REVISION 2839

"fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en que
"erróneamente se apoyó el a quo para, de oficio,
"sobrescribir la controversia constitucional por lo que
"tocaba al acto reclamado del Gobernador del Estado
"de Michoacán. En efecto, ante todo debe decirse que
"dicho juzgador primario esencialmente sostuvo para
"sobrescribir en lo concerniente a tal acto, que el mismo,
"o sea la propuesta que el citado titular del Poder
"Ejecutivo hizo al Congreso Local para que éste
"sustituyera a diez nuevos magistrados del Supremo
"Tribunal de Justicia de la entidad, entre los cuales me
"encontraba el suscrito quejoso, por otros diez que
"propuso, no era un acto autoritario que me irrogara
"agravio personal ni directo, sino que tenía mero
"carácter eventual, aleatorio o hipotético, pues en todo
"caso dependía de la aprobación final que del mismo
"hiciera esa Legislatura, lo que implicaba una
"posibilidad incierta. Semejante criterio ni siquiera se
"fundamenta en preceptos aplicables al caso, ya que
"tanto el artículo 107, fracción I, constitucional, como los
"numerales 4o. y 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo,
"más bien consagran el principio de instancia de parte
"agraviada rector del juicio constitucional, que tan sólo



985

AMPARO EN REVISION 2639/96

"consiste en que éste siempre debe iniciarse merced a
"la demanda que plantee el quejoso, jamás de oficio
"por la autoridad judicial federal, y no hay duda que la
"controversia que nos ocupa tuvo su causa eficiente en
"la demanda de amparo respectiva que presenté con
"fecha catorce de marzo del corriente año, según
"consta de autos, tanto así, que fue con base en ella
"que el Juez de Distrito ordenó sustanciar esa
"controversia por todas sus partes legales respectivas.
"Bajo otro orden de cosas, el mismo sentenciador de
"primera instancia acepta que, entre diversas
"características a reunir por todo agravio, figura la de
"que éste sea de realización pasada, presente o
"inminente... esto es, haberse producido o estarse
"efectuando en el momento de la promoción del juicio
"o ser inminente... (en esto estriba lo directo del
"agravio)..."; dándose la circunstancia de que, cuando
"yo promoví mi demanda de amparo, dicho acto
"reclamado ya se había materializado, porque aquella
"propuesta de sustitución incluso, como consta de
"autos, se había aprobado desde el veintidós de
"febrero de esta propia anualidad, en cuya virtud cabe
"preguntarle al Juez de Distrito dónde se aprecia la

AMPARO EN REVISION 2639

"incertidumbre, eventualidad o aleatoriedad de que
"esa propuesta se hubiera aprobado. En todo caso, si al
"presentar mi susodicha demanda tal proposición
"hubiera estado aún pendiente de ser aprobada, quizá
"sí se configuraran las referidas modalidades, lo que
"nunca ocurrió. En diverso sentido, adviértase que la
"propuesta cuestionada, de la cual oportunamente
"allegué al juicio una copia que certificó el Oficial
"Mayor del Congreso del Estado, con fe plena atento
"los artículos 129 y 202 del Código Federal de
"Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la
"Ley de Amparo, jamás fue abierta o sujeta a la
"posibilidad de alternativa (por ejemplo, una opción
"entre dos personas, o bien, ternas para cada plaza de
"Magistrado), sino que en ~~ella~~ ^{ella} específica
"taxativamente, se indicó a qué personas se proponía
"para sustituir a dichos diez magistrados (en mi caso se
"propuso al aquí tercero perjudicado), propuesta que
"fue aprobada en sus términos, lo que corrobora su
"ausencia de aleatoriedad o incertidumbre. Mas si todo
"lo destacado fuera insuficiente, quepa entonces
"añadir que el acto de propuesta y el de aprobación,
"son indivisibles, máxime que fue a virtud de eso



AMPARO EN REVISION 2639/96

"proposición del Gobernador que el Congreso actuó y
"decidió la sustitución de magistrados, o sea que aquél
"provocó la intervención de éste, quien no hubiera
"podido sustituir a nadie, motu proprio, o sea sin que le
"fuera propuesto, ya que el mismo juzgador natural
"sostiene que la designación de los magistrados inicia
"con la propuesta del Ejecutivo, a la que debe recaer
"una aprobación del Poder Legislativo. En las
"relacionadas condiciones, como el acto atribuido al
"tantas veces nombrado Gobernador de la entidad sí
"me afecta de manera objetiva, pues consecuencia de
"su propuesta y posterior aprobación fue que se me
"sustituyera en mi puesto de Magistrado, privándoseme
"además de la remuneración económica
"correspondiente, aún cuando como ya quedó
"establecido ampliamente ello no debió ocurrir, dada
"mi calidad de Magistrado inamovible, procede
"revocar el indebido sobreseimiento decretado
"respecto de tal acto de autoridad, para en su lugar
"concederme el amparo respectivo, en grado de
"revisión."

TERCERO. El Congreso del Estado, en su revisión adhesiva

expresó los siguientes agravios:

AMPARO EN REVISION 2639

"Primero. Se infringen en la sentencia que se recurre los
"artículos 4o. y 73, fracción V, de la Ley de Amparo, por
"inobservancia. Parte de la sentencia que lo causa:
"Considerando tercero, fojas 4 reverso a la 8 reverso, de
"la sentencia recurrida, en la que el Juez determinó:
"... el interés jurídico, reputado como un derecho y
"reconocido por la Ley, no es sino lo que la doctrina
"jurídica conoce con el nombre de derecho subjetivo,
"es decir, como facultad o potestad de exigencia, cuya
"institución consigna la norma objetiva..." La resolución
"de amparo es parcial, limitada, ya que el derecho
"subjetivo supone que se actualicen dos elementos
"inseparables, de los cuales, el juzgador federal se refirió
"solamente al primero; ambos son: 1. Una facultad de
"exigir, y 2. Una obligación correlativa, que se traduce
"en el deber jurídico de cumplir tal exigencia, en el
"caso, por parte de las responsables.

"Así, no puede considerarse que existe derecho
"subjetivo y menos aún un interés jurídico, cuando una
"persona tiene únicamente una mera facultad o
"potestad, que surge cuando el orden jurídico objetivo
"solamente concede o regula, una mera actuación,
"particular, sin que ésta se apoye en la capacidad



98

AMPARO EN REVISION 2639/96

"otorgada por dicho orden, para imponerse
"coercitivamente a otro sujeto, es decir, cuando no
"exista un poder de exigencia imperativa; por tanto, el
"interés jurídico implica que la norma consigne una
"situación que pueda aprovechar a algún sujeto, pero
"su observancia no puede reclamarse cuando el
"quejoso reclama para sí el acatamiento de un
"precepto que no le otorga facultad para obtener
"coercitivamente su respeto; por ende, para que exista
"el interés jurídico se necesita que exista un derecho
"subjetivo protegido por la Ley, y que éste sea violado o
"desconocido por las autoridades responsables, solo así
"surge la idoneidad del individuo para ocurrir ante el
"órgano de control constitucional, ejerciendo la
"pretensión de que se le reponga en el goce de sus
"garantías individuales. Por eso, el Juez de Distrito debió
"aclarar que en el asunto que nos ocupa se actualiza la
"causal de improcedencia que se hizo valer en el
"informe justificado, derivada del artículo 73, fracción V,
"de la Ley de Amparo, misma que examinó el Juez de
"Distrito, contrariando el contenido del artículo 78 de la
"mencionada Ley, porque apreció mal los actos
"reclamados y al resolver acerca de la misma no fundó



TE
ACI
SULLE

S

AMPARO EN REVISION 2639

"ni motivó legalmente su determinación. En efecto, el
"Juez de Amparo inició el estudio de la causal de
"improcedencia contemplada en el artículo 73,
"fracción V, de la Ley de la materia, haciendo una
"transcripción de los tres primeros renglones de la
"ejecutoria consultable en el Apéndice al Semanario
"Judicial de la Federación correspondiente a los años
"de 1917 a 1988, Primera Parte, Tribunal Pleno, Páginas
"180181, con el rubro "INTERES JURIDICO, INTERES SIMPLE
"Y MERA FACULTAD", cuando el contenido íntegro de
"esa propia ejecutoria contiene argumentos que
"debieron conducir al a quo a resolver que en el asunto
"a estudio se actualiza la causal de improcedencia de
"que se trata. Con el propósito de poner de manifiesto
"lo anterior, se estima pertinente hacer la transcripción
"de su texto (LO QUE NO HIZO EL JUEZ DE DISTRITO) que
"a la letra es como sigue: "El interés jurídico, reputado
"como un derecho y reconocido por la Ley, no es sino lo
"que la doctrina jurídica conoce con el nombre de
"derecho subjetivo, es decir, como facultad o potestad
"de exigencia, cuya institución consigna la norma
"objetiva del derecho. En otras palabras, el derecho
"subjetivo supone la conjugación en su esencia de dos



AMPARO EN REVISION 2639/96

"elementos inseparables, a saber: una facultad de exigir
"y una obligación correlativa traducida en el deber
"jurídico de cumplir dicha exigencia, y cuyo sujeto,
"desde el punto de vista de su índole, sirve de criterio de
"clasificación de los derechos subjetivos en privados
"(cuando el obligado sea un particular) y en públicos
"(en caso de que la mencionada obligación se impute
"a cualquier órgano del Estado).

"Por tanto, no existe el derecho subjetivo ni por lo mismo
"interés público, cuando la persona tiene sólo una mera
"facultad o potestad que se da cuando el orden
"jurídico objetivo solamente concede o regula una
"mera actuación particular, sin que esta tenga la
"capacidad otorgada por dicha orden, para imponerse
"coercitivamente a otro sujeto, es decir, cuando no
"haya un "poder de exigencia imperativa"; tampoco
"existe un derecho subjetivo ni por consiguiente un
"interés jurídico, cuando el gobernado cuenta con un
"interés simple, lo que sucede cuando la norma jurídica
"objetiva no establezca en favor de persona alguna
"ninguna facultad de exigir, sino que contiene
"solamente una situación cualquiera que puede
"aprovechar algún sujeto, o ser benéfica para éste,

AMPARO EN REVISION 2639

"pero cuya observancia no puede ser reclamada por el
"favorecido o beneficiado, en vista de que el
"ordenamiento jurídico que establezca dicha situación
"no le otorgue facultad para obtener coactivamente su
"respeto. Tal sucede, por ejemplo, con las Leyes o
"reglamentos administrativos que prohíben o regula una
"actividad genérica, o que consagran una
"determinada situación abstracta en beneficio de la
"colectividad. Si el estatuto legal o reglamentario es
"contravenido por algún sujeto, porque su situación
"particular discrepa o no se ajusta a sus disposiciones,
"ninguno de los particulares que obtenga de aquél un
"beneficio o derive una protección puede hacer valer
"tal discrepancia o dicho desajuste por modo coactivo,
"a no ser que el poder de exigencia a tal situación legal
"o reglamentaria se le conceda por el ordenamiento de
"que se trata.

"Por tanto, si cualquier autoridad del Estado determina
"el nacimiento de una situación concreta que sea
"contraria a la primera, desempeñando un acto opuesto o
"no acorde con la Ley o el reglamento respectivo, es a
"esa misma autoridad o a su superior jerárquico a los
"que incumbe imponer fin a dicha contrariedad o



AMPARO EN REVISION 2639/96

"discordancia, revocando o nulificando, en su caso, el
"acto que las haya originado, pues el particular sólo
"puede obtener su revocación o invalidación cuando
"la Ley o el reglamento de que se trate le conceda el
"poder de exigencia correspondiente". Amparo en
"revisión 2747/69. Alejandro Guajardo y otros. 18 de
"enero de 1972. Unanimidad de 19 votos. Ponente: Abel
"Huitrón.

"He aquí el texto íntegro de la tesis de donde el Juez de
"Distrito tomó palabra por palabra, (sin citar la fuente)
"de las utilizadas por él en el último párrafo de la página
"5 reverso de la sentencia que se recurre. Con el texto
"completo se puede entender toda la
"conceptualización. Las primeras líneas, sacadas de
"contexto, se pueden prestar, como en este caso, a una
"mala interpretación.

"Esto es, que el Juez a quo deja de estudiar la causa de
"improcedencia de que se trata, no obstante que la
"debió examinar en ese momento, porque la Ley de
"Amparo lo obliga a hacerlo y técnicamente debe
"analizarse si efectivamente el promovente del amparo
"acredita que con los actos que reclama se afecta su
"interés jurídico, pero entendiendo este no como la

AMPARO EN REVISION 2639.

"mera facultad de ejercicio, así, de manera genérica,
"sino que tiene interés jurídico para promover el amparo
"contra los actos que combate, porque con ello se
"afecta su esfera de derechos; y en la especie, era
"menester que el Juez examinara, en primer término, si
"el peticionario de garantías demostró que es
"Magistrado inamovible, y como tal, si la designación
"de Magistrado en su sustitución afecta sus derechos;
"de otra manera, se colocaría en el supuesto de que
"todos los magistrados sustituidos en términos del
"artículo 72 de la Constitución Política del Estado,
"promovieran el juicio de amparo y se resolviera
"invariablemente el fondo del asunto, aunque no
"acompañaran las pruebas que demostraran que son
"magistrados inamovibles.

"Por tanto este Organo Colegiado estima que se le
"agravia porque el Juez de Distrito contraviene lo
"dispuesto por los artículos antes citados, en cuanto no
"examinó correctamente la causal de improcedencia
"en comento, ya que la falta de interés jurídico por
"parte del quejoso quedó debidamente acreditada en
"autos. Causa agravio al H. Congreso del Estado la

"determinación tomada por el Juez de Distrito, en e





AMPARO EN REVISION 2639/96

"sentido de desestimar la causa de improcedencia
"prevista en el artículo 73, fracción V de la Ley de
"Amparo no obstante que aquélla quedó plenamente
"acreditada en autos.

"Aunque el quejoso afirma que con los actos que
"reclama se afecta su interés, ello ~~no~~ limita a la
"autoridad federal para examinar la real existencia de
"ese interés directo e inmediato que lo faculta para
"promover la acción constitucional; por tanto, la sola
"afirmación del inconstitucional de que los actos de
"autoridad lo agravan porque él tenía de acuerdo a su
"respetable apreciación el carácter de Magistrado
"inamovible, el juzgador federal debió, en primer
"término, apreciar si efectivamente era titular de ese
"derecho, antes de proceder a examinar el fondo del
"juicio, porque no se puede instar al órgano de control
"constitucional a través del juicio de garantías
"aduciendo que se infringe un derecho del quejoso por
"parte de una autoridad responsable si en primer
"término no se acredita que es titular de ese derecho,
"esto es, que efectivamente con el acto de autoridad
"se causa un daño o un perjuicio en los bienes jurídicos
"del gobernado; y en el juicio de garantías al que se

AMPARO EN REVISION 2639

"refiere este recurso no es suficiente con examinar que
"cuando el peticionario del amparo fue substituido,
"como Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia,
"tenía simple y llanamente, al quejoso, el cargo de
"Magistrado, sino que, apreciando el acto reclamado
"en la forma planteada, debió examinarse previamente
"si además tenía el carácter de Magistrado inamovible
"y que, por tal motivo, con el acto de sustitución
"mediante una nueva designación en ese cargo de
"otra persona, se pudiera afectar su derecho de
"inamovilidad; y sentado lo anterior, en su momento
"resolver el fondo del asunto, si el acto que se reclama
"como violatorio de garantías, y que el promovente del
"juicio hizo consistir en que en su calidad de Magistrado
"inamovible que afirma tener, no podía ser substituido por
"otra persona sin que antes se le hubiere destituido del
"cargo, previo juicio político que se le siguiera en el que
"fuera oído; es conveniente señalar que en el informe
"rendido por el Presidente de la Suprema Corte de
"Justicia de la Nación al concluir el año de 1973 en
"ejecutoria contenida en las páginas 310 y 311, se
"publica la que debió servir de orientación y apoyo al a,
"quo para resolver la controversia, en tanto que en ella



AMPARO EN REVISION 2639/96

"se contiene el criterio que a continuación se transcribe:

"PERJUICIO E INTERES JURIDICO. De acuerdo con el

"sistema consagrado por la fracción I del artículo 107

"constitucional y 4º de su Ley Reglamentaria, el ejercicio

"de la acción de amparo se reserva únicamente a la

"parte a quien perjudique el acto ~~o~~ Ley que se

"reclama, entendiéndose como perjuicio la afectación

"por la actuación de una autoridad o, por la Ley de un

"derecho legítimamente tutelado, el que, desconocido

"o violado, otorga al afectado la facultad para acudir

"ante el órgano constitucional competente a efecto de

"que ese derecho protegido por la Ley le sea

"reconocido o que no le sea violado, y esto constituye

"el interés jurídico que el ordenamiento legal de

"amparo toma en cuenta para la procedencia del

"juicio constitucional".

§ Ahora bien, el Juez de Distrito tiene una concepción

"equivocada respecto de lo que es el interés jurídico

"para promover el amparo, porque él hace referencia,

"como se ha dicho, a una definición genérica de lo que

"es el derecho subjetivo, de acuerdo a la doctrina; pero

"el derecho subjetivo, entendido como base de la

"tutela constitucional, no es un interés simple del

AMPARO EN REVISION 2639

"gobernado. En este caso, la pretensión de quien
"desempeñó el cargo de Magistrado, se apoya
"simplemente su afirmación de ser inamovible,
"aduciendo que tiene tal carácter por virtud de la
"aplicación retroactiva que pretende se haga, a raíz de
"la presentación de la demanda de garantías, de una
"norma de la Constitución del Estado, cuando la fuente
"del derecho subjetivo es un precepto legal que lo
"otorga en favor de un individuo, pero para que ello se
"actualice es menester que exista un hecho
"condicionante de la actualización de la norma, lo que
"no ocurrió, pues el propio Juez a quo menciona que el
"quejoso tiene tal interés solo por haberse
"desempeñado hasta la fecha en que acaecieron los
"actos reclamados, como Magistrado del Supremo
"Tribunal de Justicia del Estado, sin hacer ^{SECRET} mención a la
"razón fundamental en que funda los argumentos de la
"afectación del derecho que aduce tiene como
"Magistrado inamovible, circunstancia que no tomó en
"cuenta el Juez para resolver sobre la causal de
"improcedencia de que se trata, sin que tal cuestión
"como se ha dicho, procediera a estudiarla, al
"ocuparse del fondo del asunto, basado en una



AMPARO EN REVISION 2639/96

"equivocada apreciación de los actos reclamados en
 "la forma en que fueron planteados, lo que implica
 "transgresión a lo dispuesto por el artículo 77, fracción II
 "de la Ley de Amparo; así, por razón de orden y técnica
 "y en debida observancia del numeral 73, fracción XVIII,
 "último párrafo, debió primero examinarse de acuerdo
 "con la Ley, y con el derecho del que se decía titular el
 "quejoso, conjuntamente con los actos que de las
 "autoridades responsables reclama, realmente se
 "afecta (sic) el interés jurídico del quejoso, y no un mero
 "interés simple, que es el que puede tener, ya que frente
 "a su pretensión de que se le diera la garantía de
 "audiencia para el Congreso del Estado pudiera
 "destituirse del cargo, y designar un sustituto, no existe
 "ninguna obligación coeable de esta última autoridad,
 "en tanto que aquél no probó su condición de
 "inamovible, ni tenía ni tiene el carácter de Magistrado
 "inamovible y, por tal situación jurídica no tenía ni tiene
 "por qué observarse previamente a su sustitución lo
 "previsto en el artículo 72 de la Constitución del Estado.
 "En la especie, no existe identidad entre el quejoso y el
 "individuo favorecido con una norma que proteja un
 "interés en permanecer (con calidad de inamovible).

AMPARO EN REVISION 2639

"como Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia.

"Por tanto, el Juez de Distrito no debió declarar que en

"el asunto a estudio no se actualiza la causa de

"improcedencia de la que se viene tratando con el

"simple y llano argumento, que por cierto no se funda

"en norma legal alguna, de que el quejoso es titular de

"derecho subjetivo, ya que era Magistrado cuando este

"Congreso del Estado designó a otro en su substitución.

"Los actos de que se queja, y las pruebas que presenta

"en su demanda, no afectan su interés jurídico, y el

"hecho de que el Juez de Distrito diga lo contrario en su

"sentencia, sin previamente examinar si efectivamente

"tenía y/o tiene ese interés, nos agravia. Lo que debió

"examinar el Juez sobre el quejoso, no es si tenía y/o

"tiene un derecho protegido por la Ley en cuanto

"Magistrado, sino precisamente si lo tenía y/o tiene

"como Magistrado inamovible, calidad con la que

"indebidamente se ostentó.

"Puntualicemos. Al Congreso del Estado se le señaló

"como responsable de un acto de autoridad

"consistente en: "La aprobación que llevó a cabo de la

"referida propuesta del titular del Poder Ejecutivo, en

"sesión efectuada por la Sexagésima Séptima



993

AMPARO EN REVISION 2639/96

"Legislatura, el precitado veintidós de febrero
"retropróximo, sin que jamás me hubieren notificado su
"determinación, a través de mandamiento escrito, que
"fundara y motivara la causa legal del procedimiento;
"así como sin que tampoco hubiera mediado en mi
"contra juicio de responsabilidad, ~~juicio~~ político, ni
"procedimiento cual ninguno, en los términos del
"artículo 116, fracción III, penúltimo párrafo, de la
"Constitución General de la República en relación con
"el precepto 72, primer párrafo de la Constitución
"particular del Estado, donde se me hubiese oído, dado
"que por mi calidad de Magistrado inamovible tengo
"pleno derecho a ello, ni menos aún, en donde se me
"haya vencido; reclamando, igualmente, todas las
"consecuencias jurídicas de dicha determinación, en
"especial, la sustitución del cargo de Magistrado que
"hasta entonces todavía yo desempeñaba, adscrito a
"la Quinta Sala Civil del multicitado Supremo Tribunal".
"En nuestro informe justificado hacemos el señalamiento
"de que el quejoso, por ese acto que reclama no tiene
"afectación en su interés jurídico y que, por ende, se
"actualiza la causal de improcedencia que establece
"la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo. Al

AMPARO EN REVISION 2639

"respecto, en todo el expediente no se encuentra
"prueba alguna de afectación al interés jurídico del
"quejoso.

"A este respecto, en nuestro informe justificado,
"manifestamos que los derechos emanados de la
"reelección de los magistrados deberían acreditarse por
"el quejoso, a través de la declaración de inamovilidad
"que el Congreso del Estado debe hacer y ha hecho
"en varios casos. De ello presentamos pruebas que
"obran en autos, añadiendo, por nuestra parte, que el
"quejoso Arreola Vega no había acreditado su derecho
"de supuesto inamovible, por no serlo. De esto no dice
"nada el Juez de Distrito en su sentencia, lo que nos
"agravia, al violar el artículo 17 constitucional y el
"principio de la exhaustividad.

"Así, el Juez Federal reconoce que "las autoridades
"responsables señalan que el juicio de amparo es
"improcedente... porque no se afecta el interés jurídico
"del quejoso" (página 5 reverso de la sentencia). Y
"agrega como única motivación a su resolutivo: "No
"asiste la razón a las autoridades responsables que
"invocan la causal de improcedencia anotada, en
"virtud de que la facultad de exigencia que tiene en



AMPARO EN REVISION 2639/96

"quejoso, deriva precisamente de su calidad de
"Magistrado que ostentaba al emitirse los actos de
"molestia... (página 5 reverso de la sentencia). De lo
"anterior, se desprende que los actos reclamados en
"este juicio sí afectan el interés jurídico del quejoso,
"dado que demostró que los mismos lo afectaron en su
"calidad de Magistrado." (página 5 anverso de la
"sentencia).

"Y en relación a lo anterior no existe ninguna otra
"motivación, ni fundamento alguno. Para el Juez de
"Distrito está demostrado el interés jurídico del quejoso
"únicamente porque "demostró que los mismos lo
"afectaron en su calidad de Magistrado". ¿Cómo se
"puede afectar "la calidad de Magistrado" a alguien
"que ha dejado de serlo en virtud de la nueva
"designación y por ende substitución del mismo que
"hizo el Congreso del Estado en uso de la facultad
"soberana? ¿Cuál es la norma jurídica que le otorga el
"derecho subjetivo a un individuo que simplemente
"tiene "la calidad de Magistrado", para oponerse y
"sentirse agraviado jurídicamente por la determinación
"soberana de los tres poderes del Estado, cada uno en
"la esfera de sus atribuciones? ¿Cuál es esa norma

AM. PARO EN REVISION 2639

"jurídica que impone la obligación correlativa a los tres
"poderes del Estado de satisfacer ese interés jurídico
"supuestamente afectado? Concretamente, ¿Cuál es la
"norma jurídica que le impone al Congreso del Estado la
"obligación correlativa a ese supuesto interés jurídico
"del que venimos preguntando? Y si existe esa norma
"jurídica, ¿Por qué no la invocó en sus términos el
"quejoso, pero sobre todo, porqué no la citó el Juez
"natural de amparo en su sentencia? Volvemos a
"reiterar que los actos reclamados no afectan los
"intereses jurídicos del quejoso.

"No basta ostentarse con el carácter de Magistrado
"inamovible, para que exista la afectación jurídica, es
"necesario tener un derecho reconocido en la Ley. Hay
"dos tipos de magistrados conforme a la Constitución
"local, el inamovible y el que no lo es, este último no
"puede oponer su derecho a las nuevas designaciones.
"El inamovible, sí puede impugnar los nombramientos
"que se hayan hecho en su perjuicio. Para que exista
"agravio en el amparo se requiere que el quejoso sea
"titular de un derecho tutelado por una norma, en este
"caso, haber obtenido la inamovilidad, lo que no,
"demostró, no es suficiente simplemente afirmarlo, ni



AMPARO EN REVISION 2639/96

"establecer una expectativa de derecho. La
"inamovilidad se prueba con la declaración que al
"respecto hace el Congreso del Estado.

"El nombramiento otorgado al quejoso y el tiempo
"durante el cual lo desempeñó no puede traducirse en
"la reelección que establecía la norma vigente en esa
"época, para que hubiese adquirido la inamovilidad, se
"exigían tres nombramientos.

"Y al no citar norma jurídica cual ninguna, el a quo en la
"sentencia que se recurre en revisión no fundamentó ni
"motivó su resolutive, por lo que no observa lo dispuesto
"por el artículo 16 constitucional en su relación con el
"artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo. Violó,
"también, el 76 bis, y el 78 de ese mismo ordenamiento
"de amparo. Todo ello nos agravia.

"Segundo. Se causa agravio a esta responsable porque
"el Juez de Distrito debió declarar la improcedencia del
"juicio al actualizarse la causal prevista en el artículo 73,
"fracción VIII de la Ley de Amparo, en tanto es
"incuestionable que este Congreso del Estado tiene la
"facultad discrecional y soberana, entre otras, de
"aprobar las propuestas de los magistrados del Supremo
"Tribunal de Justicia del Estado, en términos del artículo

AMPARO EN REVISION 2639/

"44, fracción XXI en relación con el 73 de la Constitución
"local; y aunque es verdad que esta potestad soberana
"está autolimitada por el actual artículo 72 de la propia
"Constitución, ya que en los casos en que un
"Magistrado sea reelecto debe ser considerado
"inamovible; lo cierto es que en la especie debió
"examinarse también en forma preferente, como se
"planteó en el informe justificado rendido por esta
"autoridad, si el quejoso tiene el carácter de Magistrado
"inamovible y, por tal motivo, si la facultad discrecional
"y soberana del Congreso fue debida y legalmente
"ejercitada, y al no emprender el análisis de esa
"cuestión sino reservarla para el estudio de fondo del
"asunto, el Juez de origen vulnera el precitado artículo
"73, fracción XVI en relación con la fracción VIII de e
"mismo numeral, e incluso el artículo 44, fracción XXI de
"la Constitución Política del Estado, porque ello no
"debía ser objeto de estudio del fondo sino de previo
"análisis, en tanto debía definirse, si esta autoridad
"actuó o no en ejercicio de su derecho soberano y
"discrecional, y en forma congruente resolver si se surte
"la causal de improcedencia invocada y no abstenerse,
"de examinarla, bajo el argumento de que tal hecho se



gab

AMPARO EN REVISION 2639/96

"examinaría al resolver el fondo del amparo, cuando el
"fondo era determinar si no obstante que el quejoso
"tenía el carácter de Magistrado inamovible (lo que se
"resolvería al analizarse las causas de improcedencia
"aducidas) se designó a otro para que lo sustituyera, sin
"antes proceder en términos del Título Cuarto de la
"propia Constitución local y de la Ley de
"Responsabilidades de los Servidores Públicos del
"Estado.

"Debe agregarse que el Juez de Distrito debió advertir
"que conforme a lo dispuesto por el artículo 80 de la
"Constitución Política del Estado, el Licenciado
"Fernando Arreola Vega, legalmente siguió fungiendo
"como Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del
"Estado, esto es, al concluir el período constitucional
"para el que fue designado, pero sólo mientras no se
"presentara nuevamente designado; argumento que se
"expuso cuando se planteó la causal de
"improcedencia a la que se hace mención, y que no
"fue examinada por el a quo, lo que es inobservancia al
"artículo 17 de la Constitución Federal, respecto a que
"se debe administrar justicia comprenda, afectando así
"el principio de la exhaustividad, en vínculo con los

AMPARO EN REVISION 2656

"artículos 76, 77 y 78 de la Ley de Amparo;
"consecuentemente, la situación jurídica en que quedó
"colocado el Licenciado Fernando Arreola Vega,
"permitió que el Congreso del Estado en ejercicio de su
"soberanía, aprobara la propuesta de designación de
"un nuevo Magistrado que sustituyera al hoy quejoso,
"por lo que tal ejercicio soberano no puede
"considerarse como un acto arbitrario de la autoridad
"que representamos y sí, en cambio, debió llevar al Juez
"a determinar que se actualiza la causa de
"improcedencia a la que se hace mención, máxime
"que se considera que el juez de Distrito
"prácticamente está sustituyendo al Congreso del
"Estado al permitirle al Licenciado Fernando Arreola
"Vega ejercicio de derechos que sólo tienen
"magistrados inamovibles, y Arreola Vega no lo es. El
"quejoso, en todo caso, debió pedir al Congreso que lo
"reeligiera y, en su oportunidad, que hiciera tal
"declaración o reconocimiento, si estimaba que desde
"1988 mil novecientos ochenta y ocho, cuando entró en
"vigor la reforma al artículo 72 de la Constitución
"Política del Estado, debía aplicarse este precepto en,
"forma retroactiva en su beneficio, y, contra la



AMPARO EN REVISION 2639/96

"determinación que al respecto tomara el Congreso del
"Estado, si no favorecía a sus intereses, entonces sí
"plantear el juicio de garantías, de otra manera, el Juez
"de Distrito está invadiendo el ámbito de competencia
"del Poder Legislativo local.

"En fin, el Juez natural resolvió, en la foja ~~7~~ reverso de su
"sentencia "...no se actualiza la causal de
"improcedencia", o sea, la correspondiente a la
"fracción VIII del artículo 73 de la Ley de Amparo.
"Resolvió, así, sin haber entrado, según su mismo decir, a
"esa cuestión que constituye el problema del amparo",
"(foja 8 anverso) en el caso concreto, sin haber siquiera
"examinado, menos determinado, si el quejoso
"Fernando Arreola Vega tenía el carácter de
"Magistrado inamovible y si, por tanto, su situación
"jurídica provocaba la limitación constitucional al
"ejercicio soberano del Congreso. Con ello no observó
"el artículo 14 constitucional en su cuarto párrafo,
"respecto al principio de legalidad en materia civil, en
"vínculo con la fracción VIII del artículo 73 de la Ley de
"Amparo. Este, como el anterior agravio, son suficientes
"para revocar la sentencia que impugnamos, empero,
"nos es menester seguir manifestando todos y cada uno

AMPARO EN REVISION 2639

"de los que nos irroga el resolutivo del Juez natural de
"amparo.

"Tercero. El considerando quinto de la sentencia que se
"recurre en revisión adhesiva contiene razonamientos y
"fundamentación acertados, pero incompletos e
"innecesarios y con ello se viola en perjuicio de esta
"autoridad los artículos 76 bis, 77 fracciones I y II y 78 de
"la Ley de Amparo, por su inobservancia.

"Como ya ha quedado establecido en los agravios
"anteriores, son fundadas y procedentes las causales de
"improcedencia que hemos esgrimido para este
"amparo, por lo que no era necesario, al sobreseer,
"llegar al fondo del asunto. Empero, llegado a él,
"quedaron sin examinar debidamente, algunos de los
"argumentos que expresamos en nuestro informe
"justificado, cuando probamos lo infundado de los
"conceptos de violación esgrimidos por el quejoso.

"Y esta inobservancia al principio de exhaustividad, y al
"principio de legalidad, nos causa agravio, aún
"considerando que la sentencia de amparo fuera
"favorable a nuestros intereses, por lo que nos
"decidimos a promover esta revisión adhesiva. Todos los,
"anteriores agravios se encuentran estrecha e



AMPARO EN REVISION 2639/96

"indisolublemente unidos, y estimamos con base en
"ellos, que procede revocar la sentencia que se recurre,
"y sobreseer en el juicio de amparo promovido por
"Fernando Arreola Vega en contra de los actos que
"reclama del Congreso del Estado. En el supuesto de
"que esa Honorable Suprema Corte de Justicia de la
"Nación resolviese admitir el recurso interpuesto por el
"Licenciado Fernando Arreola Vega y, por ende,
"entrara al estudio de los agravios, solicitamos se
"declaren infundados ~~porque~~, en última instancia,
"como lo consideró el Juzgador Federal, con el acto
"que se reclama del Congreso del Estado no se violan
"las garantías individuales del quejoso, hoy recurrente, ni
"tampoco en la sentencia que se impugna se advierte
"que para negar el amparo, el a quo hubiere hecho
"una inexacta interpretación de un precepto de la
"Constitución de la República, en el caso, de su artículo
"116, pues como ya se ha reiterado en párrafos
"precedentes, únicamente se atendió al contenido de
"los artículos 72 y 80 de la Constitución Política del
"Estado de Michoacán, para resolver la controversia
"constitucional planteada, numerales que fueron
"estrictamente observados por el Congreso del Estado

AMPARO EN REVISION 2639

"al elegir como Magistrado del Supremo Tribunal de
"Justicia de la Entidad al licenciado Felipe Rojas López,
"en substitución del licenciado Fernando Arreola Vega,
"pero solo en su calidad de Magistrado; empero,
"además, como lo tenemos señalado, amplia y
"claramente, el licenciado Fernando Arreola Vega
"jamás fue reelecto como Magistrado, ni menos aún fue
"Magistrado inamovible, por lo que no se violó ninguna
"garantía individual al quejoso. Sólo para informar,
"como una atención, aún sabiendo que seguirá otro
"procedimiento, estimamos necesario hacer del
"conocimiento de esa Honorable Suprema Corte de
"Justicia de la Nación que, en similar juicio de garantías
"promovido por quien también fue ^{EXPR}Magistrado del
"Supremo Tribunal de Justicia del Estado, el licenciado
"Mauro Hernández Pacheco, juicio del que conoció la
"Juez Segundo de Distrito en esta Entidad, formándose
"el expediente I-205/96, ambas sentencias de amparo
"(esta que conocerán ustedes y la del expediente con
"antelación citado) pronunciadas por diferentes jueces
"de distrito (la Juez Segundo de Distrito y el Juez Tercero
"de Distrito, ambos en el Estado de Michoacán) están,
"al parecer, elaboradas por la misma persona y en la



AMPARO EN REVISION 2639/96

"misma computadora, son iguales palabra por palabra,
 "desde su inicio, hasta el penúltimo de sus
 "CONSIDERANDOS. Sólo el último de ellos resulta
 "diferente, y su Punto Resolutivo Segundo. Señalamos el
 "hecho, y en su oportunidad haremos las reflexiones
 "jurídicas correspondientes."

CUARTO. El Tribunal Superior de Justicia del Estado de Michoacán, en su revisión adhesiva formuló los siguientes agravios:

"Primero. En la sentencia que se recurre no se observan
 "los artículos 14, en su párrafo cuarto, y 16 de la
 "Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos,
 "y los preceptos 76 bis, 77, fracciones I y II, y 78 de la Ley
 "de Amparo; y ello nos agravia. En el considerando
 "segundo de dicha resolución, el Ciudadano Juez
 "Tercero de Distrito en el Estado, afirma, sin
 "fundamentación alguna, que "... es cierto el acto

Reclamado al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia
 "del Estado, no obstante que al rendir su informe
 "justificado el citado cuerpo colegiado, niegue la
 "existencia del acto reclamado; toda vez que dicha
 "negativa se ve desvirtuada...". Recordemos que el
 "quejoso en su demanda reclamó al Pleno "el acuerdo
 "tomado en la Sesión de la misma fecha a que me he

AMPARO EN REVISION 2639

"venido refiriendo, para adscribir en sustitución mía,
"como nuevo Magistrado de la Quinta Civil de ese
"Cuerpo Colegiado, al Abogado Felipe Rojas,
"reclamando además todas las consecuencias jurídicas
"que de ello se hubieren derivado." (páginas 3 y 4 de la
"demanda de amparo) Ese acto reclamado, así, de
"manera textual, planteó jurídicamente la litis del
"amparo; y por ende, este Pleno del Supremo Tribunal
"de Justicia del Estado, en cuanto autoridad señalada
"como responsable, rindió su informe justificado
"expresando que "NO ES CIERTO EL ACTO QUE DE ESTA
"AUTORIDAD RECLAMA EL QUEJOSO" al menos en los
"términos por él señalados..." (página 1 de nuestro
"informe justificado) Informe nuestro que completó la
"litis en esta materia. Ahora bien, en su demanda de
"amparo, ni en todo el procedimiento, el quejoso
"Arreola Vega probó su dicho. En ninguna parte del
"expediente se encuentra probado que en la sesión del
"Pleno de fecha 22 veintidós de febrero de mil
"novecientos noventa y seis este cuerpo colegiado
"haya acordado adscribir en sustitución de Fernando
"Arreola Vega, como Magistrado de la Quinta Sala Civil,
"al Abogado Felipe Rojas López. Inserta en autos se



AMPARO EN REVISION 2639/96

"ubica el acta correspondiente, debidamente
"certificada, y de ella jamás se desprende tal
"aseveración. Lo que se hizo fue adscribir al Abogado
"Felipe Rojas López a la Quinta Sala Civil, ¡y eso fue
"todo!, pero nunca el Pleno lo "adscribió en sustitución
"del Abogado Fernando Arreola Vega como nuevo
"Magistrado de esa Sala". Y lo que hizo el Pleno del
"Supremo Tribunal de Justicia del Estado de dar
"adscripciones a los nuevos magistrados en las salas
"existentes, no tuvo relación directa con la estructura de
"la propuesta formulada por el titular del Poder
"Ejecutivo ni con la estructura que se obtuvo de la
"elección indirecta ejercida por el Congreso del Estado.
"En otras palabras, como se podrá observar, no por el
"hecho de que el Abogado Felipe Rojas López fuera
"propuesto y electo como Magistrado, en sustitución del
"Abogado Fernando Arreola Vega, fue adscrito por el
"Pleno a la Quinta Sala Civil. Ni eso siquiera. En el caso
"de él hubo coincidencia, pero en otros casos de los
"diez magistrados electos en el mes de febrero próximo
"pasado la adscripción a Sala no correspondió a
"aquella que tenía adscrita el Magistrado sustituido.
"PARA PROBAR ESTA ASEVERACION ESTAMOS

AMPARO EN REVISION 2639

"ACOMPAÑANDO COPIA CERTIFICADA DE LAS
"ADSCRIPCIONES EN CITA. Es de sobra sabido que las
"Leyes no están sujetas a prueba, menos las
"constituciones. Sin embargo, se nos obliga a transcribir
"los textos de las mismas en este recurso de Revisión
"adhesiva, a efecto de que se recuerden y no se
"olviden. El artículo 116 de la Constitución Política de los
"estados Unidos Mexicanos ordena que "el Poder
"Público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en
"Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse
"dos o más de estos poderes en una sola persona o
"corporación... III. El Poder Judicial del Estado se
"ejercerá por los tribunales que establezcan las
"constituciones respectivas... La independencia de los
"magistrados... en el ejercicio de sus funciones debe
"estar garantizada por las Constituciones y las Leyes
"Orgánicas..." El artículo 70 de la Constitución Política
"del Estado de Michoacán establece que "el Supremo
"Tribunal de Justicia... funcionará en Tribunal Pleno o en
"Salas, en los términos que disponga la Ley... La Ley
"Orgánica del Poder Judicial... distribuirá las
"competencias señalando las funciones que
"correspondan al Presidente, al Pleno y a las Salas."



AMPARO EN REVISION 2636/96

"Con fundamento en las normas constitucionales
"transcritas, la Ley Orgánica del Poder Judicial, en su
"artículo 9o., otorga al Pleno del Supremo Tribunal de
"Justicia la atribución de "determinar, en la primera
"sesión de cada período constitucional, las
"adscripciones permanentes de los magistrados
"propietarios, teniendo en cuenta su especialización o
"experiencia profesional", al igual que "cambiar de
"adscripción a los magistrados propietarios". TODO ESTO
"EN EJERCICIO DE SOBERANIA, en cuanto poder judicial.
"Lo anterior no lo tuvo presente el Juez de Distrito, y esto
"nos agravia. Transcribamos, en síntesis, su errónea
"motivación en ese considerando Segundo: "... es cierto
"el acto reclamado al Pleno del Supremo Tribunal de
"Justicia del Estado, no obstante que al rendir su informe
"justificado el citado cuerpo colegiado, niegue la
"existencia del acto reclamado; toda vez que dicha
"negativa se ve desvirtuada... pues si bien es cierto...
"(página 3 anverso de la sentencia) que en el acta
"número diez del veintidós de febrero de mil
"novecientos noventa y seis, que el cuerpo colegiado
"señalado como responsable, acompañó a su informe
"justificado y se asienta que... (página 3 reverso de la

AMPARO EN REVISION 2639

"sentencia; y aquí transcribe todo el texto del acta, en
"donde se observa que NO ES CIERTO EL ACTO
"RECLAMADO AL PLENO) también lo es que, del acta
"de la Sexagésima Séptima Legislatura Constitucional,
"relativa a la aprobación de la propuesta del titular del
"Poder Ejecutivo, se advierte que ésta fue aprobada en
"el sentido de que el abogado Felipe Rojas López,
"sustituyera al Licenciado Fernando Arreola Vega, de
"manera que, si en el acuerdo de veintidós de febrero
"del año en curso, el Pleno de ese Tribunal determinó
"adscribir como Magistrado de la Quinta Sala Civil, a
"Felipe Rojas López, es incuestionable que,
"materialmente éste sustituyó en sus funciones al ahora
"quejoso." (página 4 anverso y reverso de la sentencia).

"Así es que el acto reclamado al Pleno del Supremo
"Tribunal de Justicia se prueba, según la sentencia del
"señor Juez de Distrito, con el "acta de la Sexagésima
"Séptima Legislatura constitucional."

"Como del acta de referencia del Poder Judicial se
"desprende que no existe el acto que se reclama al
"Pleno, entonces viene la salida que en la sentencia
"encontramos ¡que ni el mismo quejoso se atrevió a,
"esgrimir!, pero que el Juez de Distrito sí, supliendo una



AMPARO EN REVISION 2639/96

"supuesta deficiencia, donde jurídicamente no ha lugar
"a suplir nada. Aquí, como en otras partes de su
"sentencia, el a quo de amparo actúa como Juez y
"como parte al mismo tiempo.

"Lo incuestionable, en este considerando segundo de la
"sentencia que se recurre, es que no ~~existe~~ motivación
"legalmente válida ni fundamento que sustente tal
"aseveración, y que el Juez de Distrito, suscriptor de esa
"sentencia, incuestionablemente sustituyó al quejoso.
"Sin motivación ni fundamentación ese considerando
"segundo nos causa agravio, al no observar el principio
"de legalidad en materia civil que establece el artículo
"14 constitucional, al no dictar sentencia conforme a la
"letra ~~o~~ la interpretación jurídica de la Ley. No acata
"el 16 constitucional al no fundar ni motivar la causa
"legal del procedimiento, causándonos molestia en la
"persona del Pleno, en sus papeles y derechos. Al igual
"que afecta la Ley de Amparo en los artículos ya
"citados, al suplir de hecho la deficiencia de los
"conceptos de violación de la demanda, sin tener base
"jurídica para ello; al dictar sentencia que no contiene
"la fijación clara y precisa del acto reclamado, ni la de
"la apreciación de las pruebas conducentes para tener

AMPARO EN REVISION 2839.

"éste por no demostrado; al dictar sentencia que no
"contiene los fundamentos legales en que se apoya
"para declarar inconstitucional el acto reclamado; al
"dictar sentencia sin apreciar el acto reclamado tal
"como aparece, y aportar y esgrimir como prueba el
"acta de la Legislatura local que se cita en sentencia,
"sin tener nada que ver esa acta con los actos de
"atribución soberana que el Pleno del Supremo Tribunal
"de Justicia del Estado tiene por disposición
"constitucional.

"Volvemos a precisar algunos puntos a este respecto. El
"acto de dar adscripción al nuevo Magistrado elegido
"constituye un ejercicio de la soberanía de que está
"investido el Poder Judicial del Estado, al través del
"Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, por
"establecerlo el artículo 72 de la Constitución particular
"de la entidad, y no debe considerarse como si fuera un
"acto de ejecución, ya que el Pleno del Supremo
"Tribunal de Justicia, tiene el ejercicio de la soberanía
"popular en todo lo que compete a sus atribuciones. La
"independencia y autonomía del poder que
"representamos está clara y evidente desde que fue un
"punto a tratar en la sesión del Pleno efectuada el



AMPARO EN REVISION 2639/96

"veintidós de febrero de mil novecientos noventa y seis:
"la adscripción a las Salas que lo integran, de cada uno
"de los magistrados elegidos, y algunos de ellos no
"fueron adscritos a las mismas salas que ocupaban los
"magistrados a quienes sustituyeron, esto es, en la forma
"en que fueron propuestos por el Ejecutivo y que
"aprobó el Congreso del Estado.

"Luego ateniéndonos al texto de la demanda de
"garantías, en cuanto se refiere al acto que se reclama
"de esta autoridad, no es cierta la existencia de este
"acto, ya que nunca se acordó adscribir al licenciado
"Felipe Rojas López en sustitución del licenciado
"Fernando Areola Vega; y se advierte que en este
"apartado de la sentencia reclamada, al igual que en
"otros que se habrán de precisar en su oportunidad, el
"Juez de Distrito no aprecia el acto reclamado
"vulnerando con ello el artículo 77, fracción I, de la Ley
"de Amparo; en tanto que, para establecer la certeza
"del acto reclamado, el a quo lo hace no como lo
"planteó el quejoso, sino como en suplencia de la queja
"él lo estimó conveniente.

"Esto lo condujo a expresar: "...el Pleno de este Tribunal
"determinó adscribir como Magistrado de la Quinta

AMPARO EN REVISION 2639

"Sala Civil, a Felipe Rojas López, es incuestionable que,
"materialmente se determinó que éste sustituiría en sus
"funciones al ahora quejoso..."; argumento que por sí y
"sin fundamento legal alguno llevó al Juez a estimar que
"no se actualiza la causal de improcedencia prevista en
"el artículo 74, fracción III de la Ley de Amparo; lo que
"desde luego irroga agravio a esta autoridad, porque se
"infringe ese propio numeral en su fracción IV, en
"relación con los artículos 73, fracción XVIII último
"párrafo, 77 fracción I y 78 de ese mismo ordenamiento
"legal, al dictarse una sentencia carente de
"fundamento y de congruencia, porque no se sujeta al
"principio de estricto derecho, no obstante que el
"asunto que nos ocupa corresponde al principio de
"legalidad en materia administrativa.
"Segundo. Se infringen en la sentencia que se recurre
"los artículos 4º y 73, fracción V, de la Ley de Amparo,
"por inobservancia.

"Parte de la sentencia que lo causa: "CONSIDERANDO
"TERCERO", fojas 4 reverso a la 8 reverso, de la
"sentencia recurrida, en la que el Juez determinó: "... el
"interés jurídico, reputado como un derecho y,
"reconocido por la Ley, no es sino lo que la doctrina



AMPARO EN REVISION 2639/96

"jurídica conoce con el nombre de derecho subjetivo,
"es decir, como facultad o potestad de exigencia, cuya
"institución consigna la norma objetiva..." La resolución
"de amparo es parcial, limitada, ya que el derecho
"subjetivo supone que se actualicen dos elementos
"inseparables, de los cuales, el Juzgador Federal se
"refirió solamente al primero; ambos son: 1. Una facultad
"de exigir, y 2. Una obligación correlativa, que se
"traduce en el deber jurídico de cumplir tal exigencia,
"en el caso, por parte de los responsables. Así, no puede
"considerarse que existe derecho subjetivo y menos aún
"un interés jurídico, cuando una persona tiene
"únicamente una mera facultad o potestad, que surge
"cuando el orden jurídico objetivo solamente concede
"o regula, una mera actuación particular, sin que ésta
"se apoye en la capacidad otorgada por dicho orden,
"para imponerse coercitivamente a otro sujeto, es
"decir, cuando no exista un poder de exigencia
"imperativa; por tanto, el interés jurídico implica que la
"norma consigne una situación que pueda aprovechar
"a algún sujeto, pero su observancia no puede
"reclamarse cuando el quejoso reclama para sí el
"acatamiento de un precepto que no le otorga

AMPARO EN REVISION 2639.

"facultad para obtener coercitivamente su respeto; por
"ende, para que exista el interés jurídico se necesita que
"exista un derecho subjetivo protegido por la Ley, y que
"éste sea violado o desconocido por las autoridades
"responsables, sólo así surge la idoneidad del individuo
"para ocurrir ante el órgano de control constitucional,
"ejerciendo la pretensión de que se le reponga en el
"goce de sus garantías individuales.

"Por eso, el Juez de Distrito debió declarar que en el
"asunto que nos ocupa se actualiza la causal de
"improcedencia que se hizo valer en el informe
"justificado, derivada del artículo 73, fracción V de la
"Ley de Amparo, mismo que examinó el Juez de Distrito,
"contrariando el contenido del artículo 78 de la
"mencionada Ley, porque apreció mal los ac-
"reclamados y suplió la deficiencia de la queja en su
"caso no permitido por la Ley, y al resolver acerca de la
"misma, no fundó ni motivó legalmente su
"determinación.

"En efecto, el Juez de Amparo inició el estudio de la
"causal de improcedencia contemplada en el artículo
"73, fracción V, de la Ley de la materia, haciendo una
"transcripción de los tres primeros renglones de la



AMPARO EN REVISION 2639/96

"ejecutoria consultable en el Apéndice al Semanario
"Judicial de la Federación, correspondiente a los años
"de 1917 a 1988, Primera Parte, Tribunal Pleno, páginas
"180181, con el rubro "INTERES JURIDICO, INTERES SIMPLE
"Y MERA FACULTAD", cuando el contenido íntegro de
"esa propia ejecutoria contiene argumentos que
"debieron conducir al a quo a resolver que en el asunto
"a estudio se actualiza la causal de improcedencia de
"que se trata. Con el propósito de poner de manifiesto
"lo anterior, se estima pertinente hacer la transcripción
"de su texto (lo que no hizo el Juez de Distrito) que a la
"letra es como sigue: "El interés jurídico, reputado como
"un derecho y reconocido por la Ley, no es sino lo que
"la doctrina jurídica conoce con el nombre de derecho
"subjetivo, es decir, como facultad o potestad de
"exigencia, cuya institución consigna la norma objetiva
"del derecho. En otras palabras, el derecho subjetivo
"supone la conjugación en su esencia de dos elementos
"inseparables, a saber: una facultad de exigir y una
"obligación correlativa traducida en el deber jurídico
"de cumplir dicha exigencia, y cuyo sujeto, desde el
"punto de vista de su índole, sirve de criterio de
"clasificación de los derechos subjetivos en privados

AMPARO EN REVISION 2639

"(cuando el obligado sea un particular) y en públicos
"(en caso de que la mencionada obligación se impute
"a cualquier órganos del Estado). Por tanto, no existe el
"derecho subjetivo ni por lo mismo interés público,
"cuando la persona tiene sólo una mera facultad o
"potestad que se da cuando el orden jurídico objetivo
"solamente concede o regula una mera actuación
"particular, sin que ésta tenga la capacidad otorgada
"por dicha orden, para imponerse coercitivamente a
"otro sujeto, es decir, cuando no haya un "poder de
"exigencia imperativa"; tampoco existe un derecho
"subjetivo ni por consiguiente un interés jurídico, cuando
"el gobernado cuenta con un interés simple, lo que
"sucede cuando la norma jurídica objetiva no
"establezca en favor de persona alguna ninguna
"facultad de exigir, sino que contiene solamente una
"situación cualquiera que pueda aprovechar algún
"sujeto, o ser benéfica para éste, pero cuya
"observancia no puede ser reclamada por el
"favorecido o beneficiado, en vista de que el
"ordenamiento jurídico que establezca dicha situación
"no le otorgue facultad para obtener coactivamente su
"respeto. Tal sucede, por ejemplo, con las Leyes o



AMPARO EN REVISION 2639/96

"reglamentos administrativos que prohíben o regulan
"una actividad genérica, o que consagran una
"determinada situación abstracta en beneficio de la
"colectividad. Si el estatuto legal o reglamentario es
"contravenido por algún sujeto, porque su situación
"particular discrepa o no se ajusta a sus disposiciones,
"ninguno de los particulares que obtenga de aquél un
"beneficio o derive una protección puede hacer valer
"tal discrepancia o dicho desajuste por modo coactivo,
"a no ser que el poder de exigencia a tal situación legal
"o reglamentaria se le conceda por el ordenamiento de
"que se trata. Por tanto, si cualquier autoridad del
"estado determina el nacimiento de una situación
"concreta, que sea contraria a la primera,
"desempeñando un acto opuesto o no acorde con la
"Ley o el reglamento respectivo, es a esa misma
"autoridad o a su superior jerárquico a los que incumbe
"imponer fin a dicha contrariedad o discordancia,
"revocando o nulificando, en su caso, el acto que las
"haya originado, pues el particular sólo puede obtener
"su revocación o invalidación cuando la Ley o el
"reglamento de que se trate le conceda el poder de
"exigencia correspondiente". Amparo en revisión

AMPARO EN REVISION 2635

"2747/69. Alejandro Guajardo y otros. 18 de enero de

"1972. Unanimidad de 19 votos. Ponente: Abel Huitrón.

"He aquí el texto íntegro de la tesis de donde el Juez de

"Distrito tomó palabra por palabra, (sin citar la fuente)

"de las utilizadas por él en el último párrafo de la página

"5 reverso de la sentencia que se recurre. Con el texto

"completo se puede entender toda la

"conceptualización. Las primeras líneas, sacadas de

"contexto, se pueden prestar, como en este caso, a una

"mala interpretación.

"Esto es, que el Juez a quo deja de estudiar la causa de

"improcedencia de que se trata, no obstante que la

"debió examinar en este momento, porque la Ley de

"Amparo lo obliga a hacerlo y técnicamente debe

"analizarse si efectivamente el promovente del amparo

"acredita que con los actos que reclama se afecta su

"interés jurídico, pero entendiendo éste no como la

"mera facultad de ejercicio, así, de manera genérica,

"sino que tiene interés jurídico para promover al amparo

"contra los actos que combate, porque con ello se

"afecte su esfera de derechos; y en la especie, era

"menester que el Juez examinara, en primer término, si

"el peticionario de garantías demostró que es



AMPARO EN REVISION 2639/96

"Magistrado inamovible, y como tal, si la designación
"de Magistrado en su sustitución afecta sus derechos;
"de otra manera, se colocaría en el supuesto de que
"todos los magistrados sustituidos en términos del
"artículo 72 de la Constitución Política del Estado,
"promovieran el juicio de amparo ^{se} se resolviera
"invariablemente el fondo del asunto, aunque no
"acompañaran las pruebas que demostraran que son
"magistrados inamovibles.

"Por tanto, este tribunal Pleno estima se le agravia
"porque el Juez de Distrito contraviene lo dispuesto por
"los artículos antes citados, en cuanto no examinó
"correctamente la causal de improcedencia en
"comento, ya que la falta de interés jurídico por parte
"del quejoso quedó debidamente acreditada en autos.

"Causa agravio al Pleno del Supremo Tribunal de
"Justicia la determinación tomada por el Juez de
"Distrito, en el sentido de desestimar la causa de
"improcedencia prevista en el artículo 73, fracción V de
"la Ley de Amparo, no obstante que aquélla quedó
"plenamente acreditada en autos, ya que el
"Licenciado Fernando Arreola Vega ya no era
"Magistrado cuando se dio la adscripción al licenciado

MAESTRO DE
ADSCRIPCION
AL TRIBUNAL DE ACUERDO

AMPARO EN REVISION 2639

"Felipe Rojas López, designado ese mismo día por el
"Congreso del Estado.

"Aunque el quejoso afirma que con los actos que se
"reclaman se afecta su interés, ello no limita a la
"autoridad federal para examinar la real existencia de
"ese interés directo e inmediato que lo faculta para
"promover la acción constitucional; por tanto, la sola
"afirmación del inconforme de que los actos de
"autoridad lo agravian porque él tenía de acuerdo a su
"respetable apreciación el carácter de Magistrado
"inamovible, el juzgador federal debió, en primer
"término, apreciar si efectivamente era titular de ese
"derecho, antes de proceder a examinar el fondo del
"juicio, porque no se puede instar al órgano de control
"constitucional a través del juicio de garantías
"aduciendo que se infringe un derecho del quejoso por
"parte de una autoridad responsable si en primer
"término no se acredita que se es titular de ese derecho,
"esto es, que efectivamente con el acto de autoridad
"se causa un daño o un perjuicio en los bienes jurídicos
"del gobernado; y en el juicio de garantías al que se
"refiere este recurso no es suficiente con examinar que
"cuando el peticionario del amparo fue sustituido,



AMPARO EN REVISION 2639/96

"como Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia,
"tenía simple y llanamente, tal quejoso, el cargo de
"Magistrado, sino que, apreciando el acto reclamado
"en la forma planteada, debió examinarse previamente
"si además tenía el carácter de Magistrado inamovible
"y que, por tal motivo, con el acto de sustitución
"mediante una nueva designación en ese cargo de
"otra persona, se pudiera afectar su derecho de
"inamovilidad; y sentado lo anterior, en su momento
"resolver el fondo del asunto, si el acto que se reclama
"como violatorio de garantías, y que el promovente del
"juicio hizo consistir en que en su calidad de Magistrado
"inamovible que afirma tener, no podía ser sustituido por
"otra persona sin que antes se le hubiere destituido del
"cargo, previo juicio político que se le siguiera en el que
"fuera oído; es conveniente señalar que en el informe
"rendido por el Presidente de la Suprema Corte de
"Justicia de la Nación al concluir el año de 1973 en
"ejecutoria contenida en las páginas 310 y 311, se
"publica la que debió servir de orientación y apoyo al a
"quo para resolver la controversia, en tanto que en ella
"se contiene el criterio que a continuación se
"transcribe: "PERJUICIO E INTERES JURIDICO. De acuerdo

AMPARO EN REVISION 2639

"con el sistema consagrado por la fracción I del artículo
"107 constitucional y 4º de su Ley Reglamentaria, el
"ejercicio de la acción de amparo se reserva
"únicamente a la parte a quien perjudique el acto o la
"Ley que se reclama, entendiéndose como perjuicio la
"afectación por la actuación de una autoridad o por la
"Ley de un derecho legítimamente tutelado, el que,
"desconocido o violado, otorga al afectado la facultad
"para acudir ante el órgano constitucional competente
"a efecto de que ese derecho protegido por la Ley le
"sea reconocido o que no sea violado, y esto constituye
"el interés jurídico que el ordenamiento legal de
"amparo toma en cuenta para la procedencia del
"juicio constitucional."

"Ahora bien, el Juez de Distrito tiene una concepción
"equivocada respecto de lo que es el interés jurídico
"para promover el amparo, porque él hace referencia,
"como se ha dicho, a una definición genérica de lo que
"es el derecho subjetivo, de acuerdo a la doctrina; pero
"el derecho subjetivo, entendido como base de la
"tutela constitucional, no es un interés simple del
"gobernado. En este caso, la pretensión de quien
"desempeñó el cargo de Magistrado, se apoya



AMPARO EN REVISION 2639/96

"simplemente en su afirmación de ser inamovible,
"aduciendo que tiene tal carácter por virtud de la
"aplicación retroactiva que pretende se haga, a raíz de
"la presentación de la demanda de garantías, de una
"norma de la Constitución del Estado, cuando la fuente
"del derecho subjetivo es un precepto legal que lo
"otorga en favor de un individuo, pero para que ello se
"actualice es menester que exista un hecho
"condicionante de la actualización de la norma, lo que
"no ocurrió, pues el propio Juez a quo menciona que el
"quejoso tiene tal interés sólo por haberse
"desempeñado hasta la fecha en que acaecieron los
"actos reclamados, como Magistrado del Supremo
"Tribunal de Justicia del Estado, sin hacer mención a la
"razón fundamental en que funda los argumentos de la
"afectación del derecho que aduce tiene como
"Magistrado inamovible, circunstancia que no tomó en
"cuenta el Juez para resolver sobre la causal de
"improcedencia de que se trata, sin que tal cuestión
"como se ha dicho, procediera a estudiarla, al
"ocuparse del fondo del asunto, basado en una
"equivocada apreciación de los actos reclamados en
"la forma en que fueron planteados, lo que implica

AMPARO EN REVISION 2639.

"transgresión a lo dispuesto por el artículo 77 fracción II
"de esa Ley de Amparo; así, por razón de orden y
"técnica y en debida observancia del numeral 73,
"fracción XVIII, último párrafo, debió primero examinar si
"de acuerdo con la Ley, y con el derecho del que era
"titular el quejoso, conjuntamente con los actos que de
"las autoridades responsables reclama, realmente se
"afecta el interés jurídico del quejoso, y no un mero
"interés simple, que es el que puede tener, ya que frente
"a su pretensión de que se le diera la garantía de
"audiencia para que el Congreso del Estado pudiera
"destituirlo del cargo, y designar un sustituto, no existe
"ninguna obligación coercible de esta última autoridad,
"en tanto que aquél no probó su condición de
"inamovible, ni tenía ni tiene el carácter de Magistrado
"inamovible y, por tal situación jurídica no tenía ni tiene
"porqué observarse previamente a su sustitución lo
"previsto en el artículo 72 de la Constitución del Estado.
"En la especie no existe identidad entre el quejoso y el
"individuo favorecido con una norma que proteja un
"interés en permanecer con calidad (con calidad
"inamovible) como Magistrado del Supremo Tribunal de
"Justicia.



AMPARO EN REVISION 2639/96

"Por tanto, el Juez de Distrito no debió declarar que en
"el asunto a estudio no se actualiza la causa de
"improcedencia de la que se viene tratando con el
"simple y llano argumento, que por cierto no se funda
"en norma legal alguna, de que el quejoso es titular del
"derecho subjetivo, ya que era Magistrado cuando el
"Congreso del Estado designó a otro en sustitución, y el
"Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado dio
"adscripción a Sala al nuevo Magistrado. Los actos de
"que se queja, y las pruebas que presenta en su
"demanda, no afectan su interés jurídico, y el hecho de
"que el Juez de Distrito diga lo contrario en su sentencia,
"sin precisamente examinar si efectivamente tenía y/o
"tiene ese interés, nos agravia. Lo que debió examinar
"el Juez sobre el quejoso, no es si tenía y/o tiene un
"derecho protegido por la ley en cuando Magistrado,
"sino precisamente si lo tenía y/o tiene como
"Magistrado inamovible, calidad con la que
"indebidamente se ostentó.

"Puntualicemos: Al Pleno se le señaló como responsable
"de un acto de autoridad: "el acuerdo tomado en la
"sesión de la misma fecha a que me he venido
"refiriendo, para adscribir en sustitución mía, como

AMPARO EN REVISION 2639

"nuevo Magistrado de la Quinta Sala Civil de ese
"Cuerpo Colegiado, al abogado Felipe Rojas López,
"reclamando además todas las consecuencias jurídicas
"que de ello se hubieren derivado." (páginas 3 y 4 de la
"demanda de amparo).

"Como lo tenemos anotado, no se prueba la existencia
"del acto reclamado; empero, además, en nuestro
"informe justificado hacemos el señalamiento de que el
"quejoso, por ese acto que reclama, no tiene
"afectación en su interés jurídico y que, por ende, se
"actualiza la causal de improcedencia que establece
"la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo. Al
"respecto, en todo el expediente no se encuentra
"prueba alguna de afectación al interés jurídico del
"quejoso.

"A este respecto, en nuestro informe justificado,
"manifestamos que los derechos emanados de la
"reelección de los magistrados debería acreditarse por
"el quejoso, al través de la declaración de inamovilidad
"que el Congreso del Estado debe hacer, y ha hecho
"en varios casos. De ellos presentamos pruebas que
"obran en autos, añadiendo, por nuestra parte, que el
"quejoso Arreola Vega no había acreditado su derecho



AMPARO EN REVISION 2639/96

"de su puesto inamovible, por no serlo. De esto no dice
"nada el Juez de Distrito en su sentencia, lo que nos
"agravia, al violar el artículo 17 constitucional y el
"principio de exhaustividad.

"Así, el Juez Federal reconoce que "las autoridades
"responsables señalan que el juicio ~~de~~ amparo es
"improcedente... porque no se ~~afecta~~ el interés jurídico
"del quejoso" (página 5 reverso de la sentencia). Y
"agrega como única motivación a su resolutivo: "No
"asiste la razón a las autoridades responsables que
"invocan la causal de improcedencia anotada, en
"virtud de que la facultad de exigencia que tiene el
"quejoso, deriva precisamente de su calidad de
"Magistrado que ostentaba al emitirse los actos de
"molestia... (página 5 reverso de la sentencia). De lo
"anterior, se desprende que los actos reclamados en
"este juicio sí afectan el interés jurídico del quejoso,
"dado que demostró que los mismos lo afectaron en su
"calidad de Magistrado." (página 5 anverso de la
"sentencia). Y en relación a lo anterior no existe ninguna
"otra motivación, ni fundamento alguno.

"Para el Juez de Distrito está demostrado el interés
"jurídico del quejoso únicamente porque "demostró que

COPIA DE
LA SENTENCIA
AN...
S
E
I
T
E
N

AMPARO EN REVISION 2635.

"los mismos lo afectaron en su calidad de magistrados."
"¿Cómo se puede afectar la "calidad de Magistrado"
"por la sola adscripción de la Sala, que es en sí lo que se
"le reclama al Pleno? ¿Cómo se puede afectar la
"calidad de Magistrado" a alguien que ha dejado de
"serlo, para un Pleno que debe hacer la adscripción de
"las salas, en su ejercicio soberano? ¿Cuál es la norma
"jurídica que le otorga el derecho subjetivo a un
"individuo que simplemente tiene la "calidad de
"Magistrado" para oponerse y sentirse agraviado
"jurídicamente por la determinación soberana de los
"tres poderes del Estado, cada uno en la esfera de sus
"atribuciones? ¿Cuál es esa norma jurídica que impone
"la obligación correlativa a los tres Poderes del Estado
"de satisfacer ese interés jurídico supuesto?
"afectado?. Concretamente, ¿Cuál es la norma
"jurídica que le impone al Pleno del Supremo Tribunal
"de Justicia del Estado la obligación correlativa a ese
"supuesto interés jurídico del que venimos
"preguntando?. Y si existe esa norma jurídica, ¿por qué
"no la invocó en sus términos el quejoso pero sobre
"todo, por qué no la citó la Juez natural de amparo en
"su sentencia?



AMPARO EN REVISION 2639/96

"Volvemos a reiterar que los actos reclamados no
"afectan los intereses jurídicos del quejoso, menos aún
"el acto reclamado al Pleno del Supremo Tribunal de
"Justicia del Estado. No basta ostentarse con el
"carácter de Magistrado inamovible para que exista la
"afectación jurídica, es necesario tener un derecho
"reconocido en la Ley. Hay dos tipos de magistrados,
"conforme a la Constitución local, el inamovible y el
"que no lo es, este último no puede oponer su derecho
"a las nuevas designaciones. El inamovible, sí puede
"impugnar los nombramientos que se hayan hecho en
"su perjuicio.
"Para que exista agravio en el amparo se requiere que
"el quejoso sea titular de un derecho tutelado por una
"norma, en este caso, haber obtenido la inamovilidad.
"lo que no demostró, no es suficiente simplemente
"afirmarlo, ni establecer una expectativa de derecho
"La inamovilidad se prueba con la declaración que al
"respecto hace el Congreso del Estado.
"El nombramiento otorgado al quejoso y el tiempo
"durante el cual lo desempeñó no puede traducirse en
"la reelección que establecía la norma vigente en esa
"época, para que hubiese adquirido la inamovilidad, se

AMPARO EN REVISION 2639

"exigían tres nombramientos.

"Y al no citar norma jurídica cual ninguna, el a quo en la
"sentencia que se recurre en revisión no fundamentó ni
"motivó su resolutive, por lo que no observa lo dispuesto
"por el artículo 16 constitucional, en su relación con el
"artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo. Violó,
"también, el 76 bis, y el 78 de ese mismo ordenamiento
"del amparo. Todo ello nos agravia.

"Tercero. Se causa agravio a esta "responsable porque
"el Juez de Distrito debió declarar la improcedencia del
"juicio al actualizarse la causal prevista en el artículo 73.
"fracción VIII de la Ley de Amparo, en tanto es
"incuestionable que el Congreso del Estado tiene la
"facultad discrecional y soberana, entre otras, de
"aprobar las propuestas de los magistrados del Supremo
"Tribunal de Justicia del Estado, en términos del artículo
"44, fracción XXI, en relación con el artículo 73 de la
"Constitución local; y aunque es verdad que la
"potestad soberana del Poder Legislativo esta
"autolimitada por el actual artículo 72 de la propia
"Constitución, ya que en los casos en que un
"Magistrado sea reelecto debe ser considerado,
"inamovible; lo cierto es que en la especie debió



AMPARO EN REVISIÓN 2639/96

"examinarse también en forma preferente, como se
"planteó en el informe justificado rendido por esta
"autoridad, si el quejoso tiene el carácter de Magistrado
"inamovible y, por tal motivo, si la facultad discrecional
"y soberana del Congreso del Estado fue debida y
"legalmente ejercida, y al no emprender el análisis de
"esa cuestión sino reservarla para el estudio de fondo
"del asunto, el Juez de origen vulnera el precitado
"artículo 73, fracción XVI, en relación con la fracción
"VIII, de ese mismo numeral, e incluso el artículo 44,
"fracción XXI de la Constitución Política del Estado,
"porque ello no debía ser objeto de estudio del fondo,
"sino de previo análisis, en tanto debía definirse, si la
"autoridad mencionada (Congreso local) actuó o no en
"ejercicio de su derecho soberano y discrecional, y en
"forma congruente resolver si se surte la causal de
"improcedencia invocada y no abstenerse de
"examinarla, bajo el argumento de que tal hecho se
"examinaría al resolver el fondo del amparo, cuando el
"fondo era determinar si no obstante que el quejoso
"tenía el carácter de Magistrado inamovible, (lo que se
"resolvería al analizarse las causas de improcedencia
"aducidas) se designó a otro para que lo sustituyera, sin

TIENE
A
AL

SE

AMPARO EN REVISION 2639.

"antes proceder en términos del Título Cuarto de la
"propia Constitución local y de la Ley de
"Responsabilidades de los Servidores Públicos del
"Estado.

"Debe agregarse que el Juez de Distrito debió advertir
"que conforme a lo dispuesto por el artículo 80 de la
"Constitución Política del Estado, el licenciado Fernando

"Arreola Vega legalmente siguió fungiendo como

"Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado,

"esto es, al concluir el período constitucional para el

"que fue designado, pero sólo mientras no se

"presentada el nuevamente designado; argumento que

"se expuso cuando se planteó la causal de

"improcedencia a la que se hace mención y que no

"fue examinada por el a quo, lo que es inobservancia

"artículo 17 de la Constitución Federal, respecto a que

"se debe administrar justicia completa, afectando así el

"principio de la exhaustividad, en vínculo con los

"artículos 76, 77 y 78 de la Ley de Amparo;

"consecuentemente, la situación jurídica en que quedó

"colocado el licenciado Arreola Vega, permitió que el

"Congreso del Estado en ejercicio de su soberanía,

"aprobara la propuesta de designación en un nuevo



AMPARO EN REVISION 2639/96

"Magistrado que sustituyera al hoy quejoso, por lo que
"tal ejercicio soberano no puede considerarse como un
"acto arbitrario de la citada autoridad y sí, en cambio,
"debió llevar al Juez a determinar que se actualiza la
"causa de improcedencia a la que se hace mención,
"máxime que se considera que el juzgador de Distrito
"prácticamente está sustituyendo a la autoridad
"competente (Congreso del Estado) al permitirle al
"licenciado Fernando Arreola Vega ejercicio de
"derechos que sólo tienen los magistrados inamovibles,
"y Arreola Vega no lo es. El quejoso, en todo caso,
"debió pedir al referido Congreso que lo reeligiera y, en
"su oportunidad, que hiciera tal declaración o
"reconocimiento, si estimaba que desde mil
"novecientos ochenta y ocho, cuando entró en vigor la
"reforma al artículo 72 de la Constitución Política del
"Estado, debía aplicarse este precepto en forma
"retroactiva en su beneficio, y, contra la determinación
"que al respecto tomara el Congreso del Estado, si no
"favorecía a sus intereses, entonces sí plantear el juicio
"de garantías, de otra manera, el Juez de Distrito está
"invadiendo el ámbito de competencia del Poder
"Legislativo local. Lo que nosotros señalamos como

AMPARO EN REVISION 2639.

"agravio, en virtud que el mismo juzgador de amparo
"nos relaciona con ese acto del Poder Legislativo,
"autoridad de todo nuestro respeto.

"En fin, el Juez Natural resolvió, en la foja 6 reverso de su
"sentencia, "...no se actualiza la causal de
"improcedencia", (foja 6 reverso) o sea, la
"correspondiente a la fracción VIII del artículo 73 de la
"Ley de Amparo. Resolvió, así, sin haber entrado, según
"su mismo decir, a "esa cuestión que constituye el
"problema de fondo del amparo", (foja 8 anverso) en el
"caso concreto, sin haber siquiera examinado, menos
"determinado, si el quejoso Fernando Arreola Vega
"tenía el carácter de Magistrado inamovible y si, por
"tanto, su situación jurídica provocaba la limitación
"constitucional al ejercicio soberano del Congreso. Co
"ello no observó el artículo 14 Constitucional en su
"cuarto párrafo, respecto al principio de legalidad en
"materia civil, en vínculo con la fracción VIII del artículo
"73 de la Ley de Amparo.

"Este, como los anteriores agravios, son suficientes para
"revocar la sentencia que impugnamos, empero, nos es
"menester seguir manifestando todos y cada uno de los
"que nos irroga el resolutivo del Juez natural de amparo.



AMPARO EN REVISION 2639/96

"Cuarto. Causa agravio, a esta autoridad, el que el Juez
"Federal en su sentencia, dentro del considerando
"tercero, específicamente en la foja 8 reverso, examine
"la causal de improcedencia que se adujo al rendir el
"informe justificado, prevista en el artículo 73, fracción
"XVIII, en relación con el numeral 116, fracción V, de la
"Ley de Amparo, consistente en que el quejoso no
"formuló conceptos de violación en contra del acuerdo
"que reclama del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia
"del Estado; pues al respecto, esta autoridad estima que
"el Juez de Distrito expuso un razonamiento falto de
"fundamento jurídico y, por ende, es ilegal la decisión
"de declarar improcedente la causal invocada, ya que
"al efecto el Juez se concreta a manifestar: "Es
"infundada dicha causa de improcedencia, ya que no
"obstante que asista razón a la responsable, en el
"sentido de que el quejoso no expresa ningún concepto
"de violación en contra del acto reclamado al Pleno
"del Cuerpo Colegiado aludido, lo cierto es que el
"impetrante impugna éste, como una consecuencia
"jurídica y necesaria de los actos reclamados, a las
"restantes autoridades, por lo que de declararse
"constitucionales o inconstitucionales éstos, acarrearía

AMPARO EN REVISION 2639

"la de aquél".

"Debe agregarse, reiterando lo ya dicho, que el acto
"reclamado del Pleno es producto del ejercicio
"soberano del que está investido, pues en nuestro
"sistema constitucional se ha establecido el principio de
"división de poderes, por imperio expreso del artículo
"116 de la Constitución de la República, y el 17 de la
"Constitución particular del Estado. Luego, la
"adscripción de los magistrados a las salas que lo
"integran es decisión propia, y en cumplimiento del
"ejercicio soberano, y de ninguna manera su
"determinación puede calificarse en cuanto a su
"constitucionalidad o inconstitucionalidad, por la
"designación que el Congreso del Estado, hubiere
"hecho porque bien pudo adscribir, como lo acordó,
"Magistrado Felipe Rojas López para ocupar la Quinta
"Sala Civil, o bien, pudo haberlo adscrito a cualquier
"otra Sala, como fue el caso de otros magistrados que
"fueron electos el día veintidós de febrero del año en
"curso; esto es, la adscripción del Magistrado Rojas
"López precisamente a la sala mencionada no fue una
"consecuencia necesaria y jurídica del acto que se,
"reclama al Congreso del Estado; en todo caso, son dos

10/6



AMPARO EN REVISION 2639/96

"actos independientes y autónomos, ambos en ejercicio
"de soberanía de dos poderes distintos; uno, de la
"elección, en la que el Pleno del Supremo Tribunal de
"Justicia desde luego no tuvo injerencia, porque no le
"compete como atribución ese acto de ejercicio
"soberano del Congreso; y, otro acto distinto que
"proviene de un poder diferente es la adscripción a las
"salas de los magistrados elegidos, y como tal acto no
"es el mismo que se reclama a las demás, ejercido por
"una autoridad diferente, con base en otras normas
"jurídicas, distintas a las que sirvieron de fundamento a
"las demás autoridades señaladas como responsables.
"ejecutado en un momento y en un espacio jurídicos
"distintos, en contra de él debieron expresarse los
"conceptos de violación que el quejoso estimara se le
"causaban con el mismo; por lo que no debe dársele al
"acto de este Tribunal Pleno el tratamiento de un acto
"de ejecución, porque como ya se señaló, el Poder
"Judicial no ejecuta los actos del Poder Legislativo, por
"no ser órgano que dependa de éste; y si no se
"expresaron motivos de inconformidad por parte del
"agraviado es porque no hay argumento jurídico
"valedero que impugne el acto que imputa a esta

AMPARO EN REVISION 2639

"autoridad; por tanto, como el peticionario de garantías
"no cumplió con lo ordenado en el artículo 116,
"fracción V, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103
"y 107 constitucionales, debió sobreseerse el juicio por lo
"que ve al acto que de esta autoridad reclama; y al no
"hacerlo, el Juez Federal transgrede los numerales
"invocados, y ello deberá conducir a revocar la
"sentencia recurrida. Observemos que el Juez de
"amparo reconoce que "asiste la razón a la
"responsable, en el sentido de que el quejoso no
"expresa ningún concepto de violación en contra del
"acto reclamado al Pleno..."

"Esto es suficiente para que ipso jure se actualice la
"fracción V del artículo 116 de la Ley de Amparo.

"Es falso lo que expresa el Juez natural, en este juicio.

"decir que "lo cierto es que el impetrante impugna este.

"(se refiere al acto reclamado al Pleno) como una
"consecuencia jurídica y necesaria de los actos
"reclamados, a las restantes autoridades".

"Si se analiza la demanda de amparo se notará que

"jamás el quejoso hizo tal razonamiento, por lo que al

"establecerlo así, el Juez federal, transgrede el artículo,

"76 bis de la Ley de Amparo, al suplir la deficiencia de



AMPARO EN REVISION 2639/96

"los conceptos de violación, sin que haya fundamento
"legal para ello.

"El quejoso, de manera precisa, habla de tres
"autoridades responsables, y para cada una de ellas
"establece en forma tajantemente separada los actos
"que les reclaman.

"Cuando el Juez señala en las tres últimas líneas del
"considerando Tercero de su sentencia que "...por lo
"que de declararse constitucionales o inconstitucionales
"éstos, (se refiere a los actos reclamados al Gobernador
"y al Congreso) ~~agregaría la de aquél~~", produce un
"razonamiento contradictorio. Con esa lógica hubiera
"sobresido, para los tres poderes, en virtud de que lo
"hizo para uno de ellos. Lo que observamos a este
"respecto es que carece de motivación y de
"fundamentación, no atendiendo así lo que
"corresponde a lo ordenado por los artículos 14 y 16
"constitucionales, en su relación con los preceptos de la
"Ley de Amparo que ya han sido invocados.

"Se estima que los anteriores agravios deben declararse
"fundados, procedentes, y como consecuencia debe
"revocarse la sentencia recurrida y sobreseer en el juicio
"por lo que ve al acto reclamado al Pleno del Supremo

AMPARO EN REVISION 2639

"Tribunal de Justicia del Estado.

"Quinto. El considerando quinto de la sentencia que se
"recurre en revisión adhesiva contiene razonamientos y
"fundamentación acertados, pero incompletos e
"innecesarios, y con ello se violan en perjuicio de esta
"autoridad, los artículos 76 bis, 77, fracciones I y II, y 78
"de la Ley Amparo, por su inobservancia.

"Como ya ha quedado establecido en los agravios
"anteriores, son fundadas y procedentes las causales de
"improcedencia que hemos esgrimido para este
"amparo, por lo que no era necesario, al sobreseer, no
"llegar al fondo del asunto.

"Empero, llegados a él, quedaron sin examinar,
"debidamente, algunos de los argumentos que
"expresamos en nuestro informe justificado, tanto
"cuando probamos la inexistencia del acto que se nos
"reclamaba, como cuando probamos lo infundado de
"los conceptos de violación esgrimidos por el quejoso.
"Y esta inobservancia al principio de exhaustividad, y al
"principio de legalidad, nos causa agravio, aún
"considerando que la sentencia de amparo fuera
"favorable a nuestros intereses, por lo que nos,
"decidimos a promover esta revisión adhesiva.



AMPARO EN REVISION 2639/96

"Todos los anteriores agravios se encuentran estrecha e
"indisolublemente unidos, y estimamos, con base en
"ellos, que procede revocar la sentencia que se recurre,
"y sobreseer en el juicio de amparo promovido por
"Fernando Arreola Vega, en contra de los actos que
"reclama del Congreso del Estado y del Pleno del
"Supremo Tribunal de Justicia de esta propia entidad.
"Desde luego que al sobreseimiento al que tenemos
"claro derecho es en relación al acto reclamado al
"Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, pero
"si solicitamos también el sobreseimiento respecto al
"acto reclamado al honorable Congreso del Estado es
"en base a la relación que la sentencia recurrida
"establece entre estos dos poderes y sus actos
"reclamados.
"En el supuesto de que esa Honorable Suprema Corte
"de Justicia de la Nación resolviese admitir el recurso
"interpuesto por el licenciado Fernando Arreola Vega y,
"por ende, entrara al estudio de los agravios, solicitamos
"se declaren infundados porque, en última instancia,
"como lo consideró el Juzgador Federal, con el acto
"que se reclama de este Pleno no se violan las garantías
"individuales del quejoso, hoy recurrente, ni tampoco en

AMPARO EN REVISION 2639

"la sentencia que se impugna se advierte que para
"negar el amparo, el a quo hubiere hecho una inexacta
"interpretación de un precepto de la Constitución de la
"República, en el caso, de su artículo 116, pues como ya
"se ha reiterado en párrafos precedentes, únicamente
"se atendió al contenido de los artículos 72 y 80 de la
"Constitución Política del Estado de Michoacán, para
"resolver la controversia constitucional planteada,
"numerales que fueron estrictamente observados por el
"Congreso del Estado, al elegir como Magistrado del
"Supremo Tribunal de Justicia de la entidad al
"licenciado Felipe Rojas López, en sustitución del
"licenciado Fernando Arreola Vega, pero solo en su
"calidad de Magistrado, elección indirecta que de
"ninguna manera implicó la adscripción del elegido a la
"Quinta Sala Civil; ^{pero} ~~empero~~, además, como lo tenemos
"señalado, amplia y claramente, el licenciado
"Fernando Arreola Vega jamás fue reelecto como
"Magistrado, ni menos aún fue Magistrado inamovible,
"por lo que no se violó ninguna garantía individual al
"quejoso.

"El Pleno de este Supremo Tribunal de Justicia del
"Estado, en uso de sus facultades y en ejercicio de su



AMPARO EN REVISION 2639/96

"soberanía, fue el que adscribió al Magistrado Felipe
"Rojas López a la Quinta Sala Civil.

"Sólo para informar, como una atención, aún sabiendo
"que seguirá otro procedimiento, estimamos necesario

"hacer del conocimiento de esa Honorable Suprema

"Corte de Justicia de la Nación que, en similar juicio de

"garantías promovido por quien también fuera

"Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado,

"el licenciado Mauro Hernández Pacheco, juicio del

"que conoció la Juez Segundo de Distrito en esta

"entidad, formándose el expediente I-205/96, ambas

"sentencias de amparo (ésta que conocerán ustedes y

"la del expediente con antelación citado)

"pronunciadas por diferentes Jueces de Distrito (la Juez

"Segundo de Distrito y el Juez Tercero de Distrito, ambos

"en el Estado de Michoacán) están, al parecer,

"elaboradas por la misma persona y en la misma

"computadora.

"Son iguales palabra por palabra, desde su inicio hasta

"el penúltimo de sus considerandos. Sólo el último de

"ellos resulta diferente, y su punto resolutivo segundo.

"Señalamos el hecho, y en su oportunidad haremos las

"reflexiones jurídicas correspondientes."

AMPARO EN REVISION 2639/94

QUINTO. Dado que las cuestiones de improcedencia son de orden público y estudio preferente, en primer término procede el análisis de las planteadas por el Congreso y por el Pleno del Superior Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán en sus respectivos recursos de revisión adhesiva. Sobre el particular se aplica la tesis de jurisprudencia número 69/1997 de este Tribunal Pleno, pendiente de publicarse y que es del tenor siguiente:

"REVISIÓN ADHESIVA. CUANDO EN SUS AGRAVIOS SE
"PLANTEA LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE
"GARANTÍAS, ESTOS DEBEN ANALIZARSE PREVIAMENTE A
"LOS EXPRESADOS EN LA REVISIÓN PRINCIPAL. La regla
"general es que si los agravios de la revisión principal no
"prosperan, es innecesario el examen de los expresados
"en la revisión adhesiva, o bien que primero se estudien
"los agravios de la principal y luego de haber
"prosperado aquéllos, los de la adhesiva, por tener ésta
"un carácter accesorio de aquella. Sin embargo, si en la
"revisión adhesiva se alegan cuestiones relativas a la
"improcedencia del juicio de garantías, éstas deben
"analizarse previamente a la revisión principal, por ser
"dicho estudio una cuestión de orden público en
"términos del último párrafo del artículo 73 de la Ley de
"Amparo."



AMPARO EN REVISION 2639/96

Las citadas autoridades recurrentes, alegan en síntesis lo siguiente:

A). Que el Juez de Distrito apreció incorrectamente los actos reclamados, suplió indebidamente la deficiencia de la queja y emitió una sentencia carente de la debida fundamentación y motivación, ya que debió analizar si el quejoso demostró tener la calidad de Magistrado inamovible con que se ostenta y, por ende, si la designación de otro Magistrado en su sustitución afecta sus derechos, agregando que al quejoso no le asiste ningún derecho subjetivo reconocido por la Ley que haya sido infringido por las autoridades responsables, por lo que al no existir afectación a su interés jurídico debió sobreseerse en el juicio acorde a lo previsto por los artículos 73, fracción V y 74, de la Ley de Amparo.

B). Que se debió sobreseer en el juicio por actualizarse la causal de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción VIII, de la Ley de Amparo, ya que el Congreso del Estado, de conformidad con lo preceptuado por los artículos 44, fracción XXI y 73 de la Constitución del Estado de Michoacán, tiene la facultad discrecional y soberana de aprobar las propuestas de magistrados del Tribunal Superior de Justicia de esa entidad federativa.

C). Que de conformidad a lo señalado por el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, debió sobreseerse en el juicio respecto al acto reclamado del Pleno del citado Tribunal, ya que no se acreditó la existencia de dicho acto en la forma en que fue planteada

AMPARO EN REVISION 2639.

por el quejoso.

D). Que igualmente debió sobreseerse respecto a ese acto, de conformidad a lo señalado por los artículos 73, fracción XVIII y 116, fracción V, de la Ley de Amparo, toda vez que el quejoso no formuló conceptos de violación sobre el particular.

Son parcialmente fundados tales argumentos, en atención a las siguientes consideraciones:

En cuanto a lo que se alega en el apartado A), debe señalarse que es infundado, toda vez que sí se actualiza en la especie afectación a los intereses jurídicos del quejoso, ya que éste sostiene en su demanda de garantías que en fecha dos de enero de mil novecientos ochenta y seis fue designado Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Michoacán, cargo que vino desempeñando hasta el veintidós de febrero de mil novecientos noventa y seis, en que fue sustituido al nombrarse en su lugar al Licenciado Felipe Rojas López, siendo su última adscripción en la Quinta Sala Civil de ese órgano judicial colegiado, extremos que se acreditan con las documentales que obran a fojas 24, 85, 117 y 198 del expediente de amparo, a saber: copia fotostática certificada del nombramiento de Magistrado de que fue objeto el quejoso, acta de la sesión del Congreso de la citada entidad federativa en que se aprobó dicha designación, acta de la sesión celebrada por ese ente legislativo el veintidós de febrero de mil novecientos noventa y seis en que aprobó la designación como Magistrado del Licenciado Felipe Rojas



AMPARO EN REVISION 2539/96

López y, copia fotostática certificada del acta de la sesión por la cual, en la fecha citada en último término, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia mencionado adscribe al precitado Licenciado Felipe Rojas López como Magistrado de la Quinta Sala Civil de ese Tribunal, documentos públicos de eficacia probatoria plena atento a lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo.

Como se ve, el quejoso acredita que tenía el cargo de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Michoacán, así como que fue privado del mismo, no obstante que, según sus planteamientos, ya tenía el carácter de inamovible; privación que es precisamente lo que reclama de manera principal en el juicio de garantías. De lo anterior se sigue que le asiste interés jurídico para el ejercicio de la acción constitucional, sin que para ello resulte necesario que acredite, como lo pretenden las autoridades responsables, la calidad de Magistrado inamovible, pues esto es una cuestión de fondo a dilucidar en el juicio de amparo. En efecto el que el quejoso haya adquirido esa calidad de Magistrado inamovible y los derechos inherentes, es una cuestión ajena a la procedencia del juicio, sino del fondo del problema que se debate, respecto del cual, de no prosperar las argumentaciones del quejoso, se tendría que llegar a negar el amparo solicitado y no a sobreseer en el juicio.

Igualmente infundado resulta lo que se alega en el inciso B) precedente, ya que según se obtiene de la lectura del artículo 73,

AMPARO EN REVISION 2639

fracción VIII, de la Ley de Amparo, la causal de improcedencia del juicio de garantías invocada por las autoridades recurrentes se encuentra prevista contra las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de las Cámaras que lo constituyen, de las Legislaturas de los estados o de sus respectivas comisiones o diputaciones permanentes, en elección, suspensión o remoción de funcionarios, en los casos en que las constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana y discrecionalmente, supuestos que no se actualizan en la especie en que se cuestiona la no reelección de un Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán y el desconocimiento de su calidad de inamovable, acto respecto del cual la Constitución Local de esa entidad federativa no atribuye facultades soberanas o discrecionales a la Legislatura correspondiente, pues según se observa del contenido de los artículos 60, fracción IV y 44, fracción XXI, de la Constitución del Estado de Michoacán, el procedimiento para la designación de los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia de dicha entidad federativa y, como consecuencia de ello, la remoción o sustitución de los funcionarios que venían ocupando el cargo, consta de dos etapas interdependientes entre sí, la primera consistente en la propuesta que haga el Ejecutivo del Estado y, la segunda, relativa a la aprobación que la Legislatura del mismo realice de dicha propuesta, de donde se sigue que la designación de tales magistrados y la remoción de quienes en su caso aquéllos van a sustituir no es una facultad que el

AMPARO EN REVISION 2639/96



Congreso Local pueda ejercer de manera soberana o discrecional, limitándose sus facultades a analizar la propuesta que sobre el particular haga el Ejecutivo y, en su caso, proceder a su aprobación. Los citados dispositivos de la Constitución del Estado de Michoacán señalan:

Artículo 60, fracción IV:

"Las facultades y obligaciones del Gobernador son: ...

"IV . Someter al Congreso del Estado las propuestas
"para la designación de magistrados del Supremo
"Tribunal de Justicia o a la Diputación Permanente
"según el caso."

"Artículo 44, fracción XXI:

"De las facultades del Congreso: ...

"XXI . Aprobar o desaprobar las propuestas, solicitudes
"de licencia y renunciaciones de los magistrados del Supremo
"Tribunal de Justicia."

CO
LI
DE

En cambio, es fundado lo que se alega en el inciso C) precitado. El quejoso en su demanda reclamó al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán: **"el acuerdo tomado en la sesión de la misma fecha a que me he venido refiriendo, para adscribir en sustitución mía, como nuevo Magistrado de la Quinta Sala Civil de ese Cuerpo Colegiado, al Abogado Felipe Rojas, reclamando además todas las consecuencias jurídicas que de**

AMPARO EN REVISION 2639

ello se ~~hubiere~~^{der}derivado." (páginas 3 y 4 de la demanda de amparo); acto cuya existencia negó aquella autoridad en su informe justificado, negativa que, en contra de lo estimado por el Juez de Distrito, no se encuentra desvirtuada en autos, ya que, como bien lo afirma la autoridad recurrente, es inexacto que en la sesión del Pleno de fecha veintidós de febrero de mil novecientos noventa y seis ese Cuerpo Colegiado haya acordado adscribir en sustitución de Fernando Arreola Vega, como Magistrado de la Quinta Sala Civil, al Abogado Felipe Rojas López; por el contrario, del acta correspondiente, que obra en fojas 201 a 208 del expediente de amparo, se advierte que lo único que se hizo fue adscribir al Abogado Felipe Rojas López a la Quinta Sala Civil, como nuevo Magistrado de esa Sala con fundamento en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Michoacán la que, en su artículo 9o., otorga al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia la atribución de **"determinar, en la primera sesión de cada periodo, constitucional, las adscripciones permanentes de los magistrados propietarios, teniendo en cuenta su especialización o experiencia profesional", al igual que "cambiar de adscripción a los magistrados propietarios"**.

Por lo demás, cabe apuntar que la destitución del quejoso en el cargo que venía desempeñando no es un acto imputable al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia mencionado, sino al Gobernador y Legislatura del Estado de Michoacán, a cuya respectiva propuesta y aprobación se debe dicha sustitución, siendo a consecuencia de esos



AMPARO EN REVISION 2639/96

actos que el quejoso cesó en sus funciones de Magistrado.

En tal orden de ideas, procede, de conformidad con lo previsto por el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías respecto al acto reclamado del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán.

Como corolario de lo anterior, es innecesario el análisis de lo expuesto en el inciso D), ya que ahí se pretende se sobresea, aunque por motivo distinto al anteriormente analizado, en el juicio de garantías respecto al acto atribuido al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, sobreseimiento que ya se dijo operó ante la inexistencia de ese acto.

SEXTO. También de estudio preferente resulta lo alegado por la parte quejosa en el último punto de sus agravios, dado que ahí combate el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito en el considerando cuarto de su fallo, respecto al acto reclamado del Gobernador del Estado de Michoacán, consistente en la propuesta hecha al Congreso de esa entidad federativa para la designación de diez nuevos magistrados del Supremo Tribunal de Justicia de dicho Estado, agravio que se estima fundado ya que, como se afirma en el mismo, en el juicio de garantías no se reclama ese acto de manera aislada, sino como parte inicial del procedimiento que conforme a lo dispuesto por los artículos 60, fracción IV y 44, fracción XXI, de la Constitución de la entidad federativa mencionada, se sigue para la designación de magistrados de aquel Tribunal, cuestionándose como

AMPARO EN REVISION 2639

un todo ese procedimiento que en la especie concluyó con la designación de nuevos magistrados que vinieron a suplir a los que funcionaban como tales, entre los que se encuentra el quejoso, situación que, ya se dijo, afecta los intereses jurídicos de este último. Las razones anteriores conducen a revocar el sobreseimiento que se cuestiona en el argumento propuesto. Resulta aplicable por analogía la tesis 203 del tomo I del Apéndice 1917-1995 al Semanario Judicial de la Federación, visible a fojas 197, que dice:

"LEYES, AMPARO CONTRA —LA EXPEDICION
"PROMULGACION Y PUBLICACION DE LAS. En el amparo
"contra la promulgación, publicación y refrendo de la
"norma legal impugnada, no procede el
"sobreseimiento, porque si bien es cierto que en el
"procedimiento de formación de la ley intervienen
"diversos órganos constitucionales, como lo son el
"Legislativo que las expide y el Ejecutivo que las
"promulga y ordena su publicación, dichos actos no
"pueden considerarse consumados irreparablemente
"para los efectos del amparo, toda vez que en su
"conjunto son los que otorgan vigencia a la ley
"reclamada y, por tanto, hacen que el ordenamiento
"respectivo pueda ser aplicado a los casos concretos
"comprendidos en las hipótesis normativas, y son todos



AMPARO EN REVISION 2639/96

"ellos los que pueden ser reparados a través del juicio
"de garantías. La expedición, promulgación y
"publicación de una ley no pueden quedar subsistentes
"o insubsistentes, aisladamente, puesto que tales actos
"concurren para que tenga vigencia la ley y pueda ser
"aplicada, y en cambio necesariamente dejan de
"producir efectos conjuntamente al pronunciarse una
"ejecutoria que declara inconstitucional a la ley, en el
"caso concreto a que se refiere el fallo.
"Consecuentemente, a pesar de que se produzcan por
"órganos diferentes, no pueden considerarse
"consumados irremediablemente ni improcedente su
"declaración en el juicio de amparo que se interpone
"contra una ley."

El criterio que informa la tesis antes reproducida resulta aplicable por analogía, en virtud de que comparte con el caso que se analiza el referirse a actos legislativos integrados dentro del procedimiento que da origen a una ley, en el caso de la tesis, y a una aprobación del Congreso en el presente asunto, por lo que la solución que presenta resulta aplicable a éste, toda vez que no es posible considerar que los actos que quedaron comprendidos dentro del procedimiento legislativo han quedado insubsistentes, por las razones expresadas con anterioridad.

AMPARO EN REVISION 2639/

SEPTIMO. Los agravios expresados por el quejoso en la parte relativa al fondo de la cuestión planteada son fundados.

Para facilitar la comprensión del caso, conviene realizar una síntesis de los antecedentes que lo informan; y cuya existencia se deriva de las constancias de autos:

1. A propuesta del entonces titular del Ejecutivo del Estado de Michoacán, la Sexagésima Tercera Legislatura del H. Congreso de la entidad, en sesión celebrada el dos de enero de mil novecientos ochenta y seis, designó al ahora quejoso, Fernando Arreola Vega, Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, luego de que hasta entonces y desde el veinticuatro de septiembre de mil novecientos setenta y nueve, se desempeñó como Juez de Primera Instancia en diversos Distritos Judiciales del propio Estado.

2. El Pleno de aquel Máximo Tribunal lo adscribió como Magistrado de la Primera Sala Colegiada en Materia Civil, adscripción que tuvo hasta que, por desaparición de las Salas Colegiadas, también el H. Pleno lo adscribió como Magistrado de la Quinta Sala Civil Unitaria, donde ejerció ininterrumpidamente su función hasta el veintidós de febrero del año de mil novecientos noventa y seis, cuando fue sustituido por el Licenciado Felipe Rojas López, adscrito a esa Sala, después de haber sido designado Magistrado por el Gobernador del Estado y ratificado su nombramiento por el Congreso del Estado.



AMPARO EN REVISION 2639/96

3. La sustitución de que se trata tuvo su causa eficiente, primero, en la propuesta de diez nuevos magistrados que el Gobernador Constitucional del Estado hizo a la Sexagésima Séptima Legislatura al Congreso de Michoacán, para que esta última determinara si procedía aprobarla a fin de que sustituyeran a otros tantos que hasta el pluraludido veintidós de febrero del año de mil novecientos noventa y seis se desempeñaban con esa calidad, entre los cuales se incluía el quejoso y, en segundo lugar, en la aprobación favorable de tal propuesta hecha por aquella Legislatura, en sesión de la propia fecha mencionada, cuestionándose en el juicio de garantías ese procedimiento, esencialmente, con base en el siguiente planteamiento del quejoso y recurrente: dice que adquirió la calidad de Magistrado inamovible, ya que a propuesta del Ejecutivo del Estado de Michoacán, el dos de enero de mil novecientos ochenta y seis fue designado por la LXIII Legislatura de esa entidad como Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del propio Estado, cargo que desempeñó ininterrumpidamente por el lapso de diez años, un mes y veinte días, durante el cual estuvieron en funciones, respectivamente por un período constitucional de tres años, la LXIV, LXV y LXVI Legislaturas y un tiempo la LXVII, por lo que una adecuada interpretación de los artículos 116, fracción III, de la Constitución Federal y 72, párrafo primero de la Constitución Local, permite concluir que fue reelecto tácitamente en su cargo, adquiriendo la calidad de Magistrado inamovible, sujeto de separación sólo en los

AMPARO EN REVISION 2639/

supuestos que el último precepto constitucional menciona y no mediante el procedimiento que concluyó el veintidós de febrero de mil novecientos noventa y seis, en que a propuesta del Ejecutivo Local, la LXVII Legislatura del citado Estado aprobó la designación de diez nuevos magistrados, uno de ellos en su sustitución, sin emitir una resolución debidamente fundada y motivada y sin que se le diera oportunidad de defensa.

El Juez de Distrito negó el amparo considerando medularmente:

Que el quejoso no tiene la calidad de Magistrado inamovible, toda vez que acorde con lo dispuesto por el artículo 72 de la Constitución del Estado de Michoacán, vigente en la época en que fue nombrado, era necesario que fuese reelecto o designado por tres períodos consecutivos o bien, uno más al primer período de su designación, conforme al texto actual de aquel dispositivo constitucional, agregando que dicha reelección no opera de manera tácita, siendo necesario para ello que se siga el procedimiento formal señalado por la propia Constitución para la designación de magistrados, sin que a ello se oponga el término que el quejoso duró en el desempeño del cargo, ya que tal situación se encuentra prevista por el artículo 80 de aquella Constitución, en cuanto señala que los magistrados continuarán en sus funciones aunque haya fenecido su período constitucional o el plazo para el que fueron nombrados, mientras no se presenten los nuevamente designados, agregando que



AMPARO EN REVISION 2639/96

la aprobación de la propuesta para la designación de nuevos magistrados sí se encuentra fundada y motivada, ya que fue realizada por la mayoría del Pleno de la Legislatura.

De lo acabado de relatar se advierte que la solución del asunto por este Alto Tribunal implica una situación de hecho sobre la que no existe controversia y las posturas controvertidas que se dan entre la posición del quejoso y la asumida por las autoridades responsables, aceptada por el Juez de Distrito en la sentencia que se recurre. La situación de hecho consiste, en esencia, en que el quejoso fue designado como Magistrado del Tribunal Superior del Estado de Michoacán por un periodo de tres años y que posteriormente, al concluir su periodo de tres años, continuó en el desempeño de su cargo por dos periodos más completos y algo más de un año de un periodo posterior, hasta el momento en que fue sustituido por el licenciado Felipe Rojas López. En cuanto a las posturas controvertidas debe decirse que el quejoso considera, medularmente, que se violó el artículo 116 de la Constitución Federal al designarse a un nuevo Magistrado para sustituirlo, en virtud de que él tenía calidad de Magistrado inamovible, al haber sido ratificado tácitamente por el tiempo necesario para adquirir ese atributo, al desempeñarse como Magistrado durante el mismo, sin que se hubiera declarado no ratificarlo y sin que se hubiera nombrado Magistrado para sustituirlo. La otra posición, defendida por las autoridades responsables y que acogió el Juez de Distrito, consistió en sostener que el quejoso no

AMPARO EN REVISION 2639/

tenía calidad de inamovible, pues nunca fue ratificado, y si bien desempeñó el cargo de Magistrado por más de diez años, sólo lo hizo porque al vencerse el término de su designación y no presentarse un nuevo Magistrado para sustituirlo tenía la obligación de seguir desempeñando su función.

Apuntado lo anterior, a continuación resulta oportuno realizar la transcripción de diversos preceptos de la Constitución Federal y de la Constitución del Estado de Michoacán que guardan estrecha relación con el problema sujeto a esta decisión jurisdiccional.

El segundo párrafo del artículo 14 del Código Supremo establece:

"Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de
"sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante
"juicio seguido ante los tribunales previamente
"establecidos, en el que se cumplan las formalidades
"esenciales del procedimiento y conforme a las leyes
"expedidas con anterioridad al hecho."

El primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Federal señala:

"Nadie puede ser molestado en su persona, familia,
"domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de
"mandamiento escrito de la autoridad competente,
"que funde y motive la causa legal del procedimiento."



1027

AMPARO EN REVISION 2639/96

El artículo 116, fracción III del referido Pacto Federal señala:

"El Poder Judicial de los Estados se ejercerá por los
"tribunales que establezcan las Constituciones
"respectivas."

"La independencia de los magistrados y jueces en el
"ejercicio de sus funciones deberá estar garantizada por
"las Constituciones y las Leyes Orgánicas de los Estados,
"las cuales establecerán las condiciones para el ingreso,
"formación y permanencia de quienes sirvan a los
"Poderes Judiciales de los Estados."

"Los Magistrados integrantes de los Poderes Judiciales
"Locales, deberán reunir los requisitos señalados por las
"fracciones I a V del artículo 95 de esta Constitución. No
"podrán ser Magistrados las personas que hayan
"ocupado el cargo de Secretario o su equivalente,
"Procurador de Justicia o Diputado Local, en sus
"respectivos Estados, durante el año previo al día de la
"designación."



"Los nombramientos de los magistrados y jueces
"integrantes de los Poderes Judiciales Locales serán
"hechos preferentemente entre aquellas personas que
"hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad
"en la administración de justicia o que lo merezcan por

AMPARO EN REVISION 2639

"su honorabilidad, competencia y antecedentes en
"otras ramas de la profesión jurídica."

"Los magistrados durarán en el ejercicio de su encargo

"el tiempo que señalen las Constituciones locales,

"podrán ser reelectos, y si lo fueren, sólo podrán ser

"privados de sus puestos en los términos que

"determinen las Constituciones y las Leyes de

"Responsabilidad de los Servidores Públicos de los

"Estados."

"Los magistrados y los jueces percibirán una

"remuneración adecuada e irrenunciable, la cual no

"podrá ser disminuida durante su encargo; ..."

El artículo 97, primer párrafo y 100 de la Constitución
Federal, previenen:

"Artículo 97. Los Magistrados de Circuito y los Jueces de

"Distrito serán nombrados y adscritos por el Consejo de

"la Judicatura Federal, con base en criterios objetivos y

"de acuerdo a los requisitos y procedimientos que

"establezca la ley. Durarán seis años en el ejercicio de

"su encargo, al término de los cuales, si fueran

"ratificados o promovidos a cargos superiores, sólo

"podrán ser privados de sus puestos en los casos y,

"conforme a los procedimientos que establezca la



AMPARO EN REVISION 2639/96

"ley..."

"Artículo 100. La administración, vigilancia y disciplina
"del Poder Judicial de la Federación, con excepción de
"la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estarán a
"cargo del Consejo de la Judicatura Federal en los
"términos que, conforme a las bases ~~que~~ señala esta
"Constitución, establezcan las leyes.

"El Consejo se integrará por siete miembros de los
"cuales, uno será el Presidente de la Suprema Corte de
"Justicia, quien también lo será del Consejo; un
"Magistrado de los Tribunales Colegiados de Circuito, un
"Magistrado de los Tribunales Unitarios de Circuito y un
"Juez de Distrito, quienes serán electos mediante
"insaculación; dos Consejeros designados por el Senado
"y uno por el Presidente de la República. Los tres últimos,
"deberán ser personas que se hayan distinguido por su
"capacidad, honestidad y honorabilidad en el ejercicio
"de las actividades jurídicas. Los Consejeros deberán
"reunir los requisitos señalados en el artículo 95 de esta
"Constitución.

"El Consejo funcionará en Pleno o en comisiones. El
"Pleno resolverá sobre la designación, adscripción y
"remoción de magistrados y jueces, así como de los

AMPAPO FN REVISION 252

"demás asuntos que la ley determine.

"Salvo el Presidente del Consejo, los demás Consejeros
"durarán cinco años en su cargo, serán substituidos de
"manera escalonada, y no podrán ser nombrados para
"un nuevo periodo.

"Los Consejeros ejercerán su función con
"independencia e imparcialidad. Durante su encargo,
"sólo podrán ser removidos en los términos del Título
"Cuarto de esta Constitución.

"La Ley establecerá las bases para la formación y
"actualización de funcionarios, así como para el
"desarrollo de la carrera judicial, la cual se regirá por los
"principios de excelencia, objetividad, imparcialidad,
"profesionalismo e independencia.

"El Consejo estará facultado para expedir acuerdos
"generales para el adecuado ejercicio de sus funciones,
"de conformidad con lo que establezca la ley.

"Las decisiones del Consejo serán definitivas e
"inatacables, salvo las que se refieran a la designación,
"adscripción y remoción de magistrados y jueces, las
"cuales podrán ser revisadas por la Suprema Corte de
"Justicia, únicamente para verificar que hayan sido
"adoptadas conforme a las reglas que establezca la ley.

AMPARO EN REVISION 2639/96



"orgánica respectiva.

"La Suprema Corte de Justicia elaborará su propio
"presupuesto y el Consejo lo hará para el resto del
"Poder Judicial de la Federación. Con ambos se
"integrará el presupuesto del Poder Judicial de la
"Federación que será remitido por el Presidente de la
"Suprema Corte para su inclusión en el proyecto de
"Presupuesto de Egresos de la Federación. La
"administración de la Suprema Corte de Justicia
"corresponderá a su Presidente."

El artículo 60, fracción IV, de la Constitución del Estado de
Michoacán dispone:

"Las facultades y obligaciones del Gobernador son: ...

"IV. Someter al Congreso del Estado las propuestas
"para la designación de magistrados del Supremo
"Tribunal de Justicia o a la Diputación Permanente
"según el caso."



El artículo 44, fracción XXI, de la citada Constitución Local
dispone:

"De las facultades del Congreso: ...

"XXI . Aprobar o desaprobado las propuestas, solicitudes
"de licencia y renunciaciones de los magistrados del Supremo
"Tribunal de Justicia."

AMPARO EN REVISION 2639

A su vez, los párrafos primero a tercero del artículo 67 de la Constitución Local mencionada señalan:

"Se deposita el ejercicio del Poder Judicial del Estado
"en el Supremo Tribunal de Justicia, en los jueces de
"primera instancia, en los municipales y de tenencia y
"en los jurados."

"La independencia de los magistrados y jueces en el
"ejercicio de sus funciones deberá estar garantizada
"por esta Constitución y la Ley Orgánica respectiva, las
"cuales establecerán las condiciones para el ingreso,
"formación y permanencia de quienes sirvan al Poder
"Judicial del Estado."

"Los nombramientos de los magistrados y jueces
"integrantes del Poder Judicial serán hechos
"preferentemente entre aquellas personas que hayo
"prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la
"administración de justicia o que lo merezcan por su
"honorabilidad, competencia y antecedentes en otras
"ramas de la profesión jurídica."

El artículo 72 de la Constitución Local en cita dispone:

"Los magistrados durarán tres años en el ejercicio de su
"encargo, podrán ser reelectos y si lo fueren, sólo
"podrán ser privados de sus puestos en los términos del

1030



AMPARO EN REVISION 2039/96

"Título Cuarto de esta Constitución y la Ley de
"Responsabilidades de los Servidores Públicos del
"Estado."

El texto de este precepto en su redacción vigente en la fecha
que fue designado Magistrado el ahora quejoso determina:

"Artículo 72. Los magistrados del Supremo Tribunal de
"Justicia durarán en sus cargos tres años, pudiendo ser
"reelectos; los designados para tres periodos
"consecutivos, serán inamovibles."

"Cuando el Magistrado inamovible cumpla setenta
"años, o padezca incapacidad física o mental
"permanente para desempeñar su cargo, el Supremo
"Tribunal dictaminará el retiro forzoso. El dictamen se
"cometerá a la consideración del Gobernador del
"Estado, quien lo enviará, en su caso, para su
"aprobación, al Congreso o a la Diputación
"Permanente. Podrá retirarse voluntariamente si tiene
"más de quince años de servicio efectivos como
"Magistrado, siempre que haya cumplido 60 años de
"edad. En este caso se seguirá la misma tramitación."

"El Magistrado inamovible que obtenga su retiro forzoso,
"disfrutará de una pensión equivalente a la
"remuneración que perciba, si tiene más de diez años

AMPARO EN REVISION 2639.

"de servicios efectivos como Magistrado. El que
"obtenga su retiro voluntario, disfrutará de la misma
"pensión.

"Los magistrados sólo podrán ser privados de sus puestos
"en los términos del título IV de esta Constitución."

El artículo 80 de esa Constitución dispone:

"Los magistrados continuarán en sus funciones aunque
"haya fenecido su período constitucional o el plazo
"para el que fueron nombrados, mientras no se
"presenten los nuevamente nombrados."

De lo dispuesto por el artículo 116, fracción III, de la
Constitución Federal, se advierte que el Constituyente Federal dejó al
Constituyente Local la tarea de determinar los órganos encargados de
la impartición de justicia en las correspondientes entidades
federativas, así como regular su integración y funcionamiento,
empero, estableciendo ciertos imperativos que deben respetarse en
las Constituciones Locales, tales como :

A). Garantizar la independencia de los magistrados y jueces
en el ejercicio de sus funciones, estableciendo las condiciones para el
ingreso, formación y permanencia de quienes sirvan a los poderes
judiciales de los estados;

B). Establecer que los nombramientos de los magistrados y
jueces integrantes de los poderes judiciales locales sean hechos



AMPARO EN REVISION 2639/96

preferentemente entre aquellas personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administración de justicia o que lo merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica y;

C). Señalar el tiempo que los magistrados durarán en el ejercicio de su encargo, así como establecer ~~que~~ pueden ser reelectos, y si lo fueren, sólo podrán ser privados de sus puestos en los términos que determinen las constituciones y las leyes de responsabilidad de los servidores públicos de los estados.

La litis planteada consiste en determinar si la interpretación de la fracción III del artículo 116 de la Ley Fundamental permite interpretar, a su vez, las disposiciones relativas de la Constitución del Estado de Michoacán en el sentido pretendido por el ahora quejoso, o sea, si al haber concluido su periodo de tres años para el que fue designado y más de seis años, correspondiente a dos periodos sucesivos, ~~adquirió~~ el carácter de inamovible, resultando contrario a la Constitución Federal que se le hubiera removido el designarse nuevos magistrados, de los cuales uno fue adscrito en el lugar que ocupaba. Para lograr el objetivo trazado es menester recurrir a los mecanismos de interpretación que brinden a este Alto Tribunal las bases para desentrañar el sentido del mandato constitucional contenido en la fracción III del artículo 116 de la Ley Fundamental.

En primer lugar este Tribunal Constitucional estima que el mecanismo de interpretación genético-teleológico permite establecer

AMPARO EN REVISION 2639

las razones que tuvieron el Constituyente originario y el Poder Revisor de la Constitución al aprobar las normas cuya interpretación se realiza, así como la finalidad de su inclusión en la norma fundamental. Siguiendo este método de interpretación debe precisarse que la actual fracción III del artículo 116 de la Ley Fundamental proviene de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación de diecisiete de marzo de mil novecientos ochenta y siete. La Exposición de Motivos de la iniciativa presidencial, los dictámenes de las comisiones que intervinieron y las participaciones de los legisladores aportan las siguientes ideas sobre el tema materia de la presente revisión:

En la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, celebrada el treinta de octubre de mil novecientos ochenta y seis, se dio lectura a la iniciativa del Ejecutivo de la Unión, con el objeto de reformar los artículos 17, 46 y 116, y derogar las fracciones VIII, IX y X del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De ella deben destacarse los siguientes puntos:

Iniciativa.

"El perfeccionamiento de la impartición de justicia en
"México ha sido una preocupación constante de la
"presente administración, para satisfacer la necesidad
"permanente del pueblo de disfrutar de legalidad,
"equidad, orden y seguridad, que permitan el pleno



AMPARO EN REVISIÓN 2639/96

"desarrollo del individuo en su convivencia social. "La
"sociedad mexicana en su conjunto nos ha
"acompañado en el propósito de alcanzar una nueva
"concepción social del Estado y del Derecho, y de
"establecer los instrumentos institucionales para la
"consulta popular en las tareas del desarrollo y la
"renovación de nuestro modelo de vida nacional.

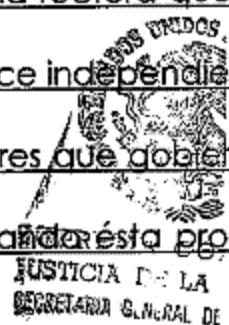
"El derecho se concibe, entre nosotros, como un
"instrumento de transformación social, por lo que la
"reforma jurídica, tan profunda como sea necesario,
"figura entre las grandes prioridades del presente.

"El respeto a los derechos del hombre y el principio de
"la división de poderes son piezas estructurales en la
"concepción del Estado mexicano, pues lo primero
"constituye el propósito de las instituciones sociales y el
"límite extrínseco de la actividad del Estado, garantía
"de la libertad de los hombres, y el segundo contiene la
"base orgánica de la estructuración del Poder estatal y
"es el límite intrínseco de su propia actividad, pues el
"ejercicio de la potestad pública debe estar
"íntegramente supeditado al orden jurídico y su división
"forma parte del sistema general de protección a la
"libertad.

AMPARO EN REVISION 2638

"Los tribunales de justicia deben ser independientes,
"para fortalecer en la realidad social, el principio de
"división de poderes y porque la independencia judicial
"constituye la primer garantía de la jurisdicción,
"establecida no precisamente en interés del órgano
"jurisdiccional, cuanto de los justiciables, pues sólo cabe
"esperar justicia completa y estricta del Juez
"jerárquicamente libre, dependiente sólo de la Ley.

"La independencia judicial requiere que los jueces al
"actuar no han de tener otra norma rectora que la ley.
"La sumisión del Juez a la Ley, le hace independiente de
"la voluntad subjetiva de los hombres que gobiernan, e
"incluso de su propia voluntad, cuando ésta propende
"a la arbitrariedad.



"A la independencia objetiva se une el conocimiento
"de lo que se hace y la fe en lo que se hace, pues
"siempre hemos considerado que una verdadera y
"auténtica independencia judicial, se nutre en una real
"toma de conciencia del papel que el Juez desempeña
"en la aplicación del Derecho. Estas calidades son el
"espíritu de la autoridad moral del Juez, pues la
"autoridad formal le es conferida por la ley.

"El Juez es símbolo de la justicia y guardián del Derecho.



1033

AMPARO EN REVISION 2639/96

"Por ello los órganos judiciales deben integrarse con
"procedimientos de selección que permitan unir al
"conocimiento del Derecho, la vocación, la experiencia
"y la honorabilidad de quienes los integran. Un buen
"Juez no se improvisa, requiere del transcurso de años
"de estudio y práctica en los tribunales, para lograr las
"aptitudes que permitan la justa aplicación de la Ley.
"Selección, formación, eficiencia y preparación
"adecuadas son, entre otros, los elementos
"indispensables para el correcto desempeño de la
"función jurisdiccional independiente.
"En cuanto a la estabilidad en el cargo, ésta
"proporciona a los servidores de la administración de
"justicia la seguridad de que, mientras su conducta sea
"apegada a Derecho y obre con justicia, gozará de
"permanencia en su puesto. Sin jueces estables en el
"desempeño de su cargo, la independencia en el
"ejercicio de la función, se ve considerablemente
"disminuida.
"Finalmente, al Juez debe garantizarse una posición
"social digna, proporcionándole bienestar económico
"que permita su total entrega a su ministerio, sin
"preocupaciones de otra índole. Los órganos de los

TE DE
TOM
ADEU

AMPARO EN REVISION 2639/

"poderes judiciales deben contar con el apoyo
"financiero que guarde adecuada relación con la
"importancia del servicio público que prestan, pues de
"otra suerte se les inhabilita para contribuir al
"mejoramiento de la administración de justicia."

"Para ello es necesario, además, establecer las bases
"constitucionales en relación a los poderes judiciales
"locales y proponer reformas a los preceptos
"constitucionales que regulan el Poder Judicial de la
"Federación.

"La inclusión en nuestro texto constitucional de las bases
"para la organización y funcionamiento de los poderes
"judiciales de los estados es una aspiración, que esta
"iniciativa hace suya y revitaliza, expresada desde el
"voto particular de la minoría de la Comisión

SUPREMA COI
SECRETARIA GENERAL DE

"Constituyente de 1842, recogida por don Venustiano
"Carranza en las ideas contenidas en su Declaración de
"Veracruz de 1914, y reiteradas en su discurso inaugural
"del Congreso Constituyente de 1º. de diciembre de
"1916, para consolidar un Poder Judicial respetable,
"digno, vigoroso e independiente, tanto en el ámbito
"federal como en el local.

"Dado que nuestra Constitución cumple el cometido



AMPARO EN REVISION 2933/96

"de ser el estatuto nacional de los estados que integran
"la Federación, es necesario que nuestra norma
"fundamental señale las bases conforme a las cuales los
"poderes judiciales de los estados, deban cumplir con la
"relevante tarea de impartir justicia, en condiciones de
"calidad similar en todo el territorio nacional"


"Las bases que se plantean en esta iniciativa armonizan
"la necesidad de que los tribunales de justicia cumplan
"plenamente con los principios que se contienen en el
"artículo 17 constitucional que se propone, con el
"respeto al principio fundamental de la autonomía
"constitucional de los estados. Para ello, las bases
"contienen la afirmación y los medios para lograr la
"independencia del Poder Judicial, calidad de la cual
"deben surgir los restantes atributos de la impartición de
"justicia; y dejar a las constituciones y leyes locales, la
"regulación del Poder Judicial local, para que ellas
"establezcan las especiales características y
"modalidades que más se adecuen a las
"particularidades geográficas, etnográficas,
"demográficas y económicas de cada entidad
"federativa.

En la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, celebrada

AMPARO EN REVISION 2639

el dieciséis de diciembre de mil novecientos ochenta y seis, se dio lectura al primer dictamen del que también deben ponerse de relieve los párrafos que a continuación se reproducen.

"Al proceder a reestructurar y dar uniformidad a los
"sistemas de gobierno locales y municipales resulta
"conveniente fortalecer al Poder Judicial de cada
"entidad, para robustecer su desempeño y la mejor
"administración de justicia a que alude el artículo 17 de
"nuestra Carta suprema. En efecto, si es un
"requerimiento generalizado conferir independencia a
"la función jurisdiccional, es necesario dotar a los jueces,
"específicamente a los magistrados de los tribunales
"superiores de justicia de inamovilidad, como ya tienen
"los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la
"Nación.



SECRETARÍA GENERAL DE
LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

"La fracción III del artículo 116 constitucional contiene la
"referencia al Poder Judicial de cada estado, es la
"novedad en esta iniciativa y principia por señalar que
"dicho Poder Judicial se ejercerá por los tribunales que
"establezcan las constitucionales locales.

"De manera adecuada el segundo párrafo de la
"fracción III, congruente con la Exposición de Motivos,
"establece que la independencia de los magistrados y

**AMPARO EN REVISION 2639/96**

"jueces, en el ejercicio de sus funciones, se garantizará
"en las constituciones y las leyes orgánicas de cada
"entidad y establece el contenido mínimo, en relación
"con el tema para esa constitución y leyes orgánicas, al
"indicar que precisamente en ellas se establecerán las
"condiciones para el ingreso, formación y permanencia
"de quienes sirvan a los poderes judiciales de los
"estados. ...

"El párrafo cuatro de esta fracción III establece el
"principio de una auténtica carrera judicial en los
"estados de la República al señalar que los
"nombramientos de magistrados y jueces se harán,
"preferentemente, entre quienes hayan prestado sus
"servicios con eficiencia y probidad en la
"administración de justicia y no cierra la puerta para
"que puedan designarse también en esos cargos los
"que lo merezcan por su honorabilidad y competencia
"profesional ...

"El párrafo sexto de la fracción que se analiza cumple
"una de las necesidades insoslayadas a fin de lograr
"una verdadera independencia del Poder Judicial; la
"de permanencia en el cargo. Para mantener
"autonomía de criterio, sin detrimento de la seguri-

AMPARO EN REVISION 2639

"social personal familiar, se establece que los
"magistrados durarán en su encargo el tiempo que
"señalen las constituciones locales y podrán ser
"reelectos en su cargo y si lo fueren, sólo podrán ser
"privados de sus puestos en los términos que determinen
"las constituciones y las leyes de responsabilidades de
"los servidores públicos del estado. Esto es, quien sea
"ratificado en su cargo de Magistrado por su eficiente
"desempeño y por su probidad, después de esa
"ratificación, no podrá ser relevado sino por causa
"justificada. Es indudable que las leyes de cada entidad
"Federativa podrán hacer extensiva esa inamovilidad,
"señalando los requisitos de la misma, a otros servidores
"públicos encargados de impartir justicia, pero en la
"Constitución se establece ya el principio de
"inamovilidad de los magistrados.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SUPREMA CORTE
JUSTICIA DE LA NACION
SECRETARÍA DE JUSTICIA Y FALLO

"Insistimos en que el contenido de esta fracción III del
"artículo 116 posibilitará el logro de la real
"independencia de los poderes Judiciales al señalar los
"requisitos mínimos de ingreso, formación y
"permanencia de sus integrantes y al establecer las
"garantías de adecuada remuneración y la
"inamovilidad en el cargo."



AMPARO EN REVISION 2639/96

Dentro del debate parlamentario que siguió a la lectura del Dictamen antes referido, destaca la siguiente participación:

"El C. Senador Sobarzo Loaiza:

"Es evidente que a partir de la Consulta Nacional sobre
"Administración de Justicia, emprendida en 1983, se han
"logrado cambios substanciales en la materia. Gracias
"al proceso de consulta popular se pudieron analizar a
"fondo las condiciones que afronta nuestro sistema
"jurídico y las circunstancias en que se desenvuelvan los
"órganos encargados de la seguridad pública y la
"administración de justicia. De ahí surgieron las
"directrices que han impulsado una reforma jurídica e
"institucional que poco a poco irá haciendo sentir
"mayor impacto en la vida cotidiana de la ciudadanía.
"Respecto de los lineamientos básicos que deben regir
"el funcionamiento de los poderes judiciales de las
"entidades federativas, en la Iniciativa se establece que
"la independencia de los magistrados y jueces deberá
"estar garantizada por las constituciones y las leyes
"orgánicas de los estados. Tales ordenamientos, por lo
"tanto, deberán establecer las condiciones para el
"ingreso, formación y permanencia de los funcionarios
"judiciales del ámbito estatal.

AMPARO EN REVISION 2639

"Resulta indudable que uno de los fines principales del
"Derecho es la seguridad jurídica, la que ha sido
"definida como "la garantía dada al individuo de que
"su persona, sus bienes y sus derechos no serán objeto
"de ataques violentos o que, si éstos llegan a producirse,
"le serán asegurados por la sociedad protección y
"reparación."

"Para hacer posible las garantías de seguridad jurídica
"establecidas en el artículo 17 constitucional,
"especialmente a la luz de la nueva redacción
"propuesta, se requiere de la independencia de
"magistrados y jueces en todo el ámbito nacional.

"Resulta claro que no puede haber seguridad jurídica
"concebible sin división de poderes, pues este principio
"no sólo aparta a los estados de la posibilidad de caer
"en el absolutismo, sino que les es presupuesto
"indispensable para que cada uno de ellos cumpla
"adecuadamente su función sin interferencias de los
"otros.

"Por lo tanto, han que establecer los medios
"adecuados, como se busca en la iniciativa, para lograr
"una verdadera independencia del Poder Judicial en,
"todas las entidades del país y que los jueces no tengan



AMPARO EN REVISION 2639/96

"más norma rectora que la ley.

"Hay que superar todo vestigio de caciquismo estatal

"en torno a la administración de justicia y cerrar las

"puertas a las arbitrariedades a que conduce el hecho

"de que los jueces estén supeditados en ocasiones a

"gobernantes o sujetos a caprichos de ámbito local.

"Una de las condiciones básicas para garantizar la

"independencia de los altos funcionarios judiciales es la

"estabilidad en el cargo, pues ésta proporciona a los

"servidores de la administración de justicia la seguridad

"de que, mientras su conducta sea apegada a Derecho

"y obre con justicia, gozará de permanencia en su

"puesto.

"Ya lo decía Alexander Hamilton en *El Federalista*, hace

"doscientos años, que la adhesión uniforme e inflexible

"a la ley, indispensable en los tribunales de justicia,

"manifiestamente no puede esperarse de jueces que

ORTE DE

LA FICION,

EL C. B. 1000

"estén en posesión de sus cargos en virtud de

"designaciones temporales. Ya ello parava: los

"nombramientos periódicos, cualquiera que sea la

"forma como se regulen o la persona que los haga,

"resultarían fatales para esa imprescindible

"independencia."



AMPARO EN REVISION 2639/

"De ahí, pues, la trascendencia de la disposición que se
"pretende incluir en la fracción III del artículo 116, que
"establece que los magistrados durarán en el ejercicio
"de su encargo el tiempo que señalen las
"constituciones locales, que podrán ser reelectos, y que
"si lo fueren, sólo podrán ser privados de sus puestos en
"los términos que determinen las constituciones y las
"leyes de responsabilidades de los servidores públicos
"de los estados.

En la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, celebrada
el diecisiete de diciembre de mil novecientos ochenta y seis, se dio
lectura al siguiente dictamen:

"Incorporar la independencia judicial al precepto
"constitucional que garantiza el derecho a la justicia, se
"estima por la Comisión que rinde el presente dictamen
"como un fiel eco de la exposición de motivos del
"Proyecto de Constitución del primer jefe de Ejército
"Constitucionalista en que categóricamente se afirma:
"Uno de los anhelos más ardientes y más hondamente
"sentidos por el pueblo mexicano es el de tener
"tribunales independientes que hagan efectivas las
"garantías individuales contra los atentados y excesos
"de los agentes del Poder Público ...





1039

AMPARO EN REVISION 2639/96

"Finalmente, la fracción III del artículo 116 constitucional
"contiene la referencia al Poder Judicial de cada
"estado. Aquí radica una de las innovaciones
"fundamentales de la iniciativa pues señala que dicho
"Poder Judicial se ejercerá por los tribunales que
"establezcan las constituciones locales." El segundo
"párrafo de la fracción III, establece que la
"independencia de los magistrados y jueces se
"garantizarán en cada una de la constituciones y leyes
"orgánicas locales y se fijan las bases para su
"reglamentación al señalar que corresponde a estos
"ordenamientos establecer las condiciones para el
"ingreso, formación y permanencia de quienes sirvan a
"los poderes judiciales de los estados ...
"Se propone también que a nivel constitucional ... se
"asegure la permanencia en el cargo de los
"funcionarios judiciales para mantener autonomía de
"criterio, sin detrimento de la seguridad social, personal
"y familiar del juzgador. Al efecto se establece que los
"magistrados durarán en su encargo el tiempo que
"señalen las constituciones locales y podrán ser
"reelectos en ese cargo y, si lo fueren, sólo podrán ser
"privados de sus puestos en los términos que determinen

AMPARO EN REVISION 2639

"las constituciones y las leyes de responsabilidades de

"los servicios públicos de los estados.

Dentro de las intervenciones de los diputados que participaron en el debate de la iniciativa, destaca la siguiente, en la parte donde se aborda el tema materia del presente asunto:

"El C. César Augusto Santiago Ramírez:

"Pero si por un lado la iniciativa se orienta a establecer

"este orden nuevo, bien estructurado para fortalecer el

"Poder Judicial, por otro lado, también nos da una idea

"muy correcta de lo que es el sistema de división de

"poderes, y yo pienso que éstos son los grandes ejes que

"quedan muy claros en la Exposición de Motivos de la

"Iniciativa y en el dictamen de la Comisión de

"Gobernación y Puntos Constitucionales.

"Se trata pues, de determinar con gran claridad y con el

"avance en la técnica constitucional de que estamos

"disfrutando en la época presente, de establecer, por

"un lado con claridad meridiana, la teoría de la división

"de poderes y por otro, robustecer el ordenamiento

"jurídico constitucional que norma la vida del Poder

"Judicial en la constitución.

De lo reproducido precedentemente y, en general, del proceso que dio lugar a las reformas constitucionales de que se trata,

1039



AMPARO EN REVISION 2639/96

se desprende que las mismas tuvieron como antecedentes, la consulta popular realizada en el año de mil novecientos ochenta y tres, las conclusiones del XIII Congreso de tribunales superiores de justicia del País y la necesidad de establecer en el Pacto Federal los lineamientos fundamentales para la organización de los poderes judiciales de los Estados. Debe destacarse que la reforma a la fracción III del artículo 116 de la Ley Fundamental se realizó conjuntamente con la enmienda de varios preceptos en materia de administración de justicia y, principalmente, del artículo 17. De las partes expuestas del procedimiento de enmienda constitucional se deduce claramente que la finalidad de la reforma, en la parte que interesa, fue garantizar efectivamente la independencia de los poderes judiciales de los Estados, ello se sigue de la reiteración con que se habla de hacer efectiva la división de poderes y la autonomía de los poderes judiciales locales. Dentro de esta temática, específicamente, se abordó la cuestión de la inamovilidad; se señaló enfáticamente que con la inclusión de ella en las reformas se pretende hacer efectiva la independencia de los poderes judiciales locales. De modo claro, tanto en la exposición de motivos de la iniciativa de reforma como en la intervención del Senador Sobarzo, se dijo categóricamente que una de las condiciones básicas para garantizar la independencia de los altos funcionarios judiciales en la estabilidad en el cargo, pues esta proporciona a los servidores de la administración de justicia la seguridad de que mientras su conducta sea apegada a derecho y

AMPARO EN REVISION 2639.

obre con justicia gozará de permanencia en el puesto.

De lo expuesto se sigue que la interpretación del artículo 116, fracción III de la Constitución Federal debe favorecer la realización de la independencia y autonomía del Poder Judicial de las entidades federativas y a la inamovilidad judicial como un medio para lograrla.

El artículo 116, fracción III fue reformado de nueva cuenta mediante el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, para adicionar un nuevo párrafo segundo y precisar los requisitos para ser Magistrado, los impedimentos para serlo y para dejar a las disposiciones locales el procedimiento para el nombramiento de jueces. Del procedimiento de reforma constitucional se destacan las siguientes ideas, en relación con la litis planteada:

Iniciativa presidencial.

"...PODERES JUDICIALES DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO
"FEDERAL.

"La iniciativa de reformas que presento incluye también
"dos modificaciones a los regímenes de los poderes
"judiciales de los estados y del Distrito Federal.

"CONSEJOS DE LA JUDICATURA Y CARRERA JUDICIAL.

"La situación que guardan el gobierno y la
"administración del Poder Judicial de la Federación





10910

AMPARO EN REVISION 2639/96

"tiene una enorme simetría con lo que acontece en los
"ámbitos estatales y del Distrito Federal. Es una
"constante que los tribunales supremos en los ámbitos
"locales tengan a su cargo funciones semejantes a las
"que hasta el día de hoy realiza el Pleno de la Suprema
"Corte de Justicia, con la excepción hecha del Estado
"de Sinaloa, donde desde hace años existe un Consejo
"de la Judicatura.

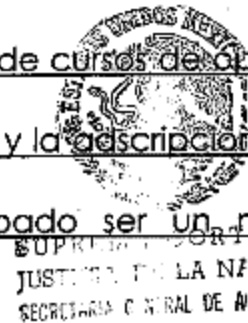
"El enorme cúmulo de funciones descritas propicia, al
"igual que en el ámbito federal, que los magistrados
"distrigan buena parte del tiempo que debieran
"dedicar a las funciones jurisdiccionales. Por ello, si los
"motivos que justifican la separación funcional y
"orgánica de las atribuciones jurisdiccionales y
"administrativas en el Poder Judicial de la Federación
"subsisten también en el ámbito local, resulta necesario
"llevar a cabo la consiguiente reforma respecto de
"estos últimos.

"En razón de lo anterior, se plantea la derogación del
"párrafo cuarto de la fracción III del artículo 116
"constitucional, que plantea un esquema de
"nombramiento rígido para los jueces en los estados.
"Con ello se posibilita que cada entidad federativa

AMPARO EN REVISION 2639

"adopte el esquema de organización judicial que
"considere más conveniente para ampliar los principios
"de la carrera judicial que enuncia el párrafo segundo
"de la fracción antes invocada.

"Con la posibilidad de que las entidades federativas
"adopten la figura de los consejos de las judicaturas, se
"sientan las bases institucionales para el establecimiento
"y desarrollo de la carrera judicial. Hasta ahora, la
"operación de la carrera judicial ha encontrado en
"muchos casos grandes obstáculos por la falta de un
"órgano específicamente dedicado a ella. Con su
"cabal instrumentación se dará respuesta a un reclamo
"general en la sociedad para elevar el nivel profesional
"y garantizar la solvencia moral de jueces y
"magistrados. El establecimiento de cursos de oposición
"para la designación, el ascenso y la descripción de los
"funcionarios judiciales ha probado ser un método
"idóneo.



"Cámara de Senadores.

"Dictamen

"COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA, PUNTOS

"CONSTITUCIONALES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

"PRIMERA SECCION.

1041

AMPARO EN REVISION 2639/96

"PODERES JUDICIALES LOCALES.

"Por lo que respecta a los estados de la Federación,

"dadas las características y la dimensión heterogéneas

"de los diversos sistemas de justicia, sería inconveniente

"establecer en la Constitución un sistema único similar al

"del Poder Judicial Federal y al del Distrito Federal. Por

"ello, se considera procedente la propuesta contenida

"en la iniciativa, la cual se limita a eliminar el párrafo

"cuarto de la fracción III del artículo 116, en el cual el

"Constituyente estableció un sistema rígido que instruye

"a los tribunales superiores a designar a los jueces de

"primera instancia.

"De esta manera se persigue que, con pleno respecto

"del Pacto Federal, sean los estados quienes decidan

"cuáles son los mecanismos que, acorde con sus

"necesidades, son los idóneas para alcanzar los fines de

"la reforma integral del sistema de administración de

"justicia.

"En este mismo sentido, se ha considerado que es

"adecuada la propuesta de modificación al tercer

"párrafo del artículo 116, únicamente para adecuar los

"requisitos para ser Magistrado, a la nueva redacción

"del artículo 95.

AMPARO EN REVISION 2639/

"Cámara de Diputados.

"Dictamen.

"Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos

"Constitucionales y de Justicia.

"En cuanto al régimen de la función judicial en los

"estados de la Federación, en el artículo 116 se suprime

"el párrafo cuarto de la fracción III y con ello la

"disposición sobre la designación de jueces de primera

"instancia a cargo de los tribunales superiores de los

"estados, quedando a la autonomía estatal la

"determinación de los procedimientos tendientes a

"mejorar la administración de justicia en su ámbito. Se

"considera adecuado establecer en este precepto la

"remisión al artículo 95, por lo que ~~hace~~ los requisitos

"de los magistrados de los poderes judiciales locales..."

Del procedimiento de reforma constitucional, cuyas partes
medulares en relación con la litis propuesta han quedado
reproducidas, se desprende la pretensión del Poder Revisor de la
Constitución de fortalecer la independencia de los Poderes Judiciales
de las entidades federativas, a través de la modificación que eliminó el
sistema rígido para el nombramiento de jueces y para establecer con
claridad los requisitos para ser Magistrado, lo que evidencia que la



1092

AMPARO EN REVISION 2639/96

teleología de la reforma es fortalecer los poderes judiciales de los estados y de incluir la carrera judicial como uno de los elementos indispensables para fortalecer la excelencia, profesionalismo e independencia de sus Poderes Judiciales.

El texto actual del artículo 17 constitucional proviene de la reforma de mil novecientos ochenta y siete, antes comentada, y su texto brinda elementos cuyo análisis es obligado al analizar cualquier cuestión relativa a la administración de justicia, por lo que se impone su transcripción:

"Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma,
ni ejercer violencia para reclamar su derecho.

"Toda persona tiene derecho a que se le administre
justicia por tribunales que estarán expeditos para
impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes,
emitiendo sus resoluciones de manera pronta,
completa e imparcial. Su servicio será gratuito,

quedando, en consecuencia, prohibidas las costas
judiciales.

"Las leyes federales y locales establecerán los medios
necesarios para que se garantice la independencia de
los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones.

"Nadie puede ser apisionado por deudas de carácter
puramente civil."

AMPARO EN REVISION 2639

La interpretación sistemática del artículo 116, fracción III con el 17, antes reproducido, permite concluir que la independencia del Poder Judicial se manifiesta en que éste, hacia el exterior estará libre de cualquier presión o injerencia, y que a través de las llamadas garantías judiciales se logra su objetivo, destacando entre ellas la inamovilidad de los jueces. La mayoría de los doctrinarios han explicado esta figura judicial en el rubro de la independencia que debe corresponder al Poder Judicial, frente a otros órganos públicos o privados; su concepto puede entenderse en dos sentidos, a saber: primero, como el derecho público subjetivo de que deben gozar los funcionarios judiciales con los siguientes derechos: a). el de permanecer en sus puestos sin limitación de tiempo y, por ende, el de no ser destituidos sino por las causas determinadas por la ley y mediante un juicio en forma en que se demuestre la responsabilidad del funcionario, b). el de no ser trasladados a un puesto diferente para el que fueron designados, a no ser que medie la voluntad del interesado; c). el de no ser suspendidos, sino siguiendo un procedimiento formal y por haber cometido una falta que amerite esa pena, y d). el de ser jubilados cuando hayan desempeñado sus funciones determinado número de años, fijado por la ley (Eduardo Pallares). A los aspectos anteriormente precisados se incorpora el derecho a la no disminución arbitraria de sus emolumentos. Aparte de la inamovilidad vitalicia está, en segundo lugar, aquella protección establecida por las leyes para que el Juez o Magistrado no sea



AMPARO EN REVISION 2639/96

removido dentro de un lapso determinado sin una causa que lo justifique (Pallares, de Carlos).

No basta con dotar a la judicatura de la independencia de la función, sino que el propio Juez necesita tener la certeza de que no será removido arbitrariamente de su puesto; es preciso asegurar al funcionario judicial la estabilidad de su puesto. ¹ Todavía más, la doctrina jurídica ha sostenido que la inamovilidad de los magistrados y jueces reposa en motivos de orden público muy respetables, no es como con frecuencia se ² ~~se~~ ³ ~~se~~ ⁴ ~~se~~ ⁵ ~~se~~ ⁶ ~~se~~ ⁷ ~~se~~ ⁸ ~~se~~ ⁹ ~~se~~ ¹⁰ ~~se~~ ¹¹ ~~se~~ ¹² ~~se~~ ¹³ ~~se~~ ¹⁴ ~~se~~ ¹⁵ ~~se~~ ¹⁶ ~~se~~ ¹⁷ ~~se~~ ¹⁸ ~~se~~ ¹⁹ ~~se~~ ²⁰ ~~se~~ ²¹ ~~se~~ ²² ~~se~~ ²³ ~~se~~ ²⁴ ~~se~~ ²⁵ ~~se~~ ²⁶ ~~se~~ ²⁷ ~~se~~ ²⁸ ~~se~~ ²⁹ ~~se~~ ³⁰ ~~se~~ ³¹ ~~se~~ ³² ~~se~~ ³³ ~~se~~ ³⁴ ~~se~~ ³⁵ ~~se~~ ³⁶ ~~se~~ ³⁷ ~~se~~ ³⁸ ~~se~~ ³⁹ ~~se~~ ⁴⁰ ~~se~~ ⁴¹ ~~se~~ ⁴² ~~se~~ ⁴³ ~~se~~ ⁴⁴ ~~se~~ ⁴⁵ ~~se~~ ⁴⁶ ~~se~~ ⁴⁷ ~~se~~ ⁴⁸ ~~se~~ ⁴⁹ ~~se~~ ⁵⁰ ~~se~~ ⁵¹ ~~se~~ ⁵² ~~se~~ ⁵³ ~~se~~ ⁵⁴ ~~se~~ ⁵⁵ ~~se~~ ⁵⁶ ~~se~~ ⁵⁷ ~~se~~ ⁵⁸ ~~se~~ ⁵⁹ ~~se~~ ⁶⁰ ~~se~~ ⁶¹ ~~se~~ ⁶² ~~se~~ ⁶³ ~~se~~ ⁶⁴ ~~se~~ ⁶⁵ ~~se~~ ⁶⁶ ~~se~~ ⁶⁷ ~~se~~ ⁶⁸ ~~se~~ ⁶⁹ ~~se~~ ⁷⁰ ~~se~~ ⁷¹ ~~se~~ ⁷² ~~se~~ ⁷³ ~~se~~ ⁷⁴ ~~se~~ ⁷⁵ ~~se~~ ⁷⁶ ~~se~~ ⁷⁷ ~~se~~ ⁷⁸ ~~se~~ ⁷⁹ ~~se~~ ⁸⁰ ~~se~~ ⁸¹ ~~se~~ ⁸² ~~se~~ ⁸³ ~~se~~ ⁸⁴ ~~se~~ ⁸⁵ ~~se~~ ⁸⁶ ~~se~~ ⁸⁷ ~~se~~ ⁸⁸ ~~se~~ ⁸⁹ ~~se~~ ⁹⁰ ~~se~~ ⁹¹ ~~se~~ ⁹² ~~se~~ ⁹³ ~~se~~ ⁹⁴ ~~se~~ ⁹⁵ ~~se~~ ⁹⁶ ~~se~~ ⁹⁷ ~~se~~ ⁹⁸ ~~se~~ ⁹⁹ ~~se~~ ¹⁰⁰ ~~se~~ ¹⁰¹ ~~se~~ ¹⁰² ~~se~~ ¹⁰³ ~~se~~ ¹⁰⁴ ~~se~~ ¹⁰⁵ ~~se~~ ¹⁰⁶ ~~se~~ ¹⁰⁷ ~~se~~ ¹⁰⁸ ~~se~~ ¹⁰⁹ ~~se~~ ¹¹⁰ ~~se~~ ¹¹¹ ~~se~~ ¹¹² ~~se~~ ¹¹³ ~~se~~ ¹¹⁴ ~~se~~ ¹¹⁵ ~~se~~ ¹¹⁶ ~~se~~ ¹¹⁷ ~~se~~ ¹¹⁸ ~~se~~ ¹¹⁹ ~~se~~ ¹²⁰ ~~se~~ ¹²¹ ~~se~~ ¹²² ~~se~~ ¹²³ ~~se~~ ¹²⁴ ~~se~~ ¹²⁵ ~~se~~ ¹²⁶ ~~se~~ ¹²⁷ ~~se~~ ¹²⁸ ~~se~~ ¹²⁹ ~~se~~ ¹³⁰ ~~se~~ ¹³¹ ~~se~~ ¹³² ~~se~~ ¹³³ ~~se~~ ¹³⁴ ~~se~~ ¹³⁵ ~~se~~ ¹³⁶ ~~se~~ ¹³⁷ ~~se~~ ¹³⁸ ~~se~~ ¹³⁹ ~~se~~ ¹⁴⁰ ~~se~~ ¹⁴¹ ~~se~~ ¹⁴² ~~se~~ ¹⁴³ ~~se~~ ¹⁴⁴ ~~se~~ ¹⁴⁵ ~~se~~ ¹⁴⁶ ~~se~~ ¹⁴⁷ ~~se~~ ¹⁴⁸ ~~se~~ ¹⁴⁹ ~~se~~ ¹⁵⁰ ~~se~~ ¹⁵¹ ~~se~~ ¹⁵² ~~se~~ ¹⁵³ ~~se~~ ¹⁵⁴ ~~se~~ ¹⁵⁵ ~~se~~ ¹⁵⁶ ~~se~~ ¹⁵⁷ ~~se~~ ¹⁵⁸ ~~se~~ ¹⁵⁹ ~~se~~ ¹⁶⁰ ~~se~~ ¹⁶¹ ~~se~~ ¹⁶² ~~se~~ ¹⁶³ ~~se~~ ¹⁶⁴ ~~se~~ ¹⁶⁵ ~~se~~ ¹⁶⁶ ~~se~~ ¹⁶⁷ ~~se~~ ¹⁶⁸ ~~se~~ ¹⁶⁹ ~~se~~ ¹⁷⁰ ~~se~~ ¹⁷¹ ~~se~~ ¹⁷² ~~se~~ ¹⁷³ ~~se~~ ¹⁷⁴ ~~se~~ ¹⁷⁵ ~~se~~ ¹⁷⁶ ~~se~~ ¹⁷⁷ ~~se~~ ¹⁷⁸ ~~se~~ ¹⁷⁹ ~~se~~ ¹⁸⁰ ~~se~~ ¹⁸¹ ~~se~~ ¹⁸² ~~se~~ ¹⁸³ ~~se~~ ¹⁸⁴ ~~se~~ ¹⁸⁵ ~~se~~ ¹⁸⁶ ~~se~~ ¹⁸⁷ ~~se~~ ¹⁸⁸ ~~se~~ ¹⁸⁹ ~~se~~ ¹⁹⁰ ~~se~~ ¹⁹¹ ~~se~~ ¹⁹² ~~se~~ ¹⁹³ ~~se~~ ¹⁹⁴ ~~se~~ ¹⁹⁵ ~~se~~ ¹⁹⁶ ~~se~~ ¹⁹⁷ ~~se~~ ¹⁹⁸ ~~se~~ ¹⁹⁹ ~~se~~ ²⁰⁰ ~~se~~ ²⁰¹ ~~se~~ ²⁰² ~~se~~ ²⁰³ ~~se~~ ²⁰⁴ ~~se~~ ²⁰⁵ ~~se~~ ²⁰⁶ ~~se~~ ²⁰⁷ ~~se~~ ²⁰⁸ ~~se~~ ²⁰⁹ ~~se~~ ²¹⁰ ~~se~~ ²¹¹ ~~se~~ ²¹² ~~se~~ ²¹³ ~~se~~ ²¹⁴ ~~se~~ ²¹⁵ ~~se~~ ²¹⁶ ~~se~~ ²¹⁷ ~~se~~ ²¹⁸ ~~se~~ ²¹⁹ ~~se~~ ²²⁰ ~~se~~ ²²¹ ~~se~~ ²²² ~~se~~ ²²³ ~~se~~ ²²⁴ ~~se~~ ²²⁵ ~~se~~ ²²⁶ ~~se~~ ²²⁷ ~~se~~ ²²⁸ ~~se~~ ²²⁹ ~~se~~ ²³⁰ ~~se~~ ²³¹ ~~se~~ ²³² ~~se~~ ²³³ ~~se~~ ²³⁴ ~~se~~ ²³⁵ ~~se~~ ²³⁶ ~~se~~ ²³⁷ ~~se~~ ²³⁸ ~~se~~ ²³⁹ ~~se~~ ²⁴⁰ ~~se~~ ²⁴¹ ~~se~~ ²⁴² ~~se~~ ²⁴³ ~~se~~ ²⁴⁴ ~~se~~ ²⁴⁵ ~~se~~ ²⁴⁶ ~~se~~ ²⁴⁷ ~~se~~ ²⁴⁸ ~~se~~ ²⁴⁹ ~~se~~ ²⁵⁰ ~~se~~ ²⁵¹ ~~se~~ ²⁵² ~~se~~ ²⁵³ ~~se~~ ²⁵⁴ ~~se~~ ²⁵⁵ ~~se~~ ²⁵⁶ ~~se~~ ²⁵⁷ ~~se~~ ²⁵⁸ ~~se~~ ²⁵⁹ ~~se~~ ²⁶⁰ ~~se~~ ²⁶¹ ~~se~~ ²⁶² ~~se~~ ²⁶³ ~~se~~ ²⁶⁴ ~~se~~ ²⁶⁵ ~~se~~ ²⁶⁶ ~~se~~ ²⁶⁷ ~~se~~ ²⁶⁸ ~~se~~ ²⁶⁹ ~~se~~ ²⁷⁰ ~~se~~ ²⁷¹ ~~se~~ ²⁷² ~~se~~ ²⁷³ ~~se~~ ²⁷⁴ ~~se~~ ²⁷⁵ ~~se~~ ²⁷⁶ ~~se~~ ²⁷⁷ ~~se~~ ²⁷⁸ ~~se~~ ²⁷⁹ ~~se~~ ²⁸⁰ ~~se~~ ²⁸¹ ~~se~~ ²⁸² ~~se~~ ²⁸³ ~~se~~ ²⁸⁴ ~~se~~ ²⁸⁵ ~~se~~ ²⁸⁶ ~~se~~ ²⁸⁷ ~~se~~ ²⁸⁸ ~~se~~ ²⁸⁹ ~~se~~ ²⁹⁰ ~~se~~ ²⁹¹ ~~se~~ ²⁹² ~~se~~ ²⁹³ ~~se~~ ²⁹⁴ ~~se~~ ²⁹⁵ ~~se~~ ²⁹⁶ ~~se~~ ²⁹⁷ ~~se~~ ²⁹⁸ ~~se~~ ²⁹⁹ ~~se~~ ³⁰⁰ ~~se~~ ³⁰¹ ~~se~~ ³⁰² ~~se~~ ³⁰³ ~~se~~ ³⁰⁴ ~~se~~ ³⁰⁵ ~~se~~ ³⁰⁶ ~~se~~ ³⁰⁷ ~~se~~ ³⁰⁸ ~~se~~ ³⁰⁹ ~~se~~ ³¹⁰ ~~se~~ ³¹¹ ~~se~~ ³¹² ~~se~~ ³¹³ ~~se~~ ³¹⁴ ~~se~~ ³¹⁵ ~~se~~ ³¹⁶ ~~se~~ ³¹⁷ ~~se~~ ³¹⁸ ~~se~~ ³¹⁹ ~~se~~ ³²⁰ ~~se~~ ³²¹ ~~se~~ ³²² ~~se~~ ³²³ ~~se~~ ³²⁴ ~~se~~ ³²⁵ ~~se~~ ³²⁶ ~~se~~ ³²⁷ ~~se~~ ³²⁸ ~~se~~ ³²⁹ ~~se~~ ³³⁰ ~~se~~ ³³¹ ~~se~~ ³³² ~~se~~ ³³³ ~~se~~ ³³⁴ ~~se~~ ³³⁵ ~~se~~ ³³⁶ ~~se~~ ³³⁷ ~~se~~ ³³⁸ ~~se~~ ³³⁹ ~~se~~ ³⁴⁰ ~~se~~ ³⁴¹ ~~se~~ ³⁴² ~~se~~ ³⁴³ ~~se~~ ³⁴⁴ ~~se~~ ³⁴⁵ ~~se~~ ³⁴⁶ ~~se~~ ³⁴⁷ ~~se~~ ³⁴⁸ ~~se~~ ³⁴⁹ ~~se~~ ³⁵⁰ ~~se~~ ³⁵¹ ~~se~~ ³⁵² ~~se~~ ³⁵³ ~~se~~ ³⁵⁴ ~~se~~ ³⁵⁵ ~~se~~ ³⁵⁶ ~~se~~ ³⁵⁷ ~~se~~ ³⁵⁸ ~~se~~ ³⁵⁹ ~~se~~ ³⁶⁰ ~~se~~ ³⁶¹ ~~se~~ ³⁶² ~~se~~ ³⁶³ ~~se~~ ³⁶⁴ ~~se~~ ³⁶⁵ ~~se~~ ³⁶⁶ ~~se~~ ³⁶⁷ ~~se~~ ³⁶⁸ ~~se~~ ³⁶⁹ ~~se~~ ³⁷⁰ ~~se~~ ³⁷¹ ~~se~~ ³⁷² ~~se~~ ³⁷³ ~~se~~ ³⁷⁴ ~~se~~ ³⁷⁵ ~~se~~ ³⁷⁶ ~~se~~ ³⁷⁷ ~~se~~ ³⁷⁸ ~~se~~ ³⁷⁹ ~~se~~ ³⁸⁰ ~~se~~ ³⁸¹ ~~se~~ ³⁸² ~~se~~ ³⁸³ ~~se~~ ³⁸⁴ ~~se~~ ³⁸⁵ ~~se~~ ³⁸⁶ ~~se~~ ³⁸⁷ ~~se~~ ³⁸⁸ ~~se~~ ³⁸⁹ ~~se~~ ³⁹⁰ ~~se~~ ³⁹¹ ~~se~~ ³⁹² ~~se~~ ³⁹³ ~~se~~ ³⁹⁴ ~~se~~ ³⁹⁵ ~~se~~ ³⁹⁶ ~~se~~ ³⁹⁷ ~~se~~ ³⁹⁸ ~~se~~ ³⁹⁹ ~~se~~ ⁴⁰⁰ ~~se~~ ⁴⁰¹ ~~se~~ ⁴⁰² ~~se~~ ⁴⁰³ ~~se~~ ⁴⁰⁴ ~~se~~ ⁴⁰⁵ ~~se~~ ⁴⁰⁶ ~~se~~ ⁴⁰⁷ ~~se~~ ⁴⁰⁸ ~~se~~ ⁴⁰⁹ ~~se~~ ⁴¹⁰ ~~se~~ ⁴¹¹ ~~se~~ ⁴¹² ~~se~~ ⁴¹³ ~~se~~ ⁴¹⁴ ~~se~~ ⁴¹⁵ ~~se~~ ⁴¹⁶ ~~se~~ ⁴¹⁷ ~~se~~ ⁴¹⁸ ~~se~~ ⁴¹⁹ ~~se~~ ⁴²⁰ ~~se~~ ⁴²¹ ~~se~~ ⁴²² ~~se~~ ⁴²³ ~~se~~ ⁴²⁴ ~~se~~ ⁴²⁵ ~~se~~ ⁴²⁶ ~~se~~ ⁴²⁷ ~~se~~ ⁴²⁸ ~~se~~ ⁴²⁹ ~~se~~ ⁴³⁰ ~~se~~ ⁴³¹ ~~se~~ ⁴³² ~~se~~ ⁴³³ ~~se~~ ⁴³⁴ ~~se~~ ⁴³⁵ ~~se~~ ⁴³⁶ ~~se~~ ⁴³⁷ ~~se~~ ⁴³⁸ ~~se~~ ⁴³⁹ ~~se~~ ⁴⁴⁰ ~~se~~ ⁴⁴¹ ~~se~~ ⁴⁴² ~~se~~ ⁴⁴³ ~~se~~ ⁴⁴⁴ ~~se~~ ⁴⁴⁵ ~~se~~ ⁴⁴⁶ ~~se~~ ⁴⁴⁷ ~~se~~ ⁴⁴⁸ ~~se~~ ⁴⁴⁹ ~~se~~ ⁴⁵⁰ ~~se~~ ⁴⁵¹ ~~se~~ ⁴⁵² ~~se~~ ⁴⁵³ ~~se~~ ⁴⁵⁴ ~~se~~ ⁴⁵⁵ ~~se~~ ⁴⁵⁶ ~~se~~ ⁴⁵⁷ ~~se~~ ⁴⁵⁸ ~~se~~ ⁴⁵⁹ ~~se~~ ⁴⁶⁰ ~~se~~ ⁴⁶¹ ~~se~~ ⁴⁶² ~~se~~ ⁴⁶³ ~~se~~ ⁴⁶⁴ ~~se~~ ⁴⁶⁵ ~~se~~ ⁴⁶⁶ ~~se~~ ⁴⁶⁷ ~~se~~ ⁴⁶⁸ ~~se~~ ⁴⁶⁹ ~~se~~ ⁴⁷⁰ ~~se~~ ⁴⁷¹ ~~se~~ ⁴⁷² ~~se~~ ⁴⁷³ ~~se~~ ⁴⁷⁴ ~~se~~ ⁴⁷⁵ ~~se~~ ⁴⁷⁶ ~~se~~ ⁴⁷⁷ ~~se~~ ⁴⁷⁸ ~~se~~ ⁴⁷⁹ ~~se~~ ⁴⁸⁰ ~~se~~ ⁴⁸¹ ~~se~~ ⁴⁸² ~~se~~ ⁴⁸³ ~~se~~ ⁴⁸⁴ ~~se~~ ⁴⁸⁵ ~~se~~ ⁴⁸⁶ ~~se~~ ⁴⁸⁷ ~~se~~ ⁴⁸⁸ ~~se~~ ⁴⁸⁹ ~~se~~ ⁴⁹⁰ ~~se~~ ⁴⁹¹ ~~se~~ ⁴⁹² ~~se~~ ⁴⁹³ ~~se~~ ⁴⁹⁴ ~~se~~ ⁴⁹⁵ ~~se~~ ⁴⁹⁶ ~~se~~ ⁴⁹⁷ ~~se~~ ⁴⁹⁸ ~~se~~ ⁴⁹⁹ ~~se~~ ⁵⁰⁰ ~~se~~ ⁵⁰¹ ~~se~~ ⁵⁰² ~~se~~ ⁵⁰³ ~~se~~ ⁵⁰⁴ ~~se~~ ⁵⁰⁵ ~~se~~ ⁵⁰⁶ ~~se~~ ⁵⁰⁷ ~~se~~ ⁵⁰⁸ ~~se~~ ⁵⁰⁹ ~~se~~ ⁵¹⁰ ~~se~~ ⁵¹¹ ~~se~~ ⁵¹² ~~se~~ ⁵¹³ ~~se~~ ⁵¹⁴ ~~se~~ ⁵¹⁵ ~~se~~ ⁵¹⁶ ~~se~~ ⁵¹⁷ ~~se~~ ⁵¹⁸ ~~se~~ ⁵¹⁹ ~~se~~ ⁵²⁰ ~~se~~ ⁵²¹ ~~se~~ ⁵²² ~~se~~ ⁵²³ ~~se~~ ⁵²⁴ ~~se~~ ⁵²⁵ ~~se~~ ⁵²⁶ ~~se~~ ⁵²⁷ ~~se~~ ⁵²⁸ ~~se~~ ⁵²⁹ ~~se~~ ⁵³⁰ ~~se~~ ⁵³¹ ~~se~~ ⁵³² ~~se~~ ⁵³³ ~~se~~ ⁵³⁴ ~~se~~ ⁵³⁵ ~~se~~ ⁵³⁶ ~~se~~ ⁵³⁷ ~~se~~ ⁵³⁸ ~~se~~ ⁵³⁹ ~~se~~ ⁵⁴⁰ ~~se~~ ⁵⁴¹ ~~se~~ ⁵⁴² ~~se~~ ⁵⁴³ ~~se~~ ⁵⁴⁴ ~~se~~ ⁵⁴⁵ ~~se~~ ⁵⁴⁶ ~~se~~ ⁵⁴⁷ ~~se~~ ⁵⁴⁸ ~~se~~ ⁵⁴⁹ ~~se~~ ⁵⁵⁰ ~~se~~ ⁵⁵¹ ~~se~~ ⁵⁵² ~~se~~ ⁵⁵³ ~~se~~ ⁵⁵⁴ ~~se~~ ⁵⁵⁵ ~~se~~ ⁵⁵⁶ ~~se~~ ⁵⁵⁷ ~~se~~ ⁵⁵⁸ ~~se~~ ⁵⁵⁹ ~~se~~ ⁵⁶⁰ ~~se~~ ⁵⁶¹ ~~se~~ ⁵⁶² ~~se~~ ⁵⁶³ ~~se~~ ⁵⁶⁴ ~~se~~ ⁵⁶⁵ ~~se~~ ⁵⁶⁶ ~~se~~ ⁵⁶⁷ ~~se~~ ⁵⁶⁸ ~~se~~ ⁵⁶⁹ ~~se~~ ⁵⁷⁰ ~~se~~ ⁵⁷¹ ~~se~~ ⁵⁷² ~~se~~ ⁵⁷³ ~~se~~ ⁵⁷⁴ ~~se~~ ⁵⁷⁵ ~~se~~ ⁵⁷⁶ ~~se~~ ⁵⁷⁷ ~~se~~ ⁵⁷⁸ ~~se~~ ⁵⁷⁹ ~~se~~ ⁵⁸⁰ ~~se~~ ⁵⁸¹ ~~se~~ ⁵⁸² ~~se~~ ⁵⁸³ ~~se~~ ⁵⁸⁴ ~~se~~ ⁵⁸⁵ ~~se~~ ⁵⁸⁶ ~~se~~ ⁵⁸⁷ ~~se~~ ⁵⁸⁸ ~~se~~ ⁵⁸⁹ ~~se~~ ⁵⁹⁰ ~~se~~ ⁵⁹¹ ~~se~~ ⁵⁹² ~~se~~ ⁵⁹³ ~~se~~ ⁵⁹⁴ ~~se~~ ⁵⁹⁵ ~~se~~ ⁵⁹⁶ ~~se~~ ⁵⁹⁷ ~~se~~ ⁵⁹⁸ ~~se~~ ⁵⁹⁹ ~~se~~ ⁶⁰⁰ ~~se~~ ⁶⁰¹ ~~se~~ ⁶⁰² ~~se~~ ⁶⁰³ ~~se~~ ⁶⁰⁴ ~~se~~ ⁶⁰⁵ ~~se~~ ⁶⁰⁶ ~~se~~ ⁶⁰⁷ ~~se~~ ⁶⁰⁸ ~~se~~ ⁶⁰⁹ ~~se~~ ⁶¹⁰ ~~se~~ ⁶¹¹ ~~se~~ ⁶¹² ~~se~~ ⁶¹³ ~~se~~ ⁶¹⁴ ~~se~~ ⁶¹⁵ ~~se~~ ⁶¹⁶ ~~se~~ ⁶¹⁷ ~~se~~ ⁶¹⁸ ~~se~~ ⁶¹⁹ ~~se~~ ⁶²⁰ ~~se~~ ⁶²¹ ~~se~~ ⁶²² ~~se~~ ⁶²³ ~~se~~ ⁶²⁴ ~~se~~ ⁶²⁵ ~~se~~ ⁶²⁶ ~~se~~ ⁶²⁷ ~~se~~ ⁶²⁸ ~~se~~ ⁶²⁹ ~~se~~ ⁶³⁰ ~~se~~ ⁶³¹ ~~se~~ ⁶³² ~~se~~ ⁶³³ ~~se~~ ⁶³⁴ ~~se~~ ⁶³⁵ ~~se~~ ⁶³⁶ ~~se~~ ⁶³⁷ ~~se~~ ⁶³⁸ ~~se~~ ⁶³⁹ ~~se~~ ⁶⁴⁰ ~~se~~ ⁶⁴¹ ~~se~~ ⁶⁴² ~~se~~ ⁶⁴³ ~~se~~ ⁶⁴⁴ ~~se~~ ⁶⁴⁵ ~~se~~ ⁶⁴⁶ ~~se~~ ⁶⁴⁷ ~~se~~ ⁶⁴⁸ ~~se~~ ⁶⁴⁹ ~~se~~ ⁶⁵⁰ ~~se~~ ⁶⁵¹ ~~se~~ ⁶⁵² ~~se~~ ⁶⁵³ ~~se~~ ⁶⁵⁴ ~~se~~ ⁶⁵⁵ ~~se~~ ⁶⁵⁶ ~~se~~ ⁶⁵⁷ ~~se~~ ⁶⁵⁸ ~~se~~ ⁶⁵⁹ ~~se~~ ⁶⁶⁰ ~~se~~ ⁶⁶¹ ~~se~~ ⁶⁶² ~~se~~ ⁶⁶³ ~~se~~ ⁶⁶⁴ ~~se~~ ⁶⁶⁵ ~~se~~ ⁶⁶⁶ ~~se~~ ⁶⁶⁷ ~~se~~ ⁶⁶⁸ ~~se~~ ⁶⁶⁹ ~~se~~ ⁶⁷⁰ ~~se~~ ⁶⁷¹ ~~se~~ ⁶⁷² ~~se~~ ⁶⁷³ ~~se~~ ⁶⁷⁴ ~~se~~ ⁶⁷⁵ ~~se~~ ⁶⁷⁶ ~~se~~ ⁶⁷⁷ ~~se~~ ⁶⁷⁸ ~~se~~ ⁶⁷⁹ ~~se~~ ⁶⁸⁰ ~~se~~ ⁶⁸¹ ~~se~~ ⁶⁸² ~~se~~ ⁶⁸³ ~~se~~ ⁶⁸⁴ ~~se~~ ⁶⁸⁵ ~~se~~ ⁶⁸⁶ ~~se~~ ⁶⁸⁷ ~~se~~ ⁶⁸⁸ ~~se~~ ⁶⁸⁹ ~~se~~ ⁶⁹⁰ ~~se~~ ⁶⁹¹ ~~se~~ ⁶⁹² ~~se~~ ⁶⁹³ ~~se~~ ⁶⁹⁴ ~~se~~ ⁶⁹⁵ ~~se~~ ⁶⁹⁶ ~~se~~ ⁶⁹⁷ ~~se~~ ⁶⁹⁸ ~~se~~ ⁶⁹⁹ ~~se~~ ⁷⁰⁰ ~~se~~ ⁷⁰¹ ~~se~~ ⁷⁰² ~~se~~ ⁷⁰³ ~~se~~ ⁷⁰⁴ ~~se~~ ⁷⁰⁵ ~~se~~ ⁷⁰⁶ ~~se~~ ⁷⁰⁷ ~~se~~ ⁷⁰⁸ ~~se~~ ⁷⁰⁹ ~~se~~ ⁷¹⁰ ~~se~~ ⁷¹¹ ~~se~~ ⁷¹² ~~se~~ ⁷¹³ ~~se~~ ⁷¹⁴ ~~se~~ ⁷¹⁵ ~~se~~ ⁷¹⁶ ~~se~~ ⁷¹⁷ ~~se~~ ⁷¹⁸ ~~se~~ ⁷¹⁹ ~~se~~ ⁷²⁰ ~~se~~ ⁷²¹ ~~se~~ ⁷²² ~~se~~ ⁷²³ ~~se~~ ⁷²⁴ ~~se~~ ⁷²⁵ ~~se~~ ⁷²⁶ ~~se~~ ⁷²⁷ ~~se~~ ⁷²⁸ ~~se~~ ⁷²⁹ ~~se~~ ⁷³⁰ ~~se~~ ⁷³¹ ~~se~~ ⁷³² ~~se~~ ⁷³³ ~~se~~ ⁷³⁴ ~~se~~ ⁷³⁵ ~~se~~ ⁷³⁶ ~~se~~ ⁷³⁷ ~~se~~ ⁷³⁸ ~~se~~ ⁷³⁹ ~~se~~ ⁷⁴⁰ ~~se~~ ⁷⁴¹ ~~se~~ ⁷⁴² ~~se~~ ⁷⁴³ ~~se~~ ⁷⁴⁴ ~~se~~ ⁷⁴⁵ ~~se~~ ⁷⁴⁶ ~~se~~ ⁷⁴⁷ ~~se~~ ⁷⁴⁸ ~~se~~ ⁷⁴⁹ ~~se~~ ⁷⁵⁰ ~~se~~ ⁷⁵¹ ~~se~~ ⁷⁵² ~~se~~ ⁷⁵³ ~~se~~ ⁷⁵⁴ ~~se~~ ⁷⁵⁵ ~~se~~ ⁷⁵⁶ ~~se~~ ⁷⁵⁷

AMPARO EN REVISION 2639

independencia respecto del Poder Ejecutivo, no dependiendo el funcionario judicial más que de la Ley (Chiovenda, Beceña).

También hay que tutelar al Juez de las presiones de los otros poderes y aun de los jerarcas judiciales, que a guisa de consejos al inferior, imponen criterios de resolución o de conducta. Otro tanto debe hacerse en resguardo del Juez, que puede ser cambiado, substituido, suspendido, ascendido (extremo engañoso) o hasta despedido, en aras de cumplir arbitrariedades impuestas por influyentes, por grupos políticos, o por campañas amañadas para desvirtuar la opinión pública, y otras presiones no menos ilícitas.

Este Tribunal Constitucional advierte que las opiniones doctrinarias antes referidas sintéticamente se encuentran plenamente incorporadas en nuestro sistema constitucional, como se desprende de los procedimientos de enmienda constitucional, cuyas partes relativas han quedado reproducidas precedentemente, por lo anterior es claro que la inamovilidad se garantiza en un aspecto, a través de hacer efectivo que el juzgador no tenga preocupaciones en cuanto a su futuro personal y distraiga su atención en aras de oportunidades o favores dentro de su labor; esta garantía, aunada a la que consiste en que la remuneración no podrá ser disminuida, permiten brindar a la judicatura de elementos objetivos que en el plano individual le permiten realizar sus altas funciones sin ningún tipo de presiones o injerencias. La inamovilidad pues, dentro de nuestro sistema constitucional no debe verse como un privilegio otorgado a un grupo



AMPARO EN REVISION 2639/96

de individuos, sino en un mecanismo, a través del cual el orden jurídico pretende garantizar la independencia del Poder Judicial para que se encuentre libre de interferencias para permitir la realización de una justicia pronta, completa e imparcial. De esta forma, es claro que los gobernados son los primeros interesados en salvaguardar la independencia de sus tribunales, los cuales deberán estar expeditos a administrar justicia. Conviene destacar que las prerrogativas mencionadas se aplican fundamentalmente a los funcionarios judiciales por que los mismos en el desempeño de sus cargos, deciden controversias lo que exige, esencialmente, imparcialidad que presupone, a su vez, autonomía e independencia.

Para el tema en estudio resulta obligado también analizar armónicamente lo preceptuado por los párrafos segundo y quinto de la fracción III del artículo 116 de la Ley Fundamental. Efectivamente, el párrafo segundo obliga a que las constituciones y leyes de los estados deberán garantizar la independencia de magistrados y jueces, de lo que se sigue que las normas dictadas por el Constituyente o Legislador Local deben crear un sistema en el que efectivamente se permita que la labor jurisdiccional se desarrolle con libertad y sin injerencias externas; la consecuencia lógica de lo expuesto es que las garantías jurisdiccionales deben incluirse en las normas dictadas y entre ellas, las concernientes a la inamovilidad. Lo anteriormente expuesto también permite, en el caso de lagunas, interpretar el sistema creado en aras de fortalecer la independencia del Pr

AMPARO EN REVISION 2639

Judicial y de hacer efectivas las garantías judiciales. En otras palabras ante situaciones de hecho como la que se tiene que solucionar en el caso, lo ideal sería que el sistema legal aplicable, regulara con claridad todas las cuestiones que pudieran surgir, pero de no ocurrir ello, la interpretación de las normas existentes debe hacerse en forma tal que se integren, aún llenando lagunas, los principios contenidos en la Constitución Federal, establecidos con nitidez.

Adicionalmente a lo señalado, es preciso analizar en detalle cómo se debe dar cumplimiento a los imperativos previstos por el artículo 116, fracción III, párrafo quinto de la Constitución Federal y su correlativo de la Constitución del Estado de Michoacán. En el precepto de la Constitución Federal se habla de un plazo en que los magistrados durarán en su encargo y de su reelección agregando que los que obtengan esa calidad sólo podrán ser privados de sus puestos, en los términos que determinen las constituciones y las leyes de responsabilidad de los servidores públicos de los estados. Lo anterior impone la necesidad de determinar la finalidad y alcances que corresponden a esa figura de la reelección, cómo debe determinarse, si opera o no ésta y, los derechos que corresponden a quien ocupa ese cargo.

A propósito del término "reelección o ratificación", es oportuno referir, en lo conducente, lo razonado por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver las revisiones administrativas 7/96 y 8/96, interpuestas, respectivamente, por Amado



AMPARO EN REVISION 2639/96

Guerrero Alvarado y Jorge Trujillo Muñoz, falladas el día cuatro de febrero de mil novecientos noventa y siete, resoluciones en las que al interpretar lo previsto por el artículo 97, párrafo primero, del Pacto Federal, respecto a la ratificación de magistrados de Circuito y jueces de Distrito, se concluyó esencialmente lo siguiente:

"Reconocida entonces la referida facultad de designar
 "jueces y magistrados por el Constituyente de mil
 "novecientos diecisiete, se respetó, en iguales términos,
 "en las reformas que sufrió el precepto constitucional en
 "los decretos del veinte de agosto de mil novecientos
 "veintiocho y de once de septiembre de mil
 "novecientos cuarenta, y no fue sino hasta el de
 "diecinueve de febrero de mil novecientos cincuenta,
 "cuando se incluyó un término en la duración de los
 "cargos. En efecto, esa enmienda determinó que tales
 "funcionarios durarían en su encargo cuatro años y que
 "al término de los cuales, si fueran reelectos o
 "promovidos a cargos superiores, solo podrán ser
 "privados de sus puestos cuando observen mala
 "conducta, de acuerdo con la parte final del artículo
 "111, o previo al juicio de responsabilidad
 "correspondiente".

"En las subsecuentes reformas de seis de diciembre de

AMPARO EN REVISION 2639

"mil novecientos setenta y siete, de veintiocho de
"diciembre de mil novecientos ochenta y dos, de diez
"de agosto de mil novecientos ochenta y siete, y de
"treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa
"y cuatro, el Legislador no alteró sino el término de la
"duración y creó otro órgano dentro del Poder Judicial
"de la Federación al que le otorgó la facultad de
"formular la designación, pero no desapareció la
"condición de que para privar de sus cargos era
"necesaria la actualización de cierta hipótesis prevista
"en la propia norma, que debe determinarse mediante
"una acción que corresponde realizar al aludido
"órgano."

"Así es, al establecerse originalmente por el
"Constituyente y reconocerse en las subsecuentes
"reformas la aludida condición, es fácil advertir que el
"Legislador fue cuidadoso en prever que la reelección o
"ratificación se realizara y se realice mediante un acto
"administrativo. De no interpretarse de esa manera, y
"permitir que el aplicador de la norma tome en cuenta
"únicamente la terminación de un periodo, provocaría
"que se restringiera asimismo, la facultad que el
"Constituyente de mil novecientos diecisiete reconoció



AMPARO EN REVISION 2639/96

"a uno de los tres Poderes que integran la República,
 "pues considerar concluido el cargo por el sólo
 "transcurso del tiempo impediría que los funcionarios
 "aún considerados los más adecuados, continuaran en
 "el ejercicio de su encargo, restringiéndose con esa
 "medida la facultad de nombramiento de los jueces y
 "magistrados federales que tiene el Poder Judicial de la
 "Federación. Además, se chocaría con el sistema de
 "carrera judicial establecido en la Constitución Federal,
 "en el que una de sus características es la permanencia
 "de los funcionarios en los cargos como presupuesto de
 "una eficaz administración de justicia, así como de su
 "posible promoción."
 "El acto administrativo referido en el párrafo anterior, la
 "Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su
 "momento y al interpretar la voluntad del legislador, en
 "la práctica lo concretizó con la emisión de dictámenes
 "en los que reflejaba el examen valorativo de la
 "conducta personal y profesional de los funcionarios
 "que ocupaban los cargos.

"Por otra parte, el método sistemático, que pretende
 "investigar la costumbre para resolver conforme a ella el
 "caso dudoso, obliga a actuar con apoyo en la

CORTE DE
 JUSTICIA

AMPAPO EN REVISION 2639

" conclusiones derivadas de los anteriores métodos. Así
" es, la reforma que entró en vigor el primero de enero
" de mil novecientos noventa y cinco, provocó que la
" Suprema Corte de Justicia de la Nación ya no
" interviniera directamente en las designaciones, pues se
" consideró que no constituía una función propiamente
" jurisdiccional —que el propio Constituyente reservó
" como conocimiento exclusivo del Máximo Tribunal de
" la República—; y, por ende, determinó que el nuevo
" órgano denominado Consejo de la Judicatura Federal
" llevara a cabo las funciones de administración y
" vigilancia que anteriormente correspondían a la
" Suprema Corte. Por tanto, como la referida reforma —
" aparte de que no desapareció la multiplicada
" condición—, no estableció reglas distintas en
" procedimiento de ratificación, es fácil también concluir
" que las tareas que con anterioridad desempeñaba la
" Suprema Corte de Justicia de la Nación debe
" continuar realizándolas la institución creada con ese
" concreto fin.

" En esas condiciones, las tareas administrativas de la
" que se descargó a la Suprema Corte de Justicia de la
" Nación, obligan al referido órgano de administración a



AMPARO EN REVISION 2639/96

"elaborar los correspondientes dictámenes, según lo
 "consideró siempre el propio Tribunal Pleno al interpretar
 "el espíritu del Legislador, lo que se puede corroborar de
 "las actuaciones que se observan en los expedientes
 "personales de los funcionarios que, en su momento,
 "fueron confirmados o separados de sus cargos.

"Lo anterior se fortalece si se considera que uno de los
 "puntos de mayor relieve de las reformas
 "constitucionales relativas al Poder Judicial de la
 "Federación, fue el establecimiento de la carrera
 "judicial para garantizar que la sociedad, por un lado,
 "contara con magistrados y jueces idóneos y, por otro,
 "que a éstos, con objetividad, se les reconociera su
 "actuación, lográndose cuando se actuara con los
 "atributos requeridos, la seguridad y estabilidad en el
 "desempeño de sus cargos y la posibilidad de ser
 "promovidos a otros superiores.

"En referencia al método dialéctico, que sirve para
 "determinar el alcance de la norma tomando en
 "cuenta no sólo la costumbre sino el fin social que
 "persiguió al dictarla, conviene también aplicarlo
 "conjuntamente con el casual, que persigue la finalidad
 "de encontrar la verdad investigada, los fines políticos y

AMPARO EN REVISION 2639/5

"sociales, así como la naturaleza de su régimen.

"Al respecto, no hay duda que la elaboración de
"dictámenes constituye un objetivo que
"necesariamente debe cumplirse, pues es en él donde
"habrá de reflejarse el conocimiento cierto de la
"actuación ética y profesional de los funcionarios, que
"permitirá arribar a la conclusión de si continúan con la
"capacidad de desempeñar la difícil labor de juzgar o
"sus semejantes bajo los principios de independencia,
"responsabilidad y eficiencia. En efecto, es en el
"dictamen donde queda patentizado el examen
"cualitativo de quienes se han desempeñado como
"jueces y magistrados federales y sirve, como lo indicó
"la exposición de motivos que dio la pauta para
"modificar la estructura del Poder Judicial Federal, para
"garantizar la adecuada calificación de las personas
"que asuman la función jurisdiccional".

"Además, la emisión de ese dictamen es congruente
"con los objetivos políticos y sociales del régimen
"constitucional que la propia reforma, en su exposición
"de motivos, trazó como fin a alcanzar, pues lo "inscribe
"en la larga tradición nacional que ha buscado
"subordinar los actos del poder público a la



1048

AMPARO EN REVISION 2639/96

"Constitución y las Leyes", y permite que, conforme al "régimen constitucional, el interesado y la sociedad en "general estén en aptitud de conocer a ciencia cierta si "el procedimiento para ratificarlo es congruente o no "con la finalidad de "garantizar la adecuada "calificación de las personas que asuman la función "jurisdiccional".

"Finalmente, el método crítico, que parte de la letra de "la Ley y de la voluntad del Legislador para procurar la "verdad mediante la libre investigación por el juzgador, "queda subsumido en todas los anteriores "razonamientos, pues las consideraciones expuestas "toman en cuenta las condiciones económicas, sociales "y políticas que impuso el Constituyente al cumplir los "requerimientos de la sociedad en general; esto es, que "la función judicial se realice por personas probas e "independientes, toman en cuenta, además, las "condiciones particulares de los individuos que son "seleccionados para desempeñar las tareas "jurisdiccionales.

"Así, en los términos ya explicados, es fácil concluir que "el sólo transcurso del término de seis años, en que un "funcionario judicial se desempeña con el cargo ~

AMPARO EN REVISION 2639

"Magistrado de Circuito o Juez de Distrito, no impide
"que continúe en sus funciones ni sirve para que el
"Consejo de la Judicatura Federal le impida
"desempeñarse como tal, pues de lo dispuesto en el
"artículo 97 de la Constitución General de la República
"se deriva una obligación, consistente en la emisión de
"un dictamen con el que el órgano administrativo
"facultado para ello determina legalmente si procede o
"no ratificarlo en esos cargos."

""Para realizar la interpretación en los términos ya
"anotados sirven de fundamento los criterios expresados
"en la tesis que aparece publicada en la página 419,
"Tomo III, Segunda Parte, Octava Época, del
"Semanario Judicial de la Federación cuyo rubro y
"contenido son los siguientes: "INTERPRETACIÓN DE
"NORMAS CONSTITUCIONALES Y DE NORMAS LEGALES.
"SUS DIFERENCIAS. El exacto cumplimiento de la
"Constitución sólo puede lograrse si su intérprete,
"liberándose de las ataduras de quienes se encargan
"simplemente de aplicar los textos legales (expresión
"positivizada del Derecho), entiende que su función no
"se agota en la mera subsunción automática del,
"supuesto de hecho al texto normativo, ni tampoco



AMPARO EN REVISION 2639/96

"queda encerrada en un positivismo formalizado
"superado muchas décadas atrás, sino que comprende
"básicamente una labor de creación del Derecho en la
"búsqueda de la efectiva realización de los valores
"supremos de justicia. Es precisamente en el campo de
"las normas constitucionales, las ^A que difieren
"esencialmente de las restantes ^{que} conforman un
"sistema jurídico determinado, en razón no únicamente
"de su jerarquía suprema, sino de sus contenidos, los que
"se inspiran rigurosamente ^C en fenómenos sociales y
"políticos preexistentes de gran entidad para la
"conformación de la realidad jurídica en que se halla
"un pueblo determinado, que la jurisprudencia pasada
"la época del legalismo, se ha convertido en una fuente
"del Derecho que, aunque subordinada a la Ley que le
"otorga eficacia normativa, se remonta más allá de ella
"cuando el lenguaje utilizado por el Constituyente (al fin
"y al cabo una obra inacabada por naturaleza) exige
"una recreación por la vía de la interpretación, para el
"efecto de ajustarla a las exigencias impuestas por su
"conveniente aplicación. Así, el intérprete de la
"Constitución en el trance de aplicarla tiene por misión
"esencial magnificar los valores y principios immanentes

AMPARO EN REVISION 26.

"en la naturaleza de las instituciones, convirtiendo a la
"norma escrita en una expresión del Derecho vivo, el
"Derecho eficaz que resulta no sólo de la
"reconstrucción del pensamiento y voluntad que yace
"en el fondo de la Ley escrita (a través de los métodos
"clásicos de orden gramatical, lógico, histórico o
"sistemático), sino también de la búsqueda del fin que
"debe perseguir la norma para la consecución de los
"postulados fundamentales del Derecho".

"Igualmente sirve de fundamento el criterio publicado
"en la página 420, Tomo III, Segunda Parte, Octava
"Época, del Semanario Judicial de la Federación, que
"dice: "INTERPRETACIÓN GRAMATICAL DE LAS LEYES.
"DEBE REALIZARSE EN RELACIÓN CON EL MÉTODO
"SISTEMÁTICO. La interpretación gramatical o letrista de

"las Leyes es un método que si bien no debe proscríbese
"por el intérprete, sólo ha de aplicarse en relación con
"el método sistemático, según el cual el entendimiento
"y sentido de las normas debe determinarse en
"concordancia con el contexto al cual pertenecen,
"pues fraccionar el contexto (Capítulo, Título, Libro), de
"un ordenamiento jurídico para interpretar los artículos
"que lo configuran en forma aislada y literal, sólo trae

1050



AMPARO EN REVISION 2639/96

"como resultado, en muchos casos, la inaplicabilidad
"de unos en relación con otros, porque el Legislador al
"elaborar las leyes puede emplear la técnica de la
"llamada regla general y de los casos especiales y en
"estas condiciones al interpretar un artículo que
"contenga un caso especial en relación con la regla
"general, podría traer como consecuencia la
"inoperancia de la misma o viceversa".

"Del mismo modo, para realizar la interpretación
"constitucional se toma en cuenta el criterio
"jurisprudencial de este Tribunal Pleno, publicado en la
"página 22, Tomo II, Primera Parte, Octava Época, del
"Semanario Judicial de la Federación, que dice:
"INTERPRETACIÓN DE LA LEY. Los preceptos de un
"ordenamiento legal deben interpretarse
"principalmente en el sentido de que no se
"contradigan; y para lograrlo, a fin de establecer su
"verdadero sentido y alcance, deben ser interpretados
"en relación con los demás de la misma Ley,
"armónicamente".

En las indicadas resoluciones plenarias, también se dijo que:

"...en la confirmación de un Juez o Magistrado está de
"por medio el interés público con el exclusivo fin de

AMPARO EN REVISION 2536.

"establecer si en el desarrollo de su actuación judicial
"existieron las circunstancias destacadas, que no dieran
"lugar inclusive a imponer sanciones menores como el
"apercibimiento, la amonestación y la suspensión,
"aplicables a faltas leves y graves que no conducen a
"la remoción del cargo como lo constituye la no
"ratificación.

"De manera que sólo con la exposición de las
"circunstancias relacionadas se podría arribar a la
"conclusión de saber si el referido funcionario, bajo los
"principios de independencia, responsabilidad y
"eficiencia, puede o no continuar con la capacidad de
"desempeñar la labor de juzgador.

"Incluso, al quedar patentizado en esa actuación el
"examen cualitativo de quienes se han desempeñado

"como jueces y magistrados federales, ^{EUPR} ~~DES~~ ^{SECRET/6} sirve a éstos
"para estar en aptitud de conocer a ciencia cierta si el
"procedimiento para ratificarlo es congruente o no con
"la finalidad de "garantizar la adecuada calificación
"de las personas que asuman la función jurisdiccional".

"En esos términos, es fácil concretar que el Consejo de
"la Judicatura Federal no elaboró el dictamen que
"constitucionalmente ordena realizar el artículo 97 de la



AMPARO EN REVISION 2639/96

"Constitución Federal, vulnerándose, por consecuencia,
"la garantía de audiencia, que sólo puede cumplirse
"cabalmente cuando el afectado tiene oportunidad de
"invocar en su defensa todos los argumentos y razones
"que sean de su interés en contra de la resolución
"recurrida, así como de ofrecer y desahogar todas las
"pruebas que legalmente procedan, lo que permite dar
"seguridad al Juez o Magistrado recurrentes de que la
"decisión correspondiente será examinada con apego
"a derecho por los ~~dos~~ órganos máximos del Poder
"Judicial Federal, finalidad fundamental del
"establecimiento de este recurso administrativo."

La interpretación directa del artículo 97 de la Constitución Federal, en el punto referente a la reelección de jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación, que ya realizó esta Suprema Corte de Justicia en dos casos, es aplicable, en principio, a lo dispuesto por el artículo 116, fracción III del mismo Cuerpo Supremo de Leyes, en torno a la reelección de los magistrados de los Poderes Judiciales Locales, puesto que lo que se pretendió con el establecimiento de esa norma fue hacer extensivo a los más altos servidores del fuero común el mismo régimen de inamovilidad y de seguridad jurídica que nuestra evolución histórica ha determinado para el Poder Judicial Federal, con los matices propios que cada

AMPARO EN REVISION 231

entidad federativa le puede imprimir, pero sin faltar a los siguientes principios:

A). El término para el cual un Magistrado fue designado, no expira fatalmente por el solo transcurso del tiempo para el que fue designado.

B). La determinación de la reelección o no reelección de tales funcionarios debe realizarse mediante un acto administrativo, pues considerar concluido el cargo por el sólo transcurso del tiempo impediría que los funcionarios aún considerados los mas adecuados, continuaran en el ejercicio de su encargo.

C). Dicho acto administrativo debe concretarse en la emisión de dictámenes en los que se refleje el examen valorativo de la conducta personal y profesional de los funcionarios que ocupan los cargos. La elaboración de dictámenes constituye un objetivo que necesariamente debe cumplirse, pues es en él donde habrá de reflejarse el conocimiento cierto de la actuación ética y profesional de los funcionarios, que permitirá arribar a la conclusión de si continúan con la capacidad de desempeñar la difícil labor de juzgar a sus semejantes bajo los principios de independencia, responsabilidad y eficiencia.

En el caso, acorde a lo dispuesto por los artículos 60, fracción IV y 44, fracción XXI, de la Constitución del Estado de Michoacán, la designación de magistrados del Supremo Tribunal de Justicia de esa entidad federativa, según quedó apuntado



AMPARO EN REVISION 2639/96

anteriormente, consta de dos etapas interdependientes entre sí, la primera consistente en la propuesta que para ese efecto realice el Ejecutivo Local y, la segunda, la relativa a la respectiva aprobación por el Legislativo de la propia entidad federativa, procedimiento que, ante la ausencia de norma que regule tal aspecto, debe inferirse que debe seguirse también, en principio, para resolver sobre la reelección de dichos magistrados; sin embargo, la facultad constitucional que se atribuye a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Michoacán para la designación, reelección y, como contrapartida, la no reelección de magistrados no opera a su libre arbitrio, ni los excluye de la obligación de sujetarse a los lineamientos establecidos para el efecto por el artículo 116, fracción III, de la Constitución Federal y sus correlativos 67 y 72 de la Constitución de ese Estado. Conforme a la correcta interpretación de esos dispositivos y, asimismo, en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 16 del Pacto Federal, el Ejecutivo en su propuesta y la Legislatura al analizar aquélla deben emitir una resolución debidamente fundada y motivada en la que analizando si se satisfacen los lineamientos previstos por aquellos preceptos, tales como la eficiencia y probidad en el desempeño en la administración de justicia, la honorabilidad y competencia y antecedentes en las diversas ramas de la profesión jurídica, se resuelva sobre la reelección de los magistrados. Por las razones antes expuestas, son aplicables por analogía al presente caso las tesis LI/97 y L/97, publicadas en el tomo V-marzo de la

AMPARO EN REVISION :

Novena Epoca del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
visibles a fojas 254 y 253, respectivamente, que dicen:

"RATIFICACIÓN DE MAGISTRADOS DE CIRCUITO Y
"JUECES DE DISTRITO. CONSTITUYE UN ACTO
"ADMINISTRATIVO DE ORDEN PÚBLICO. De lo dispuesto
"en el artículo 97 de la Constitución Política de los
"Estados Unidos Mexicanos, se deriva una obligación
"impuesta al Consejo de la Judicatura Federal para
"que, de manera fundada y motivada, determine
"legalmente si procede, o no, ratificar a los jueces de
"Distrito y magistrados de Circuito. En efecto, el hecho
"de que el Poder Revisor de la Constitución haya
"establecido la figura de la ratificación en el
"mencionado dispositivo constitucional implica el
"establecimiento de un dispositivo de orden público
"que, además, se justifica porque la sociedad está
"interesada en conocer a ciencia cierta, por conducto
"del órgano de administración, la actuación ética y
"profesional de los funcionarios e impedir, en el caso de
"causa graves probadas que así lo justifiquen, el que
"continúen en la función jurisdiccional."

"RATIFICACION DE MAGISTRADOS DE CIRCUITO Y



AMPARO EN REVISION 2639/96

"JUECES DE DISTRITO. CONSTITUYE UN ACTO
"ADMINISTRATIVO DE EVALUACIÓN QUE
"CONSTITUCIONALMENTE SE ENCOMENDÓ AL CONSEJO
"DE LA JUDICATURA FEDERAL. El Decreto del treinta y
"uno de diciembre de mil novecientos noventa y
"cuatro, que reformó la Constitución Política de los
"Estados Unidos Mexicanos, implica que la Suprema
"Corte de Justicia de la Nación ya no intervenga
"directamente en las ratificaciones ni en las
"promociones de jueces de Distrito y magistrados de
"Circuito, pues se creó el Consejo de la Judicatura
"Federal como nuevo órgano del Poder Judicial de la
"Federación, al que le encomendaron las tareas de
"administración, de vigilancia y de disciplina de dicho
"Poder, con excepción de la Suprema Corte de Justicia,
"ya que a ésta se le reservó el conocimiento exclusivo
"de las cuestiones propiamente jurisdiccionales. Por
"tanto, como la referida reforma no estableció reglas
"distintas en el procedimiento de ratificación, las tareas
"administrativas que con anterioridad desempeñaba el
"Tribunal Pleno debe continuar realizándolas la
"institución creada con ese concreto fin y, por ende, en
"acatamiento a la referida reforma constitucional, el

AMPARO EN REVISION

"mencionado órgano de administración está obligado
"a elaborar los dictámenes que emitía el Tribunal Pleno,
"pues es ahí donde se refleja el conocimiento cierto de
"la actuación ética y profesional de los funcionarios y
"permite arribar a la conclusión de saber si continúan
"con la capacidad de llevar a cabo las tareas
"jurisdiccionales bajo los principios de independencia,
"responsabilidad y eficiencia. Además, sirve para
"garantizar la adecuada calificación de las personas
"que asuman la función jurisdiccional" y se "inscribe en
"la larga tradición nacional que ha buscado subordinar
"los actos del poder público a la Constitución y a las
"leyes".

Por lo que toca al caso concreto cabe inferir de la
interpretación genético-teleológica del artículo 116, fracción III de la
Constitución General de la República que, como lo pretende el
quejoso, cuando un Magistrado desempeña el cargo por el período
para el que fue designado y continúa en el mismo por los años
necesarios para alcanzar su inamovilidad, tanto por no haberse
emitido dictamen de no ratificación, como por no haberse designado
nuevo Magistrado, debe concluirse que no sólo fue ratificado
tácitamente, sino que alcanzó la prerrogativa prevista tanto por la
Constitución Local como por la Federal. En efecto, si bien antes de

**AMPARO EN REVISION 2639/96**

concluir el período por el que fue nombrado un Magistrado, conforme a la lógica del sistema, debe emitirse un dictamen en el que, como se precisó, se funde y motive la decisión por la que se le ratifica o reelige o por las que se decide en sentido adverso, ante la ausencia de dicho acto administrativo, de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, como aconteció en la especie, debe entenderse, que el Magistrado continua en el puesto, sin oposición de los otros dos Poderes, éste ha sido reelecto tácitamente. La anterior conclusión se sustenta, en que para garantizar la independencia de un Magistrado, su permanencia en el cargo no puede quedar al arbitrio de la voluntad del Gobernador en turno el que, como se precisó, tiene la facultad de proponer a la Legislatura Local el dictamen de no ratificación y el nombramiento de un nuevo Magistrado que lo sustituya, lo que implicaría que de no ejercer esa atribución en el plazo relativo al tiempo por el que fue designado un Magistrado, pudiera, en forma latente, estar ante la posibilidad de llegar a ejercerla en cualquier momento con lo que se tendría el Magistrado, que estaría obligado a continuar desempeñando su cargo, en una situación de inseguridad que lo haría fácilmente vulnerable, en especial frente al funcionario del que dependería que continuara en su función o fuera removido. También puede deducirse de los argumentos expuestos que sólo podrá hacerse una nueva designación cuando, previamente, el Gobernador haya presentado al Congreso el dictamen de no ratificación del Magistrado anterior. En el caso, no sólo no se dieron esos hechos, sino que el Magistrado

AMPARO EN REVISION 263975

continuó en su cargo por más de dos periodos adicionales a aquél para el que fue designado, por lo que se impone la conclusión expuesta de que su ratificación fue tácita y que, conforme a las Constituciones Federal y Local adquirió la calidad de inamovible.

Aceptar que la actuación del Ejecutivo y del Congreso Local se ajustó al artículo 116 de la Constitución Federal al designar a un nuevo magistrado en lugar del ahora quejoso, significaría vulnerar la independencia del Poder Judicial, no sólo al desconocer la inamovilidad que ya había alcanzado el Magistrado Fernando Arreola Vega, sino al legitimar implícitamente un sistema que claramente vulneraría la independencia referida y, por ello, violar el precepto constitucional citado. En efecto, a través de ese mecanismo de mantener a un Magistrado en la situación relatada de no reelegirlo expresamente y no nombrar otro magistrado que lo sustituya, al estar obligado a continuar en el desempeño del cargo quedaría necesariamente, en una situación de incertidumbre respecto de la estabilidad en su puesto, lo que disminuiría o aniquilaría su independencia en relación con los integrantes de los otros Poderes, de quienes dependería su situación. Ello resultaría especialmente grave pues dentro de la misma lógica podría hacerse con algunos e, incluso, con todos los magistrados integrantes del Tribunal, con lo que se vulneraría seriamente la independencia y autonomía que garantiza el artículo 116, fracción III de la Constitución. Por otro lado, ese proceder atentaría contra la carrera judicial que tiende a garantizar la



AMPARO EN REVISION 2639/96

administración pronta, completa e imparcial que establece el artículo 17 de la Constitución y que tiene como uno de sus pilares al funcionario judicial que en la permanencia en su cargo logra la excelencia profesional en su desempeño.

Debe rechazarse, en consecuencia, por violatoria del artículo 116 de la Constitución Federal la interpretación de los artículos 80, 60, fracción IV y 44, fracción XXI de la Constitución Política del Estado de Michoacán, que dio lugar a los actos reclamados en el juicio al que se refiere esta revisión, pues se correría el riesgo de que a través de ese procedimiento, los magistrados del Poder Judicial desempeñaran sus servicios hasta que, discrecionalmente y en el momento que lo estimara oportuno el Gobernador de la Entidad sometiera a la consideración de la Legislatura la propuesta de un nuevo Magistrado, de tal suerte que, desde esa óptica, la inamovilidad como garantía jurisdiccional quedaría anulada.

La conclusión antes expuesta también se ve soportada por la aplicación del principio jurídico de la seguridad jurídica, ya que la condición de un Magistrado, que desempeñó su cargo por el tiempo requerido por la Constitución Local para ser inamovible, sin dictamen adverso y sin designación de un Magistrado que lo sustituyera con anterioridad a que se diera ese supuesto, debe llevar a la conclusión establecida de que adquirió por el transcurso del tiempo y las situaciones descritas, la inamovilidad; pues de lo contrario, la misma se dejaría en manos de los otros poderes.

AMPARO EN REVISION 2639

La interpretación del artículo 116, fracción III, como ha quedado asentado, debe realizarse tomando en cuenta que debe salvaguardarse en todo caso la independencia del Poder Judicial y la inamovilidad como un mecanismo para llevarla a cabo. Esto quiere decir que de modo general debe interpretarse que así, antes de concluir el período por el que fue nombrado un Magistrado debe emitirse un dictamen en los términos precisados para reelegirlo o para nombrar en su lugar otro Magistrado y, cuando ello no se haga, debe entenderse que el Magistrado ha sido reelecto y, en los términos del artículo 72 de la Constitución Michoacana, de llegar a completar el tiempo necesario, en igual situación, adquiere la calidad de inamovible. De esta forma, resultan fundados los agravios del quejoso, ya que cuando se nombró al nuevo Magistrado él ya tenía la calidad de inamovible y para privarlo de esa condición solo podría haberse hecho conforme al procedimiento descrito en el Título Cuarto de la Constitución de Michoacán de Ocampo y la Ley de Responsabilidades, lo que no aconteció. Consecuentemente debe concluirse que se violaron en su perjuicio las garantías de audiencia y legalidad consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, por lo que se otorga el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso.

No es óbice a lo sostenido precedentemente el contenido de la tesis XLIX/97 del Tribunal Pleno, publicada en el tomo V-marzo de 1997 de la Novena Epoca del Semanario Judicial de la Federación y



AMPARO EN REVISION 2639/96

su Gaceta, visible a fojas 137 que establece:

"MAGISTRADOS DE CIRCUITO Y JUECES DE DISTRITO. EL
"TRANSCURSO DEL PERIODO QUE ESTABLECE EL
"ARTICULO 97 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS
"ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NO FACULTA AL
"CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA IMPEDIR
"QUE CONTINUEN EN SUS FUNCIONES, A MENOS QUE ASI
"LO DETERMINE EN UNA RESOLUCION QUE, DE MANERA
"FUNDADA Y MOTIVADA, NIEGUE LA RATIFICACION. EI
"artículo 97 de la Constitución Política de los Estados
"Unidos Mexicanos establece que los jueces de Distrito
"y los magistrados de Circuito "durarán seis años en el
"ejercicio de su encargo, al término de los cuales si
"fueran ratificados o promovidos a cargos superiores,
"sólo podrán ser privados de sus puestos en los casos y
"de acuerdo a los procedimientos que establezca la
"Ley". En consecuencia, cuando un Magistrado de
"Circuito o Juez de Distrito concluye el periodo de seis
"años en su ejercicio, debe determinarse a través de un
"acto administrativo de evaluación de la conducta y
"funcionamiento del interesado, si debe ratificársele o
"no, pues de no llevarse a cabo esa calificación no
"puede válidamente ordenarse la remoción. De

AMPARO EN REVISION 2639,9

"interpretarse en otro sentido permitiría que se
"restringiera la facultad que el Constituyente de mil
"novecientos diecisiete reconoció al Poder Judicial de
"la Federación, para nombrar a sus funcionarios y
"chocaría con el sistema de carrera judicial, en el que
"una de sus características es la permanencia de los
"funcionarios en los cargos como presupuesto de una
"eficaz administración de justicia, así como de si
"posible promoción. En esas condiciones, en tanto no se
"lleve a efecto el mencionado acto administrativo de
"evaluación, el Consejo de la Judicatura Federal no
"está facultado para impedir que jueces y magistrados
"continúen en el ejercicio de sus funciones invocando,
"exclusivamente el vencimiento del periodo de seis
"años."

El criterio anteriormente reproducido no es aplicable en la especie, ya que como ha quedado asentado precedentemente, en el caso de Michoacán en el nombramiento y reelección de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia concurren tanto el Gobernador del Estado como la Legislatura Local, por lo que de aceptarse el criterio que informa la tesis insertada, como se señaló, la reelección de los magistrados quedaría al arbitrio del Gobernador del Estado, para que cuando él lo decidiera formulara la propuesta



AMPARO EN REVISION 2639/96

correspondiente a la Legislatura, lo que evidentemente menoscaba la independencia del Poder Judicial de la entidad, por lo que la interpretación jurídica de la fracción III del artículo 116 del Código Político permite, como lo pretende el quejoso, la reelección tácita, si con anterioridad al vencimiento del término por el que fue designado el Magistrado no se emite el dictamen respectivo o se nombra, al vencimiento, uno nuevo, ya que la tesis reproducida parte de que el nombramiento y remoción de jueces y magistrados federales es una cuestión propia del Poder Judicial de la Federación como una cuestión de orden interno y que se ejerce a través del Consejo de la Judicatura Federal, sin involucrar a otro Poder Federal.

Así las cosas, lo procedente es modificar la sentencia recurrida, sobreseer en el juicio respecto del acto que se reclama del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Michoacán, y conceder al quejoso el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra de los actos que se reclaman del Gobernador y Sexagésima Séptima Legislatura, ambos del Estado mencionado, para el efecto de que tales autoridades dejen insubsistente, por lo que ve al quejoso, el procedimiento para la designación de nuevos magistrados y la determinación recaída al mismo; se reinstale a dicho quejoso en el puesto de Magistrado que venía desempeñando, con el pago de las percepciones inherentes a tal cargo desde la fecha en que fue separado, reconociéndole el carácter de Magistrado inamovible del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán. Lo anterior no

AMPARO EN REVISIÓN

puede implicar que las resoluciones dictadas por el Licenciado Felipe Rojas López como Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia de Michoacán no sean válidas, por lo que en los términos de las leyes aplicables éstas tendrán plena vigencia, ni tampoco que se le exija el reintegro de las remuneraciones percibidas, en tanto que desempeñó su función con base en una designación y en una adscripción que produjo todos sus efectos, respecto de las partes que concurrieron en los juicios que culminaron con resoluciones en las que participó quien por una interpretación equivocada de las Constituciones Federal y Local fungió como Magistrado en el cargo que correspondía haber seguido desempeñando a Fernando Arreola Vega, en su carácter de Magistrado inamovible.

Por lo expuesto y fundado se resuelve:

PRIMERO. Se modifica la sentencia recurrida.

SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de garantías respecto al acto que se reclama del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, acto que precisado quedó en el resultando primero de esta ejecutoria.

TERCERO. En los términos y para los efectos precisados en el considerando último de esta ejecutoria, la Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE a Fernando Arreola Vega, en contra de los actos del Gobernador y Sexagésima Séptima Legislatura, ambos de la entidad federativa mencionada, precisados en el resultando primero de esta resolución.



AMPARO EN REVISION 2639/96

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos al Juzgado de su origen y, en su oportunidad, archívese el toca como asunto concluido.

Así lo resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno, por unanimidad de nueve votos se aprobaron los resolutivos primero y segundo; por unanimidad de nueve votos se aprobó el resolutivo tercero, para conceder el amparo al quejoso; por mayoría de siete votos de los señores Ministros Aguirre Anguiano, Azuela Güitrón, Díaz Romero, Góngora Pimentel, Sánchez Cordero, Silva Meza y Presidente Aguinaco Alemán, y dos en contra de los señores Ministros Gudiño Pelayo y Ortiz Mayagoitia, se aprobaron los efectos de la concesión, y por mayoría de ocho votos de los señores Ministros Aguirre Anguiano, Azuela Güitrón, Góngora Pimentel, Gudiño Pelayo, Ortiz Mayagoitia, Sánchez Cordero, Silva Meza y Presidente Aguinaco Alemán, y uno en contra del señor Ministro Díaz Romero, se aprobaron las consideraciones relativas a la propia concesión, los señores Ministros Gudiño Pelayo y Ortiz Mayagoitia manifestaron que formularán voto de minoría y el señor Ministro Díaz Romero manifestó que formulará voto particular.

A sugerencia de los señores Ministros Díaz Romero, Góngora Pimentel, Sánchez Cordero, Silva Meza y Presidente Aguinaco Alemán, se acordó que las consideraciones se publiquen en el Semanario Judicial de la Federación.

AMPARO EN REVISION 2639

A sugerencia de los señores Ministros Silva Meza y Presidente Aguinaco Alemán se acordó que se elaboren las tesis correspondientes.

No asistieron los señores Ministros Juventino V. Castro y Castro y Humberto Román Palacios, por licencia concedida. Fue ponente el señor Ministro Mariano Azuela Güitrón. Firman los CC. Presidente y Ministro Ponente, con el Secretario General de Acuerdos que da fe.

EL PRESIDENTE:


JOSE VICENTE AGUINACO ALEMAN.

EL MINISTRO PONENTE:


MARIANO AZUELA GUITRON.

EL SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS:


LIC. JOSE JAVIER AGUILAR DOMINGUEZ.

AARC/rmaa.

18 FEB. 1998

por lista de la misma fecha se notificó la resolución anterior a los interesados. Conste

SIENDO LAS CATORCE HORAS DE LA FECHA ANTES INDICADA, Y EN VIRTUD DE NO HABER COMPARECIDO LOS INTERESADOS A OIR NOTIFICACIONES SE TIENE POR HECHA DICHA NOTIFICACION, POR MEDIO DE LISTA. DOY FE

b8

RECIBIDO DE LA SECRETARIA GEN

PARA NOTIFICACION EL

17 FEB 1998

SUPR
JESTIC
SECRETARIA



1059

**V O T O MINORITARIO QUE FORMULAN LOS
MINISTROS: JOSE DE JESUS GUDIÑO PELAYO Y
GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA, EN EL A. EN R. NUMERO
2639/96, PROMOVIDO POR FERNANDO ARREOLA VEGA EN
CONTRA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN Y
OTRAS AUTORIDADES.**

Disentimos del criterio de la mayoría en cuanto a la interpretación que se da a los artículos 116, fracción III, de la Constitución Federal y 72, párrafo primero de la Constitución del Estado de Michoacán y, por consiguiente, en cuanto a la consideración de que en el caso operó la ratificación tácita del quejoso en el cargo que venía desempeñando como Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la citada entidad federativa, por lo que de conformidad con lo previsto por el artículo 7º, cuarto párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación formulamos voto de minoría, para lo cual exponemos las siguientes consideraciones.

Convenimos con el sentir de la mayoría respecto a la intención del Constituyente de salvaguardar la independencia de los Poderes Judiciales Locales, así como en que para lograr tal fin es de singular importancia garantizar la inamovilidad de sus titulares en el cargo, de ahí que estimemos innecesario referirnos de nueva cuenta a tales temas que de manera exhaustiva se tratan en la resolución aprobada por la mayoría.

Sin embargo, consideramos que para dilucidar la cuestión jurídica planteada en el caso, respecto a la forma en que debe operar la reelección o ratificación de los funcionarios judiciales en su encargo, reviste gran importancia tomar en cuenta la finalidad que el Constituyente persiguió al establecer dicha reelección o ratificación como condición para acceder a la inamovilidad.



Así, como incluso se manifiesta a fojas 232 de la sentencia, la inamovilidad no debe verse como un privilegio otorgado a un grupo de individuos, sino



como un mecanismo, a través del cual el orden jurídico pretende garantizar la independencia de los poderes judiciales para que se encuentren libres de interferencias y puedan realizar una justicia pronta, completa e imparcial. De esta forma, es claro QUE LOS GOBERNADOS SON LOS PRIMEROS INTERESADOS EN SALVAGUARDAR LA INDEPENDENCIA DE SUS TRIBUNALES, los cuales deberán estar expeditos para administrar justicia.

En la propia sentencia (fojas 247 y 248), se acepta que la decisión sobre la reelección o ratificación de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Michoacán debe realizarse a través de un acto administrativo y que "Dicho acto administrativo se debe concretar en la emisión de dictámenes en los que se refleje el examen valorativo de la conducta personal y profesional de los funcionarios que ocupan los cargos. La elaboración de los dictámenes constituye un objetivo que necesariamente debe cumplirse, pues es en él donde habrá de reflejarse el conocimiento cierto de la actuación ética y profesional de los funcionarios, que permitirá arribar a la conclusión de si continúan con la capacidad de desempeñar la difícil labor de juzgar a sus semejantes bajo los principios de independencia, responsabilidad y eficiencia."

En otras palabras, en la confirmación de un Magistrado está de por medio el interés público, con el exclusivo fin de establecer si en el desarrollo de su actuación judicial existieron las circunstancias destacadas, que no dieran lugar inclusive a imponer sanciones menores como el apercibimiento, la amonestación y la suspensión, aplicables a faltas leves y graves que no conducen a la remoción del cargo como lo constituye la no reelección o no ratificación.

101

De manera que sólo con la exposición de las circunstancias relacionadas se podría arribar a la conclusión de saber si el referido funcionario, bajo los principios de independencia, responsabilidad y eficiencia, puede o no continuar con la capacidad de desempeñar la labor de juzgador.

Incluso, al quedar patentizado en esa actuación el examen cualitativo de quienes se han desempeñado como magistrados, les sirve a éstos para estar en aptitud de conocer a ciencia cierta si el procedimiento para ratificarlo es congruente o no con la finalidad de "garantizar la adecuada calificación de las personas que ~~asuman~~ la función jurisdiccional".

Siguiendo lo anteriormente expuesto, la garantía de la inamovilidad para los titulares del Poder Judicial se traduce en una garantía social de "buena justicia" para los gobernados y, para obtener la primera, el Constituyente estableció como requisito fundamental la figura de la ratificación o reelección, requisito que no resulta ser una mera formalidad o capricho, sino el medio que aquél consideró idóneo e inexcusable para analizar, calificar y asegurar que las personas encargadas de la administración de justicia satisfacen los requisitos necesarios para seguir desempeñando el cargo de manera eficaz, imparcial, honrada, etcétera, y, como consecuencia de ello, procurar el respeto a la garantía de buena justicia que les asiste a los gobernados.



En este orden de ideas, consideramos que la ratificación o reelección no opera de manera tácita por el sólo transcurso del tiempo, ya que ello desvirtúa la ya apuntada finalidad de aquéllas que lo es el examen valorativo de la conducta personal y profesional de las personas que ocupan los cargos y, así, garantizar en beneficio de la sociedad la adecuada calificación de las personas que asuman la labor jurisdiccional.

Cierto es que ni en la Constitución del Estado de Michoacán ni en las leyes que la reglamentan se establece el término, el mecanismo, ni cómo debe resolverse sobre la reelección o no reelección de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de ese Estado, existiendo una laguna que dio lugar a que se presentara la situación de hecho origen de esta controversia, mas esta circunstancia no autoriza a colmar esa laguna contrariando una disposición expresa del Constituyente y la finalidad que éste persiguió con aquélla, esto es, la reelección o ratificación materializada en un dictamen que refleje el examen valorativo de la conducta personal y profesional de quien tiene a su cargo la administración de justicia, y así determinar si reúne las condiciones necesarias para continuar desempeñado el cargo con la capacidad, imparcialidad y probidad debidas en



respeto a la garantía social de buena justicia.

Apuntado lo anterior, sólo resta reproducir las consideraciones que, a manera de conclusión, sirvieron de base al proyecto de resolución presentado por el suscrito Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, desechado en la sesión Plenaria de fecha veinticinco de noviembre de mil novecientos noventa y siete, que contienen los razonamientos, que a nuestro juicio, deben sustentar el sentido y alcances de la resolución, y que son del tenor literal siguiente:

La interpretación directa del artículo 97 de la Constitución Federal, en el punto referente a la reelección de Jueces y Magistrados del Poder Judicial de la Federación, que ya realizó esta Suprema Corte de Justicia en dos casos, es aplicable a lo dispuesto por el artículo 116, fracción III del mismo Cuerpo Supremo de Leyes, en torno a la reelección de los Magistrados de los Poderes Judiciales Locales, puesto que lo que se pretendió con el establecimiento de esa norma fue hacer extensivo a los más altos servidores del fuero común el mismo régimen de inamovilidad y de seguridad jurídica que nuestra evolución histórica ha determinado para el Poder Judicial Federal, con los matices propios que cada entidad federativa le puede imprimir, pero sin faltar a los siguientes principios:

a).- El término para el cual un Magistrado fue designado, no expira fatalmente por el solo transcurso

SECRETARIA DE JUSTICIA Y FISCALIA
SUPLENTE DE SECRETARIO DE JUSTICIA Y FISCALIA

del tiempo para el que fue designado.

b).- La determinación de la reelección o no reelección de tales funcionarios debe realizarse mediante un acto administrativo, pues considerar concluido el cargo por el sólo transcurso del tiempo impediría que los funcionarios aún considerados los más adecuados, continuaran en el ejercicio de su encargo.

c).- Dicho acto administrativo debe concretarse con la emisión de dictámenes en los que se refleje el examen valorativo de la conducta personal y profesional de los funcionarios que ocupan los cargos. La elaboración de dictámenes constituye un objetivo que necesariamente debe cumplirse, pues es en él donde habrá de reflejarse el conocimiento cierto de la actuación ética y profesional de los funcionarios, que permitirá arribar a la conclusión de si continúan con la capacidad de desempeñar la difícil labor de juzgar a sus semejantes bajo los principios de independencia, responsabilidad y eficiencia.

En el caso, acorde a lo dispuesto por los artículos 60, fracción IV y 44, fracción XXI, de la Constitución del Estado de Michoacán, la designación de Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia de esa entidad federativa, según quedó apuntado anteriormente, consta de dos etapas interdependientes entre sí, la primera consistente en la propuesta que para ese efecto realice el Ejecutivo Local y, la segunda, relativa a la respectiva aprobación por el Legislativo de la propia entidad federativa,



procedimiento que, ante la ausencia de norma que regule tal aspecto, debemos asumir se sigue también para resolver sobre la reelección de dichos magistrados.

Sin embargo, la facultad constitucional que se atribuye a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Michoacán para la designación, reelección o, como contrapartida, la no reelección de Magistrados, no opera a su libre arbitrio ni los excluye de la obligación de sujetarse a los lineamientos establecidos para el efecto por el artículo 116, fracción III, de la Constitución Federal y sus correlativos 67 y 72 de la Constitución de ese Estado, conforme a su correcta interpretación y, asimismo, en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 16 del Pacto Federal, el Ejecutivo, en su propuesta, y la Legislatura, al analizar aquélla, deben emitir una resolución debidamente fundada y motivada en la que analizando si se satisfacen los lineamientos previstos por aquellos preceptos, tales como la eficiencia y probidad en el desempeño en la administración de justicia, la honorabilidad y competencia y antecedentes en las diversas ramas de la profesión jurídica, se resuelva sobre la reelección.

Atendiendo a los principios apuntados con anterioridad, es infundado lo que alega el quejoso en sus agravios, en el sentido de que su reelección al cargo de Magistrado operó de manera tácita por su sola permanencia en aquél por más de tres períodos constitucionales, ya que como bien lo consideró el a quo, dicha reelección de Magistrados no opera en

forma tácita, sino que es necesaria la emisión de un acto formal, administrativo, que atendiendo a los lineamientos constitucionales resuelva sobre el particular.

En cambio, es fundado lo alegado por el quejoso en sus agravios, en cuanto considera que la determinación sobre la designación de los nuevos Magistrados y, por ende, su no reelección, no se determinó mediante una resolución debidamente fundada y motivada, extremos que, en contra de lo considerado por el a quo, no se satisfacen con la simple propuesta del Ejecutivo y la aprobación mayoritaria de la misma por el Legislativo Local, como en la especie ocurrió.

En efecto, la correcta interpretación de los artículos 116, fracción III, de la Constitución Federal y sus correlativos 67 y 72 de la Constitución del Estado de Michoacán, nos llevan a concluir que el término el cual un Magistrado fue designado, no expira fatalmente por el solo transcurso del tiempo para el que fue designado, sino que la determinación de la reelección o no reelección de tales funcionarios debe realizarse mediante un acto administrativo, pues considerar concluido el cargo por el sólo transcurso del tiempo impediría que los funcionarios, aún considerados los más adecuados, continuaran en el ejercicio de su encargo; por tanto, el acto administrativo en el que se proponga la reelección de



SUPREMA
JUSTITIA
SECRETARIA

un Magistrado, se debe concretar con la emisión de dictámenes en los que se refleje el examen valorativo de la conducta personal y profesional de los funcionarios que ocupan los cargos, extremos que de autos no aparecen satisfechos en la especie, ya que de la constancia que obra a fojas 289 del expediente del amparo, sólo se desprende, por una parte, que mediante escrito de fecha diecinueve de febrero de mil novecientos noventa y seis, dirigido al Congreso del Estado de Michoacán, el Gobernador del mismo realizó su **"propuesta a efecto de que se designen a 10 diez nuevos Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado"**, señalando en el punto tres de ese escrito que: **"Mi propuesta a favor del Abogado Felipe Rojas López, a efecto de substituir al Abogado Fernando Arreola Vega como Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia"**, agregándose finalmente en dicho escrito que: **"Anexo a esta propuesta encontrarán, los miembros de ese Cuerpo Colegiado, los documentos suficientes que acreditan el que todos y cada uno de los propuestos cumplen con los requisitos que exige el artículo 71 de nuestra Constitución Estatal para ser electos Magistrados Propietarios del Supremo Tribunal de Justicia del Estado."**

Por otra parte, de la constancia que obra a fojas 198 del propio expediente de amparo, relativa al acta levantada con motivo de la sesión celebrada el



día veintidós de febrero de mil novecientos noventa y seis por la Sexagésima Séptima Legislatura del Estado de Michoacán, sólo aparece, en lo que ahora interesa, que se dio lectura a la propuesta de referencia, que tomaron la palabra tres diputados para hacer comentarios y que fue aprobada por mayoría.

De lo anterior se sigue que no se dio cumplimiento a los imperativos contenidos en los preceptos constitucionales que regulan la materia que se trata, pues de la conducta desplegada por las autoridades responsables sólo se desprende, en el caso, que se hizo una propuesta para la designación de nuevos magistrados y que se analizó la viabilidad de los propuestos para ocupar esos cargos, pero en modo alguno se emitió resolución o dictamen respecto a la situación del quejoso, que fundada y motivadamente determinase su no reelección; dictamen que necesariamente debe emitirse, pues es en él donde habrá de reflejarse el conocimiento cierto de la actuación ética y profesional del funcionario, que permitirá arribar a la conclusión de si continúa con la capacidad de desempeñar la difícil labor de juzgar a sus semejantes bajo los principios de independencia, responsabilidad y eficiencia.

Así las cosas, lo procedente es modificar la sentencia recurrida, sobreseer en el juicio respecto al acto que se reclama del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Michoacán, y conceder al quejoso el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra de los actos que se reclaman del



V O T O MINORITARIO QUE FORMULAN LOS MINISTROS: JOSE DE JESUS GUDIÑO PELAYO Y GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA, EN EL EN R. NUMERO 2639/96, PROMOVIDO POR FERNANDO ARREOLA VEGA EN CONTRA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN Y OTRAS AUTORIDADES.

Gobernador y Sexagésima Séptima Legislatura, ambos del Estado mencionado, para el efecto de que tales autoridades dejen insubsistente, por lo que ve al quejoso, el procedimiento para la designación de nuevos Magistrados y la determinación recaída al mismo, se reinstale a dicho quejoso en el puesto de Magistrado que venía desempeñando, con el pago de las percepciones inherentes a tal cargo desde la fecha en que fue separado y, hecho que sea así, el Gobernador del Estado formule dictamen, debidamente fundado y motivado, en que proponga su reelección o no reelección como Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, y el Congreso del Estado resuelva lo que corresponda con libertad de criterio.

MEXICO, D.F., A 27 DE ENERO DE 1998.

MINISTRO JOSE DE JESUS GUDIÑO PELAYO

MINISTRO GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA



VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL MINISTRO JUAN DIAZ ROMERO EN EL AMPARO EN REVISION 2639/96, PROMOVIDO POR FERNANDO ARREOLA VEGA.

En lo fundamental, difiero, tanto del voto mayoritario como del minoritario suscrito por los señores Ministros Ortiz Mayagoitia y Gudiño Pelayo, en que ambas posiciones asimilan de manera absoluta -hasta el grado de confundirlos- el sistema de nombramiento y ratificación de jueces de distrito y magistrados de circuito que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el ámbito federal, con el sistema de aprobación y reelección de magistrados locales que estatuye la Constitución del Estado de Michoacán de modo autónomo, dentro de los principios que le demarca la fracción III del artículo 116 de nuestra Carta Magna.

En efecto, el mencionado sistema federal, regido fundamentalmente por los artículos 94 a 107 constitucionales, tratándose de jueces y magistrados, establece que su nombramiento queda bajo la

RECEIVED
JUL 10 1964
U.S. DEPT. OF JUSTICE
SECRETARY'S OFFICE

responsabilidad de un órgano integrante del propio Poder Judicial Federal, que es el Consejo de la Judicatura Federal; que los nombrados durarán seis años en el ejercicio de su cargo, al término de los cuales, si son ratificados por dicho Consejo, sólo serán privados de su puesto en los casos señalados en las leyes.

Como de acuerdo con el artículo 100, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal, las determinaciones del Consejo de la Judicatura Federal sobre la no ratificación de jueces y magistrados son impugnables ante el Pleno de la Suprema Corte, según interpretación jurisprudencial, es de todo punto necesario que, en cada caso, exista un dictamen que funde y motive la determinación tomada, porque de lo contrario tendría que reponerse el procedimiento.

El sistema de aprobación y reelección de magistrados locales que establece la Constitución de

RECEIVED
JAN 10 1964
FBI - NEW YORK

Michoacán es diferente, aunque también resguarda la independencia y autonomía del Poder Judicial, siguiendo las bases asentadas en la fracción III del artículo 116 de la Constitución Federal, pero acorde con el régimen específico que adopta siguiendo la regla del primer párrafo de la fracción aludida, que señala: "El Poder Judicial de los Estados se ejercerá por los tribunales que establezcan las Constituciones respectivas".

La Constitución de Michoacán no da la facultad de nombramiento y ratificación de Magistrados a un consejo de la judicatura, ni establece ningún recurso en contra de tales determinaciones, sino que instituye un procedimiento en que intervienen los otros dos Poderes - Ejecutivo y Legislativo-, mediante un acto complejo en que el Gobernador somete a la consideración del Congreso las propuestas de magistrados, y la Legislatura aprueba o desaprueba la proposición (artículos 60, fracción IV, y 44, fracción XXI).

ESTADOS UNIDOS
DE AMERICA
SUPLENTE
DE LA
SECRETARIA

Lo anterior no significa que en la aprobación o reelección estén prohibidos los estudios, deliberaciones y debates sobre la personalidad, antecedentes, honorabilidad y méritos de los candidatos. Lo lógico es que todo ello sea materia tanto de la propuesta del Gobernador, como de las discusiones en el seno del Legislativo, que es el que resuelve; nadie puede, en derecho, pensar de otro modo. Pero lo relevante de este método decisorio es que aquí el dictamen, si es que lo hay, no es el título sine qua non de la resolución en cuanto contiene la fundamentación y motivación que respalda formalmente su constitucionalidad ante un órgano revisor, como sucede en la esfera federal. Esto, porque en el sistema de Michoacán, la aprobación o reelección de magistrados, como acto complejo, culmina con la decisión de la Legislatura local, en contra de la cual ya no hay ningún recurso. Si hay un título formal del magistrado, éste será la aprobación o la reelección por parte del Congreso, sin necesidad de que para su validez

SECRET
SECRET
SECRET

se le exija un dictamen como si fuera un consejo de la judicatura.

El artículo 72 de la Constitución local establece que los magistrados durarán tres años en su cargo y que si son reelectos, serán inamovibles con las restricciones relativas, disposición esencialmente igual a la anteriormente en vigor.

Ahora bien, la reelección no solamente es expresa, sino también tácita, como se infiere del artículo 80 de la citada Constitución, al establecer que los magistrados continuarán en sus funciones aunque haya fenecido su período constitucional, mientras no se presenten los nuevamente nombrados; la interpretación de reelección tácita es razonable, pues si llegada la extinción del período, ni el Gobernador propone a otra persona, ni el Congreso da de baja al magistrado, es lógico deducir que el ya aprobado continúa en funciones por los mismos



méritos de su nombramiento original y, además, por la comprobación del buen desempeño durante su ejercicio.

Por tanto, considero que si el quejoso, después de haber sido propuesto y aprobado como magistrado, fue reelecto tácitamente en varias ocasiones, ello le da derecho automáticamente a la inamovilidad en los términos del artículo 72 de la Constitución de Michoacán, sin necesidad de ningún dictamen -como dice el voto de minoría-, ya sea del Gobernador o de la Legislatura; tampoco de la Suprema Corte.

Se dice esto último porque el voto mayoritario, después de asentar que para la validez de la aprobación del Congreso local se requiere de un dictamen, otorga el amparo y declara que el quejoso es inamovible cuando no existe ese dictamen, a menos que se tome como tal la propia sentencia de amparo, aunque ésta, como es natural, estudia cuestiones propias de la acción de



constitucionalidad que se deduce, y no los méritos personales del quejoso.

Voto, por tanto, por otorgar el amparo, mas por las consideraciones que aquí asiento.


MINISTRO JUAN DIAZ ROMERO



